UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
Tesis Licenciatura en Trabajo Social

Cárceles:
¿lugares de rehabilitación?

Michele Chifflet Amoretti

Tutor: Carolina González Laurino

2002

Indice

Introducción	1
Capítulo 1. Enfoques teóricos sobre las causas del delito	3
Capítulo 2. La pena privativa de libertad	9
Capítulo 3. Funciones de la pena privativa de libertad	13
Capítulo 4. Cuestionamientos al concepto de rehabilitación	20
Capítulo 5. Situación de las cárceles en el Uruguay	39
A) Dependencia orgánica	39
B) Situación Carcelaria	44
Capítulo 6. Algunas propuestas alternativas	67
Reflexiones finales	78
Anexo I. Testimonio de la madre de un recluso fallecido	79
Anexo II. Carta de un recluso que denuncia malos tratos en la represión de un supuesto motín ocurrido el 5 de mayo, refutando versión oficial	87
Anexo III. Recomendaciones de la Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina	91
Anexo IV. Proyecto de ley Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario	95
Anexo V. Proyecto de ley de Creación del Instituto Nacional de Rehabilitación	101
Anexo VI. Entrevista al señor Diputado Díaz Maynard	107
Anexo VII. Entrevista a la Asistente Social Teresita Reyes	111
Bibliografía	116

Introducción

Cíclicamente en los establecimientos carcelarios de nuestro país se producen hechos que conmueven la opinión pública: una huelga de hambre, una protesta o un motín ganan la primera plana de los medios de comunicación y el problema se debate -no siempre profundamente-, pero al poco tiempo desaparece de la atención sin que se haya avanzado en soluciones o caminos alternativos.

Ya en 1890 Kropotkine decía: *“De todo se habla en la prensa, que, sin embargo, casi nunca se ocupa en nada que a las prisiones se refiera. Si alguna vez se habla de ellas, no es sino a consecuencia de revelaciones más o menos escandalosas. En tales casos, por espacio de quince días se grita contra la administración, se piden nuevas leyes que vayan a aumentar el número, nada bajo, de las vigentes, y pasado aquel tiempo, todo queda igual, si no cambia y se hace peor.- En cuanto a la actitud regular de la sociedad y de la prensa respecto a los detenidos, no pasa de la más completa indiferencia (...) Porque todos recordamos lo que la prensa dijo no ha mucho, con motivo de algunas mejoras introducidas en el régimen de las prisiones. ‘Es demasiado lujo para los pícaros’, se leía en periódicos que se las echaban de avanzados. ‘Nunca serán tratados tan mal como se merecen’”*.¹

Y en el 2000 la doctora Cristina Freigedo comentaba que en el Uruguay siempre hubo problemas en el sistema carcelario y decía: *“Ocurre que nunca existió voluntad política clara, nunca hubo rubros, porque a la sociedad sólo le interesan los presos cuando su problemática puede afectar la seguridad ciudadana; mientras ello no ocurra no le importan”*.²

Sin embargo, a partir del 1º de marzo de 2002, fecha en que se produjo un gran motín en el Penal de Libertad, algunos sectores de la sociedad parecen estar tomando conciencia de que el sistema carcelario no cumple con los cometidos constitucionales y se ha convertido en un problema grave que merece una especial atención.

En nuestro país se han realizado periódicamente distintos informes y diagnósticos acerca de la situación carcelaria y todos ellos demuestran que la realidad se ha ido agravando hasta el punto de que algunos analistas llegan a considerar las cárceles como verdaderos campos de concentración.

¹ Kropotkine, P. *Las prisiones*. F. Sempere y C. Editores, Valencia. 1890. Págs. 9 y 10.

² Cristina Freigedo. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 18 de mayo de 2000. Pág. 5.

El informe del Parlamento Latinoamericano expresa que *“Bajo el pretexto del legítimo derecho a la seguridad que reclaman los ciudadanos, en no pocos países de la región, las cárceles se transforman en depósitos de personas ante la ausencia de políticas penitenciarias”*.³

Por tanto, considerando que la mayor parte de las publicaciones uruguayas sobre este tema provienen del ámbito jurídico, y reconociendo que la intervención pública frente a los fenómenos de la delincuencia y la reclusión, son temas relegados en las Ciencias Sociales de nuestro país, este trabajo se plantea analizar la situación penitenciaria desde una perspectiva social.

La relevancia del tema radica, además, en que el ámbito carcelario demanda, de manera creciente, la intervención de trabajadores sociales, por lo que resulta imprescindible plantear una reflexión que contribuya a elaborar un marco teórico que apoye la práctica de los profesionales insertos en instituciones públicas de control social.

A pesar de que no se pretende realizar un análisis exhaustivo, se trata de introducir el tema en el debate de las Ciencias Sociales porque, a pesar de que existe práctica profesional en áreas vinculadas con la temática carcelaria, ella no se ha visto reflejada en producción teórica o publicaciones que brinden elementos para la discusión y la praxis.

Este trabajo se propone analizar si las actuales cárceles uruguayas constituyen un lugar de rehabilitación considerando, en especial, la realidad de los principales establecimientos de reclusión que alojan a la población masculina, donde la situación es más grave.

Se partirá de la hipótesis de que las condiciones actuales de las cárceles del Uruguay no contribuyen a la reinserción social de los reclusos.

³ *Informe Carcelario del Parlamento Latinoamericano. Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina*. 2000. P. 5.

Capítulo 1

ENFOQUES TEORICOS SOBRE LAS CAUSAS DEL DELITO

La pregunta relativa a los motivos que llevan al hombre a delinquir ha tenido diferentes respuestas a lo largo de la historia, las que reflejan la reacción de la sociedad ante el delito, de acuerdo con la que se determina la sanción a imponer y, por ende, la pena y la atención que se brinda al delincuente, así como las acciones sociales e institucionales que se instrumentan.

Al analizar los diferentes enfoques que han desarrollado las teorías criminológicas al respecto, comprobamos que paulatinamente se fueron abandonando las teorías monocausalistas como explicativas de la etiología delictiva, *“siendo prácticamente unánime en el momento actual la aceptación de la causación múltiple”*⁴ de manera tal que *“contemporáneamente se ve el problema criminológico no tanto ni prevalentemente como un asunto individual del sujeto que ha delinquido, sino, más bien, como un fenómeno socio-político”*.⁵

De todos modos, resulta ilustrativo realizar un breve repaso de lo planteado por las principales corrientes criminológicas, ya que muchas de ellas continúan prevaleciendo actualmente, de manera implícita, en las instituciones que conforman el sistema penal uruguayo.

Entre los Precursores de la criminología científica se puede citar a Della Porta, quien en 1640 escribió su Tratado de Fisiognomía, en el que por primera vez se analizaban, en forma sistemática, las relaciones entre el rostro y el carácter del sujeto. Asimismo Lavater realizó (en el año 1776) un estudio de craneometría en el que estudiaba las protuberancias o depresiones craneanas y según su desarrollo irregular deducía las tendencias al crimen y a la moralidad.

Como consecuencia de tales tesis el criminal era considerado un enfermo, por lo que la pena debía ser una especie de remedio, y si el individuo aparecía como incurable, debía ser eliminado de la sociedad por reclusión perpetua o pena de muerte.

En 1838 Esquirol, en su *Tratado de Enfermedades Mentales*, sostuvo que el acto criminal solo podía realizarse bajo la influencia de una concepción delirante y concluía

⁴ Miguel Langón Cuñarro. *Criminología. Historia y Doctrinas*. Ediciones Jurídicas Amalio M. Fernández. Montevideo, 1981. P. 13.

⁵ Idem. P. 13.

que si los criminales actuaban bajo una impulsión irresistible, no debían ser considerados como responsables de sus actos.

La concepción antropológica fue desarrollada principalmente por Lombroso. En su época se trataba de determinar si era posible reconocer a los criminales antes de que hubiesen cometido un delito, a fin de prevenir el crimen y defender la sociedad, por lo que realizó un estudio anátomo-morfológico del delincuente (1876) y concluyó que este constituía una involución o supervivencia de la época salvaje del hombre primitivo. Más adelante (1886) descubrió otro factor causal de la criminalidad: la epilepsia, lo que lo llevó a considerar el crimen como una variedad del ataque epiléptico en el que las convulsiones eran sustituidas por impulsos violentos e irresistibles al delito.

Al diferenciar al delincuente de ocasión, en el que los factores ambientales actúan como causas generadoras de delito, del delincuente verdadero o nato, para el que el mundo que lo rodea solo es el motivo desencadenante de su predisposición innata, en cierta manera reconoce –aunque restándole importancia- las causas sociales de la delincuencia.

Esta corriente debió enfrentar duras críticas que, entre otras cosas, demostraban que no existían diferencias morfológicas notorias entre los delincuentes y los no delincuentes.

Por su parte la concepción sociológica planteó con mayor énfasis el factor social como causa –inclusive única- de la criminalidad. Al respecto pueden citarse estudios sociológicos, sin duda influenciados por el pensamiento de Durkeim.

Quetelet, por ejemplo, aplicó la ley de los grandes números (1831) y estudió el delito no exclusivamente “*como un problema individual sino como un fenómeno de masa, afirmando que los delincuentes se limitan a ejecutar los delitos preparados por la sociedad, concluyendo que la criminalidad es una ‘función representable matemáticamente, de los estados económicos y sociales del momento’*”.⁶

Para Lacassagne el delincuente también resultaba inseparable del “caldo de cultura”, es decir del medio social en que se desenvolvía, concluyendo que “*es la sociedad la que hace y prepara al criminal , y que, por tanto es la sola y única responsable de ello*”⁷ e, inclusive, llegó a sostener que “*las sociedades tienen los delincuentes que se merecen*”.⁸

⁶ Idem. P. 31.

⁷ Idem. P. 33.

⁸ Idem.

De esta manera queda de manifiesto que las condiciones económicas juegan un gran papel y que *"es la miseria la que produce el más grande número de criminales"*.⁹

A su vez, Tarde (en 1886), a pesar de introducir factores psicológicos entre las causas del delito –por lo que se lo considera antecesor de la escuela psico-social-, mantiene una concepción sociologista destacando la influencia del ambiente y considerando que *"la escuela del crimen es la plaza de la calle donde crecen los niños"*.¹⁰

Dentro de los teóricos de la sociología criminal es importante destacar que Ferri fue quien en 1877 sentó las bases de la concepción positivista de la responsabilidad social, siendo el primero en ofrecer una visión sintética del crimen, entendiéndolo como el efecto de múltiples causas: antropológicas o individuales, físicas y sociales. Como causas antropológicas consideraba, por ejemplo: sexo, edad, estado civil, ocupación, clase social, educación y particularidades constitutivas orgánicas o mentales. Entre las causas físicas consideraba la raza, el clima y la temperatura anual, por lo que formuló la ley térmica de la criminalidad según la cual los homicidios predominan en el mediodía en los países cálidos, mientras que los hurtos son propios del norte, que posee países y estaciones frías. Por último, dentro de las que entendía como causas sociales, incluía el aumento o disminución de la población, las migraciones, la opinión pública, la cultura, la religión, la naturaleza de la familia, la vida política, financiera y comercial, la producción y distribución de industrias, la policía, la educación, la legislación, etcétera.

Sostiene, entonces, que *"toda explicación unilateral es incompleta. No es posible separar en el delincuente la constitución orgánica (morfológica y fisiológica), de la constitución psíquica y de las condiciones del ambiente en que vive"*.¹¹

Dentro de la escuela médico-psiquiátrica resulta ilustrativo destacar el pensamiento de Heuyer, quien entiende que: como el carácter se fija en la adolescencia, determinado por condiciones del mundo exterior, *"la sanción penal debería ser sustituida por tratamientos reeducativos para la readaptación del individuo dejando de lado nociones de represión y pena"*, llegando a afirmar que *"la historia de la criminología no es más que un capítulo de la historia de la psiquiatría"*.¹²

Según esta visión también se entiende al delincuente como enfermo, lo que lleva a considerar el tema de la imputabilidad o no del individuo, teniendo en cuenta su

⁹ Idem.

¹⁰ Idem.

¹¹ Idem. P. 41

¹² Idem. P. 48.

capacidad jurídico penal o su capacidad de ser culpable, por lo que quienes presentan patologías psiquiátricas, por citar un ejemplo, resultan inimputables ya que no se los considera capaces de apreciar el ilícito.

La corriente de la criminología socialista, que se expande luego del triunfo de la Revolución Rusa de 1917, partiendo del pensamiento de marxista-leninista, sostiene que *“el origen y desenvolvimiento de la criminalidad en el mundo capitalista responde, en lo esencial, a la estructura de explotación que la clase burguesa dominante impone por medio, entre otros, de un perfeccionado instrumento de dominación como es el Derecho”*¹³. Y mientras que la tesis mayoritaria considera que el mejoramiento de las condiciones económicas de la población provocaría una reducción de la tasa de delincuencia, también es posible afirmar, *“aunque tal vez resulte paradójico, que el delito aumenta con la prosperidad”*, ya que *“la existencia de una situación de ‘desadaptación’ surgida de un conflicto entre el sujeto y la comunidad en la que vive, puede ocurrir tanto por exceso cuanto por defecto de medios para satisfacer las necesidades, que, como se sabe, son infinitas, pues crecen y aumentan a medida que son satisfechas”*.¹⁴

La escuela americana también vincula la criminalidad con las estructuras y procesos sociales. En ella, según el enfoque de las relaciones estructural funcionales, el crimen es considerado como un fenómeno inevitable, normal y hasta necesario. Y reflejando el concepto de solidaridad social de Durkheim, el crimen *“se explica por medio de la desaparición de la solidaridad social y la consiguiente anomia, vacío social señalado por la ausencia de normas y valores sociales”*.¹⁵

Según este punto de vista puede decirse que el delito y el crimen tienen una utilidad, porque atacan a la sociedad, y considera que una estructura resistirá más cuanto más atacada sea.

A la vez, dentro de esta corriente, y recogiendo pensamientos mertonianos, Cloward y Ohlin, en el libro *“Delincuencia y oportunidad”*, de 1960, consideran que *“la presión hacia el delito, resulta de la discrepancia entre expectativas y posibilidades legítimas de satisfacerlas, conflicto que se agudiza a medida que se baja en la escala social”*,¹⁶ siendo especialmente los jóvenes quienes se confrontan con esa realidad.

¹³ Idem. P. 53.

¹⁴ Idem. P. 57.

¹⁵ Idem. P. 62.

¹⁶ Idem. P. 64.

También dentro de la escuela americana el delito se entendió como expresión de un conflicto cultural, el cual aumenta en proporción a la velocidad del cambio social.

Los enfoques teóricos citados sin duda influyen en las actuales visiones sobre el tema, pero es importante resaltar que en América Latina no existe una teoría criminológica propia. Zaffaroni expresa su pensamiento al respecto diciendo *“En síntesis: carecemos de una teoría criminológica latinoamericana; nos vemos forzados a tomar elementos teóricos enviados desde los países centrales; somos conscientes de que esos elementos sólo nos pueden auxiliar a construir nuestras propias teorías”*.¹⁷

Un intento en tal sentido es el de Carlos Uriarte, quien oponiéndose al paradigma etiológico o de la defensa social, elabora un enfoque del paradigma crítico.

Para sintetizar su punto de vista resulta relevante citar algunas de las bases teóricas del modelo etiológico al que se opone. Según este: *“El delito –la infracción- es un acontecimiento natural (conducta) ante el cual la sociedad reacciona defendiéndose (enfoque de la defensa social), y que es necesario explicar científicamente, cualitativa y cuantitativamente.- El delincuente es un individuo, digamos, con cierta proclividad al delito. Esa proclividad puede estudiarse causal-explicativamente, inquiriendo acerca de circunstancias endógenas o exógenas que actúan con cierto mecanicismo detrás del delito (...). Ese circunstanciamiento hace del sujeto un ser diverso a la normalidad, un hombre delincuente.- (...) La intervención represiva del sistema penal se concreta institucionalmente en la restricción o privación de libertad (...) La intervención institucional con privación de libertad intenta trabajar sobre el individuo para reeducarlo, rehabilitarlo, resocializarlo, etc., esto es, trabajar sobre los factores que lo llevaron al delito. En general, la medida de la necesidad de resocializar (proclividad al delito) es la peligrosidad del sujeto; en última instancia la peligrosidad es un precipitado bio-psico-social, que permite apreciar en y a través del sujeto aquel circunstanciamiento exógeno/endógeno. En virtud de ello, la peligrosidad siempre termina biologizando la explicación del delito, por lo cual los factores sociales pasan a segundo plano.- La peligrosidad entendida de esta manera, requiere de un tratamiento, en el cual operan multiplicidad de disciplinas y discursos, cuyos saberes discurren en el marco causal-explicativo y que en la institución cerrada solo trabajan sobre los*

¹⁷ Eugenio Zaffaroni. *Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina (Primer Informe)* P. 75.

*aspectos endógenos. La criminología y los saberes que la componen se agotan, al cabo, en la clínica criminológica”.*¹⁸

Sin embargo, es necesario ir más allá de los enfoques tradicionales de las causas del delito porque, en general, ellos no consideran lo que Uriarte incluye en su elaboración del paradigma crítico en el sentido de que *“el concepto de delito involucra una construcción social punitiva. Esto es, se describe una conducta como delito y se le adscribe una sanción. Queda claro entonces que el delito es, ante todo, una definición legal, con lo cual descartamos la posibilidad no solo de la idea de delito natural, sino que también descartamos la posibilidad de que el delito tenga una ontología propia; esto es, que algo sea delictivo in sé”.*¹⁹

También resulta importante tener presente que si el delito es un concepto construido, difiere con las épocas y lugares, del mismo modo en que varían las reacciones frente a él.

Por ello es necesario analizar en qué contexto surge la pena privativa de libertad como una de las respuestas ante el delito.

¹⁸ Carlos Uriarte. *Control Institucional de la Niñez Adolescencia en Infracción*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1999. PP. 9 y 10.

¹⁹ Idem. P. 54.

Capítulo 2

LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

Tal como lo señala especialmente Michel Foucault en *Vigilar y Castigar*, cada época y cada sociedad tiene su estilo penal, de acuerdo con sus propios valores.

En toda una larga etapa de la historia los penados eran sometidos a suplicios, fundamentalmente mediante penas físicas, lo que llevó a Beccaria a afirmar que “*El asesinato que se nos representa como un crimen horrible, lo vemos cometer fríamente, sin remordimientos*”²⁰, en los juicios públicos. En ese entonces no importaba la persona del delincuente. Esos “actos públicos” eran una forma de mostrar a la sociedad las consecuencias que implicaba el haber delinquido y la pena era considerada “*como mera expiación, asociada a una idea más bien religiosa de la culpa*”.²¹

Con el transcurso del tiempo los castigos se fueron haciendo menos inmediatamente físicos. Se avanzó, así, hacia “*cierta discreción en el arte de hacer sufrir, un juego de dolores más sutiles, más silenciosos, y despojados de su fasto visible*”²². En unas cuantas décadas fue desapareciendo, en occidente, “*el cuerpo supliciado, descuartizado, amputado, marcado simbólicamente en el rostro o en el hombro, expuesto vivo o muerto, ofrecido en espectáculo*”.²³ En 1791, por ejemplo, el propio Guillotin estableció que “*a todo condenado a muerte se le cortará la cabeza*”²⁴, lo que implicó toda una nueva concepción, ya que fijó una muerte obtenida de un solo golpe y sin recurrir a suplicios prolongados. La guillotina, mecanismo rápido, marcó una nueva etapa de la muerte legal, aunque la revolución la revistió todavía de un gran ritual teatral, y durante años constituyó un espectáculo.

Los ideales de las revoluciones del S XVIII, con la consiguiente caída de la monarquía y el surgimiento del Estado de Derecho, tuvieron su reflejo en el Derecho Penal y en la aplicación de las penas. Ya no será el cuerpo el blanco mayor de la represión penal, y el castigo pasará a convertirse en algo más oculto del proceso penal.

A la vez, de acuerdo con el pensamiento de Beccaria, comenzó a reconocerse al delincuente como un hombre con derechos.

²⁰ Citado por Michel Foucault en *Vigilar y castigar*. Siglo XXI Editores. Décimasexta edición. México, 1989. P. 16.

²¹ Carlos Elbert. “*Historia y Crisis de la Pena de Prisión*”. Conferencia dictada en Colombia, setiembre de 1982. s/d P. 178.

²² Michel Foucault. *Vigilar y castigar*. Siglo XXI Editores. Décimasexta edición. México, 1989. P. 15

²³ Idem. P. 16.

Durante todo ese tiempo la privación de libertad fue una medida previa a la aplicación de la pena, la cual era fundamentalmente física. Pero *“El modelo carcelario se concreta como ‘pena’ en un momento cronológicamente sucesivo a su manifestación como lugar de práctica de la exclusión”*.²⁵ Es decir que primero surge la cárcel como institución y recién más adelante la reclusión se convierte en la pena más utilizada.

La generalización de la prisión tuvo lugar entre los siglos XVII y XVIII, aunque provenía de ideas e institutos ya existentes a fines del siglo XVI. Si bien existen diversas opiniones sobre su surgimiento, puede decirse que se generó *“a partir de las casas de trabajo (work-houses), con las que el orden burgués pretendiera afianzar la viabilidad y hegemonía del capitalismo acumulativo; primero con afán de domesticación laboral del confinado y propósito legitimador, a partir de una idea de consenso con la disciplina del trabajo productivo, y más tarde –dada la distorsión provocada en el mercado por esa mano de obra excedente-, como mero depósito de contención de marginados sociales, no integrados e imposibles de ser absorbidos por el saturado sistema de producción”*.²⁶

Pero, más allá de abundar en opiniones relativas a su surgimiento, resulta *“más práctico inquirir por los motivos que llevaron a concentrar grandes cantidades de personas en edificios cerrados, donde debían permanecer por períodos de tiempo más o menos largos”*.²⁷

Al respecto Foucault expresa que: *“En toda Europa, la internación tiene el mismo sentido, por lo menos en principio. Es una de las respuestas dadas por el siglo XVII a una crisis económica que afecta al mundo occidental en su conjunto: descenso de salarios, desempleo, escasez de la moneda”*.²⁸

De esta manera la pena carcelaria comenzó a ocupar un lugar preponderante, convirtiéndose en “la” pena principal. Investigando las posibles razones para ese acontecimiento, Pavarini también llega a la conclusión de que ese fenómeno *“refleja las necesidades internas del proceso de racionalización y formalización de un derecho penal burgués”*.²⁹ Este autor no niega las interpretaciones tradicionales brindadas por la filosofía y la historiografía jurídico-penal que sostienen que el empleo de la pena

²⁴ Idem. P. 20.

²⁵ Massimo Pavarini. *Los confines de la cárcel*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1995. P. 14

²⁶ Gonzalo Fernández. *Derecho Penal y Derechos Humanos*. IELSUR. Ediciones TRILCE. Montevideo, 1988. P. 107.

²⁷ Carlos Elbert. *“Historia y Crisis de la Pena de Prisión”*. Conferencia dictada en Colombia, setiembre de 1982. s/d P. 172.

²⁸ Citado por Carlos Elbert. Idem. P. 173.

privativa de libertad podría ser entendido como un paso más en el proceso de “humanización” del sistema criminal. Sin embargo, prefiere adherirse a la opinión de que este fenómeno es más bien una “*explicación para encontrar, sobre todo por razones utilitarias, una distinta ‘economía política’ del sufrimiento legal que pueda garantizar mejor el orden social*”.³⁰

Continuando su análisis Pavarini sostiene que “*Entre los siglos XVIII y XIX, el sistema de la casa de trabajo y de corrección revela su fracaso con relación a las tentativas de disciplinamiento forzado*”.³¹ Es entonces cuando “*el sistema jurídico-penal de raíz retributiva termina apropiándose de una práctica marcada por una cualidad no sólo ‘diversa’, sino ‘inconciliable’; ella es la disciplinaria*”.³²

Surge entonces el concepto de pena como retribución “*tendiente a que la privación o restricción de bienes jurídicos sea proporcional a una culpabilidad definida por criterios científicos y no morales*”.³³ ¿Por qué? Porque en el esquema de “*una sociedad productora de mercaderías y fundada sobre el intercambio de equivalentes, todas las formas de la riqueza social son reducidas, homogeneizadas en el común denominador del tiempo asalariado*”.³⁴ Bajo esta lógica hasta el mismo concepto de libertad cambia y se entiende que “*ella posee un valor económico porque está conectada con el valor económico del tiempo, un tiempo que por primera vez puede ser ‘económicamente’ medido, cuantificado. Esto explica por qué la necesidad retributiva encuentra su propia exaltación en la pena privativa de libertad*”.³⁵ La pena como retribución se refleja en la acción de privar al sujeto de un equivalente valor en libertad.

Entonces, tal como lo sostiene Elbert, resulta claro que “*el nacimiento de la pena de prisión estuvo ligado a problemas socioeconómicos de una coyuntura concreta de la historia europea. Sin embargo, no obstante que posteriormente la cárcel dejó de ser un simple medio de contención de hordas hambrientas, sobrevivió como institución, llegando hasta nuestros días (...) Así como la pena de muerte perdió por completo su primerísimo rango medioeval a favor de la cárcel, esta, una vez nacida, debió adaptarse al ritmo de los tiempos, conforme a los valores y necesidades de cada sociedad. En lugar de desaparecer, fue conservada por su eficacia intimidante o por su*

²⁹ Massimo Pavarini. *Los confines de la cárcel*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1995. P. 16.

³⁰ Idem. P. 17.

³¹ Idem. P. 18.

³² Idem. P. 19.

³³ Carlos Elbert. “*Historia y Crisis de la Pena de Prisión*”. Conferencia dictada en Comombia, setiembre de 1982. s/d P. 178.

³⁴ Massimo Pavarini. *Los confines de la cárcel*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1995. P. 17.

utilidad políticosocial, solo que adaptándola a ciertos valores humanistas vigentes. Así, vemos cómo cobra cada vez más peso la idea 'educadora', 'formadora', 'reformadora' o 'resocializadora de la pena de prisión'.³⁶ Estas últimas ideas comienzan a tener relevancia recién en la mitad del siglo XIX cuando, a la luz de la corriente positivista, comienza a analizarse al hombre que ha delinquido y, al surgir las diferentes interpretaciones mencionadas anteriormente, se concluye en que la privación de libertad no es suficiente por sí sola, sino que el individuo debe ser reeducado, resocializado o readaptado. Por consiguiente, bajo esta perspectiva, comienza a entenderse que la pena "tiene una finalidad retributiva y otra reformadora realizables a través de medidas de seguridad".³⁷

En síntesis, si bien puede decirse que la prisión es de antiguo origen, el objetivo que actualmente persigue es relativamente moderno. "Las cárceles fueron primitivamente lugares de tortura",³⁸ expresa Irureta Goyena y continúa diciendo: "El carácter de la prisión ha variado en nuestros días; lo que se exige de ella no es ya atemorizar por las acciones del sufrimiento, sino reformar al delincuente; de instrumento de suplicio y de venganza pública, se ha convertido en institución de reforma moral".³⁹ Es decir que ha cambiado sus objetivos iniciales pasando a cumplir otras funciones, tema que formará parte del análisis de este trabajo.

³⁵ Idem. P. 18.

³⁶ Carlos Elbert. "Historia y Crisis de la Pena de Prisión". Conferencia dictada en Comombia, setiembre de 1982. s/d P. 177.

³⁷ Idem. P. 178.

³⁸ José Irureta Goyena. "Exposición y crítica de nuestro régimen penitenciario". En: *La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, N° 12. Montevideo, 1909. P. 177.

³⁹ Idem. P. 177.

Capítulo 3

FUNCIONES DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD

Abordar el tema de las funciones de la pena privativa de libertad lleva a considerar, en primer término, la crítica que plantea la selectividad del sistema penal, la que formará parte del fundamento teórico del análisis.

Para ello es ilustrativo citar la opinión de algunos autores que reflexionan sobre el tema de la selectividad, considerando también el pensamiento de dos reclusos, que a pesar de estar expresado en forma muy breve, denuncia, implícitamente, ese mismo proceso. Un preso mexicano, en una de las paredes de su celda, escribió: *“En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se condena al delito, se condena a la pobreza”*.⁴⁰ Y, dejando traslucir igual modo de pensar, un preso uruguayo, Roberto Pierri, expresó a integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes: *“Mi primer delito fue haber nacido en un cantegril”*.⁴¹

Indagando teóricamente, también se encuentran opiniones similares. Por su parte, Gonzalo Fernández sostiene que *“En nuestro continente, el sistema penal aplica un reclutamiento selectivo de sujetos marginales, muy vulnerables, procedentes de los estratos más desfavorecidos de la sociedad. Y, por si fuera poco, dentro de la cárcel se reproduce y acentúa esa marginalidad social, reforzada mediante una enorme sobrecarga de violencia y una situación de abandono persistente”*.⁴²

Reflejando el mismo punto de vista Alessandro Baratta expresa *“La sociología jurídica penal y la experiencia cotidiana demuestran que el sistema punitivo dirige su acción principalmente hacia las infracciones de la parte más débil y marginal de la población”*.⁴³

Zaffaroni, a su vez, sostiene que *“No hay sistema penal que opere parejamente, porque todos son selectivos y todos hacen lo que es más fácil de hacer, que es echar mano de aquel al que es más fácil atrapar. Y ¿a quién es más fácil atrapar? Al que responde a determinado estereotipo. Un estereotipo que forman los medios masivos,*

⁴⁰ Citado por José Neumann. “Victimización carcelaria”. En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 36.

⁴¹ Roberto Pierri, citado en la versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 3 de julio de 2001. P. 12.

⁴² Gonzalo Fernández. “Crisis de la prisión y medidas alternativas”. En: *La Justicia Uruguaya*. Tomo CXI. P. 139.

⁴³ Alessandro Baratta. “Derechos humanos: entre violencia estructural y violencia penal”. En *Revista Nuevo Foro Penal*, N° 46. Colombia, 1989. P. 448.

que forman los prejuicios de toda índole, y en cada país existe un estereotipo del delincuente. Quien piensa en ellos piensa en alguien que tiene cierta cara, que tiene cierta edad, que tiene ciertas características personales”.⁴⁴

¿Por qué sucede esto? Porque el sistema penal actúa de manera tal que entre los objetivos que proclama en su discurso y la aplicación real, existe una brecha. En la teoría prevé una normativa con carácter abstracto, general e igualitario, que determina las conductas que deberán ser penadas pero, en la práctica, es posible comprobar un proceso de selectividad.

Gonzalo Fernández opina que *“Si desde el punto de vista lógico, el mito de igualdad ante la ley penal ya es objetable –sobre la base de que no puede existir igualdad tratando en forma igual a los desiguales- desde el punto de vista práctico, no hay duda de que la selección criminal no opera en forma igualitaria”*.⁴⁵

La selectividad tiene lugar porque el sistema penal interviene sobre un sector de violencia, limitado y construido como problema social de acuerdo con el concepto prevaleciente de criminalidad que, de por sí, es estructuralmente selectivo. *“La violencia de grupo y la violencia institucional son consideradas solo en relación con las acciones de personas particulares, y no en el contexto del conflicto social que ellas expresan. La violencia estructural y, en su mayor parte la violencia internacional, quedan fuera del horizonte del concepto de crimen”*,⁴⁶ y esto hace que la violencia criminal que se enfoque, sea solo una pequeña parte de la violencia que tiene lugar en la sociedad.

También resultan importantes los siguientes párrafos escritos por Gonzalo Fernández, en los que expresa que *“el sistema penal funciona seleccionando personas (y no conductas) de los sectores económica y socialmente desfavorecidos, y les criminaliza, aprovechando ciertos rasgos de labilidad, que inclinan a ese grupo de individuos a asumir el rol (la autoidentidad) desviada.- Esos sectores, donde el sistema penal recluta ininterrumpidamente su clientela, tienen un alto grado de vulnerabilidad al aparato penal; son constantemente ‘observados’ y rastrillados, a diferencia de lo que ocurre en los estratos superiores de la sociedad, donde existe una extrema tolerancia o apatía del sistema, con vínculos muy laxos –si no directamente inexistentes- de*

⁴⁴ Eugenio Zaffaroni. “La cárcel. Abordaje histórico filosófico.” En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 104.

⁴⁵ Gonzalo Fernández. *Derecho Penal y Derechos Humanos*. Ediciones Trilce. P. 71.

⁴⁶ Alessandro Baratta. “Derechos humanos: entre violencia estructural y violencia penal”. En *Revista Nuevo Foro Penal*, N° 46. Colombia, 1989. P. 447.

*vigilancia penal. Parece obvio que ese espíritu de laissez faire traduce la idea de que no están allí, en los estamentos superiores de población, los 'enemigos' del sistema.- Hay, en definitiva, una 'distribución diferencial de la inmunidad'; una selección arbitraria y antojadiza de candidatos criminalizables, que sin embargo no es errática sino intencionada, puesto que funciona de acuerdo a estereotipos, a selección de personas y no de conductas transgresoras".*⁴⁷

El hecho de que las cárceles de América Latina estén llenas de pobres no quiere decir que la pobreza sea la causa "sine qua non" del delito, sino una causa de criminalización que el propio funcionamiento del sistema penal se encarga de acentuar. Porque, como lo expresa Gonzalo Fernández, *"En todo caso, este cuadro sólo demuestra la certeza de esa ecuación 'criminalización-vulnerabilidad social' que rige la intervención penal. Dicha realidad viene a confirmar la selección del marginado como candidato arquetípico de la represión, en tanto el aparato penal no exhibe análoga eficiencia respecto de los estratos sociales superiores"*.⁴⁸

La selectividad del sistema penal es, entonces, reflejo directo de la estructura misma del sistema social y, por lo tanto, al considerar ciertas conductas criminales y dejar otras inmunes reproduce, en la mayoría de los casos, las *"desigualdades de las relaciones de propiedad y poder"*⁴⁹ existentes a nivel general.

Partiendo de este fundamento, es posible analizar las funciones de la pena privativa de libertad. Al respecto existen corrientes sociológicas que consideran que la privación de libertad cumple una función económica, estrechamente relacionada con el sistema de producción y las demandas planteadas por el mercado de trabajo, y hasta una función política encubierta anulando al delincuente como ciudadano y estigmatizándolo como enemigo social.

Comenzando por este último aspecto, podemos decir que la estigmatización es producto de la selectividad y si bien no puede afirmarse rotundamente que el etiquetamiento produzca conductas delictivas, debe reconocerse como un factor que tiene efectos generadores de delincuencia y resulta difícil de sobrellevar, convirtiéndose casi en un castigo extra.

Aller Maisonnave ejemplifica el proceso de estigmatización a que se ve sometido un detenido diciendo: *"al ser recluido en dependencias comienza un proceso*

⁴⁷ Gonzalo Fernández. *Derecho Penal y Derechos Humanos*. Ediciones Trilce. P. 70.

⁴⁸ Idem. P. 71.

⁴⁹ Alessandro Baratta. "Derechos humanos: entre violencia estructural y violencia penal". En *Revista Nuevo Foro Penal*, N° 46. Colombia, 1989. P. 448.

de señalamiento en el círculo de sus amistades, familiares, trabajo y toda persona ajena a estos grupos, pero que individualice al recluso. Será tildado de delincuente sin saber el grado de responsabilidad. Se presume que por el hecho de estar en la cárcel compromete a todos sus allegados. A tal punto se dan estos extremos que los más allegados, como por ejemplo sus familiares cercanos, sienten sobre sí esta marca de Caín que los individualiza.- Con respecto a la vida carcelaria el recluso sentirá, si es primario, una gran depresión anímica que en muchos casos puede arrastrarlo al suicidio. Deberá cumplir un proceso de adaptación a su nueva forma de vida y aceptar las diversas jerarquías internas de las cárceles. Es corriente ver reclusos con privilegios y mando respecto a otros. Estará sometido a una deficiente alimentación, sufrirá las inclemencias del clima, correrá serios riesgos de ser atacado sexualmente por los otros reclusos. Sin duda serán seres olvidados en las cárceles; puestos allí como despojos humanos. Estarán en un gran depósito de personas olvidadas por la sociedad.- Y es que a la sociedad le hace daño pensar en sus presos.- Estos son criminales que, salvo para los asistentes sociales, criminólogos, y algunas personas más, representan la vergüenza de la sociedad”.⁵⁰ Este pasaje demuestra cómo las cárceles se convierten en depósitos de personas, y cumplen la función social de aislamiento, contención y alejamiento de la sociedad de quienes allí se encuentran.

Las repercusiones de esta “función social” afectan al individuo inclusive más allá de su período de reclusión, ya que para el liberado resulta sumamente difícil desprenderse de ese estigma adquirido, y en ese sentido resulta pertinente citar el siguiente ejemplo que demuestra la discriminación laboral que debe enfrentar quien ya ha recuperado su libertad. “Cabe recordar la famosa experiencia de Schwarz y Skolnick, que comprobaron que de cien dadores de trabajo, uno de cada veinticinco se avino a contratar un liberado, notando la extraordinaria reticencia con que se manejaban incluso frente a un certificado judicial en que se aseguraba la absolución y la inocencia. En cambio, interrogaron a cincuenta y ocho médicos que tuvieron problemas penales por terapias equivocadas y a ninguno de ellos les había afectado su carrera”.⁵¹

⁵⁰ German A. Aller Maisonnave. “Comunidad social y cárcel”. En *Criminología y Derecho III. Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y Criminología*. Fondo de Cultura Universitario. Montevideo, 1992”. P. 33.

⁵¹ Eugenio Zaffaroni. *Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina (Primer Informe)* Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1984. P. 33, citando a R.D. Schwarz y Jeronme H. Skolnick, *Two studies of legal stigma* en H. S. Becker, *The other side*, London, 1964. PP. 103 a 117.

Pero además hay que destacar que el proceso de etiquetamiento se inicia aún antes de que el individuo delinca, Zaffaroni expresa que *“del estudio biográfico de los prisionizados resulta que su proceso de marginación se inicia mucho antes –en la infancia- y se proyecta hacia el futuro, lo que genera la fundada sospecha de que en la práctica el sistema penal ‘filtra’ personas y no conductas. En definitiva, se le trasmite al criminalizado que la selección es por su persona y no por su conducta, logrará condicionar su identidad en forma de asumir definitivamente el rol criminal. En investigaciones latinoamericanas se ha comprobado que en opinión de los familiares de condenados, el primer ‘factor’ de criminalización es la ‘persecución de las autoridades’”*,⁵² las que en lugar de controlar el delito terminan estimulándolo pues refuerzan un sentimiento de autoidentidad desviada y generan casi una profecía que se autorrealiza.

Por otra parte, la pena privativa de libertad también cumple funciones desde el punto de vista económico y político. Alessandro Baratta entiende que la pena no se destaca por cumplir las funciones instrumentales preventivas, disuasivas y represivas que declara –defendiendo los bienes jurídicos, reprimiendo la criminalidad y condicionando la actitud de los infractores potenciales o reales-, sino funciones latentes y simbólicas que en definitiva son económicas y políticas, pues *“contribuyen a reproducir las relaciones desiguales de propiedad y poder”*,⁵³ por lo que: *“Desde ese punto de vista, la pena se presenta como violencia institucional que cumple la función de un instrumento de reproducción de la violencia estructural”*.⁵⁴

Además, sostiene que la reclusión carcelaria actúa como una forma “secundaria” de marginación social, que sigue y refuerza la marginación “primaria” producto, entre otros elementos, de que la mayoría de los “clientes” carcelarios se encuentran fuera del mercado de trabajo. Es decir que, en los hechos, la privación de libertad cumple una función material de reproducción e institucionalización de la desigualdad social.

La selectividad que se verifica en el imaginario colectivo y también mediante la aplicación de la pena privativa de libertad, cumple –como lo explica Baratta en el siguiente párrafo- dos efectos principales de legitimación: *“en primer lugar, la legitimación de la misma forma selectiva de obrar el sistema, dado que el estereotipo de criminal corresponde sobre todo a las características de los individuos*

⁵² Idem. P. 18.

⁵³ Alessandro Baratta. “Derechos humanos: entre violencia estructural y violencia penal”. En Revista *Nuevo Foro Penal*, N° 46. Colombia, 1989. P. 449.

⁵⁴ Idem. P. 449.

pertenecientes a las clases más bajas y marginadas. En segundo lugar, una legitimación de las relaciones sociales de desigualdad, de la situación de desventaja de los grupos más bajos en la escala social, porque precisamente en estos grupos se encontrarían las tendencias a realizar acciones penalmente relevantes”.⁵⁵ Y explica que “en general, la imagen de la criminalidad, promocionada por la cárcel, y la percepción de ella como una amenaza para la sociedad debido a la actitud de personas y no a la existencia de conflictos en la sociedad, produce una desviación de la atención del público, dirigida en modo privilegiado al ‘peligro de la criminalidad’, antes que a la violencia estructural. En ese sentido, la violencia criminal adquiere para el público, el puesto que debería corresponder a la violencia estructural, y en parte contribuye a esconderla y mantenerla⁵⁶, lo que constituye una manera perversa de legitimar la injusticia en las relaciones sociales existentes.

Este hecho es el que lleva a Gonzalo Fernández a afirmar que “la cárcel nunca podrá ocultar que es una racionalización de la desigualdad, que el mismo Estado produce. La cárcel en el Uruguay es un reservorio o vertedero de marginados sociales producidos en las canteras de la miseria que el Estado no ha logrado subsanar”.⁵⁷ Y continúa diciendo: “Creo que también la cárcel tiene un imponente poder simbólico. La cárcel no se explica solo por los que tiene adentro reclusos, sino también por los que asusta afuera. La cárcel es un espantapájaros social, es un mundo sumergido en la opacidad. Ahí están los muros, para hacernos creer a quienes estamos fuera, que verdaderamente disfrutamos de libertad. (...) Desde luego se trata de un mundo al cual la sociedad ignora pero teme. (...) Creo que la cárcel no fracasa. Creo que esa brecha o dicotomía de discurso, objetivo proclamado y realidad, que suele verse como un fracaso, no es tal, es un éxito aunque no lo parezca. La cárcel es funcional al sistema, cumple una muy importante función política para ‘vender’ la oferta de seguridad y para disuadir los focos de disidencia, los focos de contestación”.⁵⁸

Sin duda, entonces, puede decirse que la cárcel ha logrado convertirse en una herramienta funcional al sistema y a pesar de que siempre se ha dicho y demostrado que ha fracasado en los objetivos que proclama, sigue subsistiendo y es considerada como un mal necesario. Foucault refiriéndose a este último aspecto sostiene: “La afirmación

⁵⁵ Idem. P. 450.

⁵⁶ Idem.

⁵⁷ Gonzalo Fernández. “La función de la cárcel en el Uruguay de hoy”. En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 26.

⁵⁸ Idem. P. 27.

de que la prisión fracasa en su propósito de reducir los crímenes hay que sustituirla quizá por la hipótesis de que la prisión ha logrado muy bien producir la delincuencia, (...) producir el delincuente como sujeto patologizado”⁵⁹

Todo esto demuestra que el fin preventivo del sistema penal no logra ser cumplido, pero ¿qué sucede con el objetivo resocializador, proclamado por la “ideología del tratamiento”?

⁵⁹ Michel Foucault. *Vigilar y Castigar*. Siglo XXI Editores. Décimasexta edición. México 1995. P. 282.

Capítulo 4

CUESTIONAMIENTOS AL CONCEPTO DE REHABILITACION

Como hemos dicho, en la segunda mitad del siglo XIX empezaron a cobrar fuerza las intenciones de superar los objetivos de la pena privativa de libertad que apuntaban simplemente al castigo y a la represión del delincuente, tomando relevancia los fines relacionados con el tratamiento del recluso y su rehabilitación.

Sin embargo, en los años setenta el pensamiento resocializador debió comenzar a enfrentar críticas y cuestionamientos que continúan planteándose, por lo cual no puede decirse que se trate de un concepto superado.

Prueba de ello es el artículo 26 de nuestra Constitución que –luego de establecer que “*A nadie se le aplicará la pena de muerte*”- expresa: “*En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito*”, espíritu que también se ve reflejado en leyes y normativas que apuntan a la reeducación, rehabilitación, resocialización o reinserción del recluso.

Pero ¿qué se entiende por resocialización?

Y aquí es donde se encuentra la primera dificultad porque, tal como se expresa en el informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario, las normas legales que se refieren a la resocialización –como por ejemplo el Decreto-Ley N° 14.470- manejan “*en forma errática conceptos indefinidos e indefinibles que finalmente resultan vacíos de contenido*”⁶⁰ y menciona como ejemplo los términos rehabilitación, reeducación y adaptación social, entre otros.

Resulta necesario, entonces, acudir a definiciones de quienes han analizado este tema. Carlos Uriarte, por ejemplo, expresa que normalmente se considera que resocializar “*es prevenir la ocurrencia de futuras conductas delictivas, a través del tratamiento institucional del infractor, tendiente al cambio de sus valores y actitudes, como forma de lograr que se conduzca en el futuro sin cometer delitos. Se habla también, indistintamente, de rehabilitar, readaptar, reeducar, reintegrar, reinsertar,*

⁶⁰ Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario. Montevideo, 1996. P. 3.

recuperar, cuyos términos, al igual que el de resocializar, hacen referencia a la adecuación del individuo a la normalidad de la vida social”.⁶¹

Antonio Buteler sostiene que “La resocialización no es otra cosa que la búsqueda de un proceso de afianzamiento de los valores del cuerpo social en la persona que ha cometido un delito. Es decir el fortalecimiento del proceso de vínculos en el entramado social que permitan insertar su conducta conforme a las pautas del medio. La resocialización tendería entonces a la fortificación de los vínculos sociales primarios y secundarios del individuo”.⁶²

Carlos Uriarte recuerda, también, que la resocialización “está diseñada para operar dentro de las instituciones (...) y constituye por excelencia el discurso de las instituciones cerradas”.⁶³

¿Cuáles son, entonces, las críticas que se le plantean al concepto de rehabilitación y a sus sinónimos -o a lo que en varias de sus obras Zaffaroni llama las ideologías “re”- y a su instrumentación en el marco de la pena privativa de libertad, que es la dirección en la que se orientará el análisis?

Como primera aclaración es necesario considerar que los cuestionamientos que surgen frente a este concepto, son variados y de diferente nivel pues se oponen tanto al objetivo rehabilitador como al medio a través del cual se pretende llegar a él.

Es decir que, por un lado, es posible considerar las críticas que se le plantean al paradigma rehabilitador, debido a varios de los supuestos que implica. Y por otra parte, aquellas que teniendo en cuenta que el objetivo rehabilitador se pretende lograr desde la cárcel –entre otros ámbitos-, cuestionan a esta en sí misma, como institución total que produce efectos desocializadores sobre los individuos en ella recluidos.

Cuestionamientos al paradigma rehabilitador

Dentro de este grupo de cuestionamientos también pueden encontrarse varios argumentos de muy distinto nivel, que critican desde la ambigüedad del concepto, hasta los supuestos implícitos en él.

⁶¹ Carlos E. Uriarte. *Control Institucional de la Niñez Adolescencia en Infracción*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1999. P. 74.

⁶² Antonio Buteler. “Sobre la pena de prisión”. En *Criminología y Derecho III. Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y Criminología*. Fondo de Cultura Universitario. Montevideo, 1992. P. 12.

⁶³ Carlos E. Uriarte. *Control Institucional de la Niñez Adolescencia en Infracción*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1999. P. 74.

En primer lugar se sostiene que la rehabilitación es un concepto excesivamente ambiguo y falto de concreción, ya que las normativas que lo incluyen no lo definen con precisión.

Además, como lo explica Mir Puig, *“existen concepciones bien diversas de la resocialización: desde las que se han denominado ‘programas máximos’, que pretenden una fuerte incidencia en la personalidad del sujeto, en su escala de valores y en su actitud ética, hasta las que se definen como ‘programas mínimos’, que se limitan a perseguir que el sujeto sea capaz de respetar externamente las leyes”*.⁶⁴

En este sentido este autor se manifiesta en contra de los programas máximos expresando que *“debe empezarse por rechazar cualquier intento de tratamiento impuesto contra la voluntad del afectado. Ello presupone que no va a poder imponerse una agravación de la condena por exigencias de resocialización. Por otra parte, tampoco es admisible una concepción del tratamiento como destinado a manipular la personalidad”*,⁶⁵ pues considera que *“El Derecho penal no ha de invadir el terreno de la conciencia”*.⁶⁶

Por otro lado, frente a los programas mínimos surge el argumento de que las leyes en sí mismas representan valores dominantes que pueden no ser compartidos, por lo que intentar resocializar a un individuo para el respeto de la legalidad también resulta cuestionable.

En segundo término, se discute la legitimidad de la rehabilitación, tanto desde las posiciones liberales como desde las críticas.

Según la concepción clásica, el Derecho Penal debe procurar limitar la potestad punitiva del Estado y para ello el Derecho no debe castigar personalidades ni formas de ser, sino solo hechos o conductas que la ley pueda tipificar. Entonces, como la función de resocialización apunta al individuo y no al hecho, se requiere un tratamiento personalizado, que se adapte a las características de cada sujeto, con lo que desde el punto de vista clásico no se está de acuerdo.

También desde la criminología crítica, el psicoanálisis y la teoría del etiquetamiento o labeling approach, se plantean cuestionamientos. Más allá de sus importantes diferencias y de provenir de universos teóricos distintos, estas corrientes coinciden en el entendido de que es la sociedad, y no el delincuente, lo que es necesario

⁶⁴ Santiago Mir Puig. “¿Qué queda en pie de la resocialización?” En *Colombia. Análisis socio-jurídicos*. (1) Julio 1990. P. 36.

⁶⁵ Idem. P. 38.

⁶⁶ Idem.

cambiar. *“Es la sociedad la que genera la delincuencia, por lo que no tiene sentido tratar de adaptar al delincuente a dicha sociedad criminógena. Es la sociedad la que debe ser resocializada”*.⁶⁷

Sintetizando estas teorías y esquematizándolas en una sola frase, es posible decir que desde la perspectiva del etiquetamiento se considera que la criminalidad no es producto de una cualidad intrínseca del delincuente, sino de un proceso de estigmatización social criminalizador, por el cual se etiquetan determinadas conductas. El psicoanálisis, por su parte, sostiene que el delincuente no es más que el chivo expiatorio en el cual la sociedad proyecta sus culpas. Y la criminología crítica, partiendo de una perspectiva marxista, entiende que el Derecho penal burgués representa la defensa de los intereses de la clase dominante, por lo que recae, de manera discriminatoria, sobre el proletariado. Es decir que estas corrientes consideran que la causa del delito está en la sociedad y, por tanto, entienden que no tiene sentido procurar resocializar al delincuente en lugar de apuntar a cambiar la sociedad.

Por ese motivo Baratta sostiene que *“Antes de querer modificar a los excluidos es preciso modificar la sociedad excluyente, llegando así a la raíz del mecanismo de exclusión. De otro modo subsistirá, en quien desee juzgar de modo realista, la sospecha de que la función verdadera de esta modificación de los excluidos es la de perfeccionar y volver pacífica la exclusión, integrando, más que a los excluidos en la sociedad, a la relación misma de exclusión en la ideología legitimadora del estado social”*.⁶⁸

En tercer lugar, el concepto de rehabilitación implica varios supuestos que resultan sumamente cuestionables.

Uno de ellos es el de que la pena privativa de libertad se aplica a quienes han cometido un delito. Sin embargo, partiendo de la ya explicitada selectividad del sistema penal, ese argumento no resulta del todo válido. Y al respecto el punto de vista de Zaffaroni resulta ilustrativo, pues el sostiene que *“Las ideologías ‘re’ partían el supuesto de que la prisionización tenía por causa el delito; hoy sabemos que tiene por causa la torpeza en la comisión de delitos, porque son infinitamente más las personas que cometen delitos de otra manera y no están prisionizadas. Hoy sabemos que la prisionización no es el resultado automático de la comisión de delitos, sino*

⁶⁷ Idem. P. 112.

⁶⁸ Baratta. *Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal*. Editorial Siglo XXI Editores. Segunda Edición. México, 1989. P. 197.

*consecuencia de la vulnerabilidad de esas personas a la acción selectiva del sistema penal en razón de que responden a estereotipos criminales”.*⁶⁹

La rehabilitación implica también el supuesto de que el individuo que comete un acto delictivo y es procesado, ha tenido acceso a una socialización previa acorde con lo aceptado por la sociedad, ya que si se pretende rehabilitar o resocializar, se está dando por sentado que en algún momento hubo habilitación.

Al respecto, la Asistente Social Teresita Reyes, que se desempeña en el Instituto Nacional de Criminología, nos decía que *“Si se considera el tema de la rehabilitación y se observa la mayoría de la población carcelaria actual, hay que pensar en qué momento estuvo habilitada. Porque, en su mayoría, se trata de una población que transcurre su infancia y su adolescencia –cuando no institucionalizada- en un contexto crítico, absolutamente desfavorable, que propicia desde el nacimiento –o muchas veces desde antes- determinado marco de sobrevivencia que hace pensar hasta dónde es válido hablar de rehabilitación. Porque, qué habilitación existe en ese momento para desarrollar comportamientos socialmente aceptados. Entonces, ese adulto o joven entra a la cárcel para ser “rehabilitado”, entre comillas, es decir para ser devuelto al mismo medio que, de alguna manera, lo envió a la cárcel”.*⁷⁰

Es decir que la mayor parte de la población carcelaria actual se ha socializado en contextos de marginación social y parte de un lugar cercano al de la exclusión social al que, además, seguramente volverá luego de ser “socializada” en el medio carcelario. Porque, como lo expresa Neumann, *“Hablar de readaptación social implica que los reclusos han estado adaptados en libertad. ¿Adaptados a qué? Si partimos de la base de la selectividad penal, deberíamos contestar: a la pobreza crítica y a la marginación social, es decir, al hambre, falta de hábitat y a todo tipo de carencias”.*⁷¹

Por otra parte, teniendo en cuenta los casos minoritarios no contemplados en la argumentación anterior, también resultaría cuestionable pretender resocializar a los delincuentes de cuello blanco que, por ejemplo, cometen delitos relacionados con *“los abusos de poder estatal, la falsificación de medicamentos y alimentos, la polución de la tierra, atmósfera y aguas, venta de armas de guerra, y otros delitos no tradicionales*

⁶⁹ Eugenio Zaffaroni. “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 190.

⁷⁰ Entrevista realizada a la Asistente Social Teresita Reyes, del Instituto Nacional de Criminología. Anexo VII. P. 1.

⁷¹ Neuman, José. “Victimización carcelaria”. En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 34.

como la venta de órganos humanos y sangre humana”,⁷² cuyos autores -como sostiene Elías Neumann- esporádicamente llegan al banquillo de los acusados, porque “en las cárceles están siempre los mismos, los delincuentes fracasados”.⁷³

Entonces, en esos casos no parece válido ni lógico procurar brindar herramientas que contribuyan a la resocialización, porque, tal como lo dice Neuman en una conversación con un periodista, “¿cómo podríamos pretender readaptar a un delincuente económico, que suele estar más socializado que nosotros? Es una falacia”.⁷⁴

Similar punto de vista es sostenido por Luis Niño, quien considera que tampoco parece adecuado aspirar al objetivo resocializador en casos de delincuentes que se encuentran adaptados a los estándares de vida de la sociedad capitalista, por lo que sostiene que “la resocialización de un delincuente de ‘cuello blanco’ parece superflua. Tan insertos están en la trama social que llegan a cultivar sus oficios muy cerca de los despachos presidenciales o ministeriales”.⁷⁵

Otro de los supuestos de la rehabilitación es el de la inferioridad moral, biológica, psíquica o social de quien ha cometido un delito y debe ser rehabilitado.

En este sentido, Zaffaroni sostiene que las ideologías “re” tienen “en común la consideración del penado como una persona con un handicap o minusvalía (moral, biológica, psíquica o social, según la circunstancia o el contexto)”.⁷⁶

Por este, entre otros motivos, Zaffaroni se manifiesta contrario a las ideologías “re”, considerando que, en definitiva, son autoritarias. Y por ello expresa: “Si yo postulo una ideología ‘re’ es porque me estoy poniendo en un plano de superioridad con respecto a la persona a la que tengo que ‘re’ socializar, ‘re’ personalizar, ‘re’ educar, porque yo soy el socializado, el educado, etc., y el otro es el que no está ni socializado, ni educado”.⁷⁷

⁷² Elías Neuman. “Encierro carcelario”. En *Los Derechos Humanos en el otro país*. Puntosur editores. Buenos Aires, 1987. P. 209.

⁷³ Idem.

⁷⁴ Elías Neuman. Reportaje realizado por Oscar Raúl Cardoso, publicado en Clarín digital el 30 de abril de 2000.

⁷⁵ Luis Niño. “Aspectos críticos de la realidad carcelaria: visitas, requisas y régimen disciplinario”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 109.

⁷⁶ Eugenio Zaffaroni. “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 184.

⁷⁷ Eugenio Zaffaroni. “Sentido y justificación de la Pena” En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 41.

Por otra parte el paradigma de la rehabilitación presupone un conjunto de valores ideales que sirven de referencia y a los que sería válido aspirar. Pero ¿cuáles son esos valores?

Carlos Uriarte considera que ese cuestionamiento no se resuelve en el marco de la prevención especial positiva y por ello se pregunta: “¿resocializar con arreglo a qué valores?; ¿cuáles son las actitudes que hay que cultivar en el infractor?; ¿cuál es la normalidad para la cual debe ser recuperado?; ¿en suma, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en la sociedad?”⁷⁸

En una sociedad pluralista existen patrones valorativos heterogéneos, que deben ser respetados. Entonces “¿qué pasa cuando los valores del sistema no concuerdan con los del individuo?. Es claro que, si en tal caso se insiste en transformar sus valores y creencias, la organización institucional tendrá su base en relaciones de dominio, de alienación, de dependencia, de injerencia y de desplazamiento de lo plural y diverso. La definición e imposición de normalidad es un hecho de poder, que se deslegitima en orden a derechos humanos, si no es adoptado consensualmente por la persona. En tal caso, la resocialización no consistirá en el aumento de posibilidades de desarrollo personal, sino en la imposición de una moral que es una inmoralidad en tanto vulnera la libertad de opción esencial a la dignidad humana”.⁷⁹

Cuestionamientos a la cárcel

Como hemos dicho, también surgen cuestionamientos frente al objetivo rehabilitador cuando el medio a través del cual se pretende llegar a él es la cárcel.

La resocialización resulta de por sí cuestionable, pero aún más en el medio carcelario, por lo que en varios de sus textos Carlos Elbert y Gonzalo Fernández citan el ejemplo de que educar a un individuo para la vida libre a través de la pena de reclusión carcelaria resulta más difícil que enseñarle a alguien a jugar al fútbol dentro de un ascensor. Porque, tal como lo explica Gonzalo Fernández, “La privación de libertad, al margen de su fundamentación ideológica, peca de un error lógico insalvable. En cuanto propuesta, la cárcel incurre en una falacia imposible de resolver, porque mal

⁷⁸ Carlos E. Uriarte. *Control Institucional de la Niñez Adolescencia en Infracción*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1999. P. 74.

⁷⁹ Idem. P. 75.

*puede prepararse a un individuo para la vida en libertad, amputándole tan luego la libertad”.*⁸⁰

En este sentido Antonio Buteler se pregunta cómo se pretende lograr la resocialización y entonces observa que *“Se busca mediante el aislamiento. La profundización de los vínculos, y la mejoría de los vínculos sociales, se busca con la destrucción o el deterioro del vínculo, produciendo el aislamiento en instituciones en las cuales conviven, lejos de con los valores que el cuerpo social presenta como propuesta o como proyecto colectivo de vida, con los valores que yo denomino de la ‘cultura de la transgresión’”.*⁸¹ Pues también es necesario tener en cuenta que *“en las prisiones domina la llamada ‘subcultura carcelaria’, caracterizada por ciertos valores y normas radicalmente opuestos a la actitud de colaboración imprescindible para conseguir el clima propicio para un tratamiento resocializador”.*⁸² Es decir que teniendo en cuenta los valores culturales predominantes en el medio carcelario -correspondientes a la *“cultura de la imposición, con una profanación constante de la vida personal del recluso”*⁸³- se hace imposible sostener el discurso resocializador como fundamento de la pena de prisión.

Efectos desocializadores de la cárcel

Darío Giró, el líder de la “Banda de la granada” que asaltó la sucursal Rondeau del Banco de Boston en febrero de 1993, quien actualmente cumple su condena en la Cárcel de Las Rosas, en el departamento de Maldonado, fue llevado preso por primera vez en Venezuela, donde cumplió una condena de seis años hasta que se probó su inocencia y se le pidieron disculpas por el hecho. El entiende que fue la estadía en la cárcel lo que lo convirtió en un delincuente profesional y expresa: *“Me pudría en esa cárcel. (...) No era sólo el robo de la libertad, la familia, la esperanza, me habían enviado a una escuela del crimen y obligado a hacer cosas que nunca hubiese imaginado. En cinco años había aprendido los secretos de la falsificación y del tráfico*

⁸⁰ Gonzalo Fernández. “Crisis de la prisión y medidas alternativas”. En *La Justicia Uruguaya* Tomo CXI. P. 139.

⁸¹ Antonio Buteler. “Sobre la pena de prisión”. En *Criminología y Derecho III. Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y Criminología*. Fondo de Cultura Universitario. Montevideo, 1992. P. 12.

⁸² Santiago Mir Puig. “¿Qué queda en pie de la resocialización?” En *Colombia. Análisis socio-jurídicos*. (1) Julio 1990. P. 38.

⁸³ Gonzalo Fernández. “La función de la cárcel en el Uruguay de hoy”. En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 26.

de drogas, del robo a mano armada, la prostitución, la rapiña y el homicidio. Al menos en teoría, estaba graduado”.⁸⁴

Este ejemplo demuestra que las cárceles no solamente no logran la reeducación o reinserción del recluso, sino que resultan *“favorables a su estable integración en la población criminal. La cárcel es contraria a todo moderno ideal educativo, porque éste estimula la individualidad, el autorrespeto del individuo, alimentado por el respeto que le profesa al educador. (...) La educación alienta el sentimiento de libertad y espontaneidad del individuo; la vida en la cárcel, como universo disciplinario, tiene un carácter represivo y uniformante”*.⁸⁵

El recluso es sometido a un proceso de socialización negativo o de desculturización, porque además de desadaptarse de las condiciones necesarias para la vida en libertad -pues no se respeta su voluntad, y se le hace perder su sentido de responsabilidad desde el punto de vista familiar, social, económico, político-, es insertado en un proceso de prisionalización, pues debe asumir las actitudes, comportamientos y valores de la subcultura carcelaria. El prisionero ingresa en una institución total bajo condiciones que implican un proceso de despersonalización, ya que además de perder su más absoluta intimidad, *“se lo trata de disciplinar de inmediato mediante un sistema coercitivo. Se lo aísla en el sentido de no permitir conductas externas a la par que se dispone de su tiempo. Debe forzosamente adaptarse a situaciones y coacciones que se generalizan y que pretenden legitimar la utilización del medio cárcel como un instrumento para la subordinación y dominación”*.⁸⁶

Elías Neuman considera que *“En la cárcel se regula una forma impuesta de vida y esta circunstancia de por sí, hace estéril la proposición del llamado tratamiento y retórica la llamada readaptación social del delincuente y su reinserción en el medio social”*.⁸⁷

Esto sucede porque en la cárcel, de acuerdo con la racionalidad de las *“instituciones totales”* detalladas por Goffman,⁸⁸ se practica la mencionada cultura de la imposición. Y en ella *“A través de una vasta red disciplinaria, se le imponen al interno*

⁸⁴ Darío Giró. *Una joya por cada rata. Memorias de un asaltante de bancos*. Edición de Carlos María Domínguez. Editorial Cal y Canto. Montevideo, 2001. P. 32.

⁸⁵ Alessandro Baratta. *Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal*. Editorial Siglo XXI Editores. Segunda Edición. México, 1989. P. 194.

⁸⁶ Elías Neuman. “Cárcel y sumisión”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 143.

⁸⁷ Idem. P. 146.

⁸⁸ Erving Goffman. *Internados*. Ensayos sobre la situación de los enfermos mentales. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1984. P. 13.

reglas estrictas de convivencia, incrustándolo en un modelo de micro-sociedad rígido, de estructura verticalizada, hurgado por una vigilancia sistemática, que configura una auténtica instancia de sumisión. (...) Por ende, el producto terminal de la cárcel no es nunca un buen ciudadano –no podría serlo-, sino a lo sumo, un buen prisionero. Vale decir, el encarcelamiento moldea un sujeto dócil y obediente a las reglas inflexibles de la práctica penitenciaria, que entre otras cosas, provocan una constante profanación de su vida personal”.⁸⁹

Todo esto implica un efecto deteriorante en la personalidad del recluso, pues al reglamentársele todas las actividades que podía hacer en la vida libre, “el prisionizado vuelve a una etapa anterior de su vida, se lo retrotrae a una etapa en que todo eso no lo podía hacer libre y responsablemente como un adulto sino a una etapa de adolescente o preadolescente”.⁹⁰ De acuerdo con este punto de vista, el régimen carcelario es regresivo y, además, hay que tener en cuenta que está “enmarcado generalmente en pautas violentas (...) y de equilibrio inestable siempre peligroso”.⁹¹

Carlos Elbert considera que estas condiciones hacen que los presos “sientan la necesidad imprescindible de conformar una cultura propia de supervivencia, esto es, una subcultura, al margen de las reglas oficiales de la sociedad y el establecimiento”. Y entiende que “La misma puede apoyarse en la subcultura de procedencia y enriquecerse con el aporte carcelario, pero es casi seguro que en el marco de estas normas de convivencia se gesta definitivamente el criminal del futuro. A esto se llama fenómeno de criminalización o, lo que es lo mismo, carácter criminalizante de la prisión”,⁹² lo que también se ve confirmado a través de los altos índices de reincidencia.

En esa subcultura existen varios elementos a los que el recluso deberá adaptarse -además de las normas formalmente establecidas-, pues “el recluso no solo debe aprender lo explícitamente establecido dentro de la institución que hace a su régimen de vida, sino también aquello que no es explícito (lo no dicho) pero que también rige, marcando un campo de funcionamiento latente con sus propias normas”.⁹³ Entre esos elementos se encuentran, por ejemplo, los lenguajes y códigos de convivencia, así como

⁸⁹ Gonzalo Fernández. “Crisis de la prisión y medidas alternativas”. En *La justicia uruguaya*. Tomo CXI. P. 139.

⁹⁰ Eugenio Zaffaroni. “La cárcel. Abordaje histórico filosófico”. En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 106.

⁹¹ Idem.

⁹² Carlos Elbert. “Historia y crisis de la pena de prisión”. Conferencia dictada en Colombia, setiembre de 1984. s/d P. 178.

⁹³ Elizabeth Lippert. “Consecuencias psicológicas del encierro”. En *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 66.

la estructura de poder informal integrada por prisioneros que han logrado prestigio dentro de ese medio y que conviven con quienes representan el poder formal. Asimismo, deberá enfrentar la oposición que se produce, casi inevitablemente, entre la población carcelaria y el personal penitenciario, específicamente el policial.

Esa oposición en cierta medida se debe a que, en general, *“Los integrantes del aparato policial (...) integran los mismos sectores carenciados a los que pertenecen los criminalizados, con lo que se aumentan las contradicciones y antagonismos en el seno de dichos sectores”*.⁹⁴

Esto contribuye a que estos dos grupos se conciban como enfrentados y se manejen con estereotipos según los que, tal como lo explica Domínguez Vial, *“Para el personal los internos son delincuentes y por ende crueles, indisciplinados, indignos de confianza; para los internos el personal es tiránico, despótico y egoísta. El personal tiende a considerarse a sí mismo como representante de la normalidad, el derecho, el poder, la justicia; los internos como culpables, débiles y despreciables”*.⁹⁵

De esta manera se crea un clima de tensión y por ello Zaffaroni considera que *“El signo más notorio del comportamiento del personal penitenciario es la tensión (...) provocada por un cruce de temores, que a veces alcanzan la identidad de miedo”*.⁹⁶ Y cabe aclarar que no se trata de un miedo patológico sino real frente a elementos como el temor a que se lo pueda responsabilizar de problemas funcionales o disturbios, a que los prisioneros quiebren el status quo existente o puedan tener comportamientos agresivos imprevisibles, etcétera. Entonces sostiene que *“Todo este cruce de temores da por resultado comportamientos de carácter tensional, tendientes a privilegiar la seguridad sobre cualquier otro valor”* pues considera que el guardia de la cárcel piensa que *“Lo más importante es que no se me escape un preso, todo lo demás no importa. Más vale preso muerto que preso fugado”*.⁹⁷

Esta diversidad de factores configuran una realidad a la que el individuo recluido debe adaptarse porque, como ya decía Kropotkine en 1890 *“desgraciado del que no se somete si la operación del registro le humilla, (...) si deja ver el desprecio que le inspira el guardián que trafica tabaco, si parte su pan con el vecino, si tiene aún la suficiente*

⁹⁴ Juan Roballo. “Proceso Penal y Sistema Penal”. En *Entre Políticas Sociales y Políticas Criminales*. IELSUR. Montevideo, 1997. PP. 149 a 196.

⁹⁵ Andrés Domínguez Vial. *Policía y Derechos Humanos*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Santiago de Chile, 1996. P. 92.

⁹⁶ Eugenio Zaffaroni. “La cárcel. Abordaje histórico filosófico”. En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 107.

⁹⁷ Idem.

dignidad para irritarse al recibir un insulto, si es lo suficientemente honrado para rebelarse contra las pequeñas intrigas; la prisión será un infierno para él. (...) La más pequeña infracción de la disciplina, tolerada en el hipócrita, le hará objeto de los más duros castigos; será insubordinado. Y un castigo traerá otro. Se le conducirá a la locura por medio de la persecución, y por feliz puede tenerse si sale de la prisión de otro modo que en el ataúd”.⁹⁸ Y este punto de vista no está alejado de la realidad de hoy en día, porque Zaffaroni también demuestra que “Los índices de mortalidad y de morbilidad en la cárcel, como los de suicidio, son mucho más altos que en la vida libre. Las investigaciones han descubierto (...) que entre 10 y 20 veces más peligro tiene el preso que el que está libre. Si estuviéramos todos presos no sería más seguro, sino que por el contrario, sería mucho más inseguro. La institución carcelaria es mucho más insegura para la vida humana que la vida libre”.⁹⁹

Por otra parte, diversos autores concuerdan en atribuir al régimen carcelario un rol importante en las posibilidades de reincidencia de quien ha estado recluido. Irureta Goyena sostiene, sin ambages, que “El criminal da el primer paso, y la cárcel le hace dar los demás”.¹⁰⁰ Foucault, por su parte, también sostiene que, lejos de disminuir la tasa de criminalidad “La detención provoca la reincidencia. Después de haber salido de prisión, se tienen más probabilidades de volver a ella (...) La prisión no puede dejar de fabricar delincuentes. Los fabrica por el tipo de existencia que hace llevar a los detenidos”.¹⁰¹

Por estas razones resulta claro el pensamiento del profesor de sociología D. César Manzanos Bilbao, “quien expresa que a su juicio ‘se trata de resocializar las estructuras carcelarias, y en un sentido más amplio las estructuras jurídicas, para evitar los efectos desocializadores que provoca en el preso y su familia’, concluyendo que ‘esto supone desarrollar una estrategia de progresivo reduccionismo en la aplicación de la sanción carcelaria’”.¹⁰²

⁹⁸ Kropotkine, P. *Las prisiones*. F. Sempere y C. Editores, Valencia. 1890. P. 33.

⁹⁹ Eugenio Zaffaroni. “La cárcel. Abordaje histórico filosófico”. En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 106.

¹⁰⁰ José Irureta Goyena. “Exposición y crítica de nuestro régimen penitenciario”. En: *La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración*, Nos. 12 a 17. Montevideo, 1909. P. 198.

¹⁰¹ Michel Foucault. *Vigilar y castigar*. Siglo XXI Editores. Décimasexta edición. México, 1995. P. 270.

Cárcel como espacio de violación de los derechos humanos

Por los motivos expuestos, y tal como lo expresa Baratta, *“La cárcel es un lugar privilegiado de violación de derechos humanos”* y aun *“la cárcel que respondiera a los standards mínimos establecidos por los acuerdos internacionales para tutelar los intereses del condenado –o sea, la cárcel que prácticamente no existe-, produciría un estado de privación y sufrimiento que se extendería más allá de la persona del detenido, hasta su ambiente social más cercano”*.¹⁰³

Esto se debe a que la cárcel es estructuralmente generadora y reproductora de violencia. Ella constituye *“una respuesta de fuerza. Sin duda la cárcel en sí misma es violencia. Violencia que se descarga sobre el infractor o el presunto infractor”*.¹⁰⁴

Sin embargo, sin procurar legitimar la institución carcelaria, resulta pertinente destacar que una conclusión fundamental de quienes han analizado la realidad carcelaria ha sido que uno de los primeros pasos para solucionar los problemas que se verifican, consistiría en la aplicación de la Constitución y las leyes. En el citado informe del Parlamento Latinoamericano se transcribe el pensamiento de Borja Mapelli, catedrático de la Universidad de Sevilla, quien señala que el derecho penitenciario, cuando existe, *“se caracteriza por ser un mundo completamente diferente, ajeno a la realidad cotidiana de las prisiones, tanto es así que se ha dicho muchas veces que la verdadera utopía del mundo de las cárceles es que simplemente se llegue a cumplir”*.¹⁰⁵ Es decir que –aunque resulte obvio señalarlo– en la teoría está contemplado el respeto de los derechos humanos lo que, sin embargo, no se logra llevar a la práctica.

Por ello es que el informe del Parlamento Latinoamericano expresa que las personas privadas de libertad están, en general, en una situación especialmente vulnerable en cuanto a la violación de sus derechos humanos fundamentales. Y cita la opinión del doctor Iñaki Rivera Beiras, quien afirma que la legislación y la jurisprudencia han configurado *“derechos de segunda categoría”* para los reclusos. Así *“pese a las declaraciones normativas que señalan que a los reclusos sólo se les ha de privar de su libertad, todos y cada uno de sus derechos fundamentales (a la vida, a la*

¹⁰² Citado en el *Informe Carcelario del Parlamento Latinoamericano. Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina*. Año 2000. P. 9.

¹⁰³ Alessandro Baratta. “Derechos humanos: entre violencia estructural y violencia penal”. En *Revista Nuevo Foro Penal*, N° 46. Colombia, 1989. P. 450.

¹⁰⁴ Ottonelli, Francisco José. “El sistema penitenciario uruguayo”. En *Entre Políticas Sociales y Políticas Criminales*. Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Montevideo, 1997. P. 243.

salud, a la integridad física y psíquica, a la defensa, al trabajo remunerado, al respeto de su vida privada, al secreto de su correspondencia, etc.) se encuentran devaluados en comparación con la tutela que poseen esos mismos derechos cuando se refieren a quienes viven en libertad”.¹⁰⁶

Debería comenzarse, entonces, por concebir al recluso como un sujeto con derechos y no como un mero objeto a adaptar, teniendo en cuenta que desde un ámbito de violación de los derechos humanos no se puede procurar que retorne a la sociedad un individuo que los respete, para lo que es necesario evitar, por lo menos, los efectos desocializadores que produce el medio carcelario.

Al respecto resulta interesante el punto de vista de Carlos Uriarte, quien sostiene que “Podríamos invertir el paradigma de Max-Neef, y pensar la institución total –y el sistema penal- como un sinérgico destructor o inhibidor de necesidades humanas”¹⁰⁷ y por tanto de derechos humanos. “En este sentido,” continúa diciendo, “el sistema penal –en un plano general- es un sinérgico insatisfactor de necesidades humanas”¹⁰⁸ lo que también implica un efecto desocializador que debe ser evitado.

Alternativas al concepto de rehabilitación

Los diversos cuestionamientos expuestos frente al concepto de rehabilitación, la constatación de los efectos desocializadores de la cárcel y la violación de derechos humanos que tiene lugar en ella, hacen que asistamos hoy “en muchos países, y sobre todo en los Estados Unidos de América, a un desplazamiento del discurso oficial sobre la cárcel, de la prevención especial positiva (resocialización) hacia la prevención especial negativa (neutralización, incapacitación)”.¹⁰⁹ Reflejando el mismo pensamiento Pavarini expresa que “La doctrina penal-criminológica –que perdió hace tiempo la ingenuidad- niega con decisión la función especial-preventiva; adhiere más fácilmente a las sugerencias de la prevención especial o del ‘merecimiento de la pena’

¹⁰⁵ Informe Carcelario del Parlamento Latinoamericano. Comisión especial de políticas carcelarias para América Latina. Año 2000. P. 6.

¹⁰⁶ Idem. P. 7.

¹⁰⁷ Carlos E. Uriarte. *Control Institucional de la Niñez Adolescencia en Infracción*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1999. P. 125.

¹⁰⁸ Idem.

¹⁰⁹ Alessandro Baratta. “Resocialización o control social: por un concepto crítico de ‘reintegración social’ el condenado”. En: *Sistema Penal para o Terceiro Milênio. Atos do Colóquio Marc Ancel*. Editora Reven. Río de Janeiro, 1991. P. 252.

*o termina interpretando el fin especial-preventivo desde una óptica verdaderamente alejada de cualquier compromiso con la perspectiva coreccional o del tratamiento”.*¹¹⁰

Pero tal como lo plantea Alessandro Baratta, partiendo del punto de vista de la criminología crítica, *“la discusión actual parece dominada por dos polos: por un lado, un polo realista, y por el otro, un polo idealista”.*¹¹¹

Al respecto resulta ilustrativo citar la explicación de su parecer. El sostiene que *“En el primer caso, el reconocimiento científico de que la cárcel no puede resocializar sino únicamente neutralizar, que la pena carcelaria para el delincuente no representa en absoluto una oportunidad de reintegración en la sociedad sino un sufrimiento impuesto como castigo, se concreta en un argumento para la teoría de que la pena debe neutralizar al delincuente y/o representar el castigo justo por el delito cometido. Renacen de este modo concepciones “absolutas”, retributivas de la pena o, entre las teorías “relativistas”, se confirma la de la prevención especial negativa.- El reconocimiento del fracaso de la cárcel como institución de privación especial positiva lleva en el segundo caso a la afirmación voluntariosa de una norma contrafáctica según la cual la cárcel, no obstante, debe ser considerada el sitio y el medio de resocialización”.*¹¹²

Pero Baratta sostiene que en estas dos posturas -que hemos citado a lo largo de este capítulo- se cometen errores de razonamiento. El expresa que *“En el primer caso, en la teoría el castigo y/o la neutralización, se incurre en lo que en la filosofía práctica se denomina la ‘falacia naturalista’: se convierten los hechos en normas o pretende deducir una norma de los hechos. En el segundo caso, con la nueva teoría de la resocialización, se incurre en la ‘falacia idealista’; se coloca una norma contrafáctica que no puede ser realizada, o sea, una norma imposible”.*¹¹³

Y entonces expresa lo siguiente: *“Mi opinión es que la alternativa entre estos dos polos es una falsa alternativa. Se puede y se debe escapar tanto de la falacia naturalista como de la idealista. El punto de vista desde el cual se afronta el problema de la resocialización en el contexto de una criminología crítica, es que se debe mantener como base realista el hecho de que la cárcel no puede producir efectos útiles para la resocialización del condenado y que por el contrario, impone condiciones*

¹¹⁰ Massimo Pavarini. *Los confines de la cárcel*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1995. P. 85.

¹¹¹ Alessandro Baratta. “Resocialización o control social: por un concepto crítico de ‘reintegración social’ el condenado”. En: *Sistema Penal para o Terceiro Milênio. Atos do Colóquio Marc Ancel*. Editora Reven. Río de Janeiro, 1991. P. 252.

¹¹² Idem.

*negativas en relación con esta finalidad. A pesar de esto, la finalidad de una reintegración del condenado en la sociedad no debe ser abandonada, sino que debe ser reinterpretada y reconstruida sobre una base diferente”.*¹¹⁴

¿Cuál es, entonces, esa base?

Baratta considera que, en primer lugar, se debe redefinir el concepto sociológico de reintegración social y para ello es necesario comprender que *“La reintegración social del condenado no puede perseguirse a través de la pena carcelaria, sino que debe perseguirse a pesar de ella, o sea, buscando hacer menos negativas las condiciones que la vida de la cárcel comporta en relación con esa finalidad”.*¹¹⁵

Entonces, y en primer lugar, como ya hemos citado, se hace necesario e imprescindible el respeto de los derechos humanos, que deben constituir el punto de partida de toda alternativa. Y en este sentido es válida y respetable toda acción que pueda emprenderse cuando esté realmente inspirada *“en el interés por los derechos y el destino de las personas detenidas, y provenga de una voluntad de cambio radical y humanista y no de un reformismo tecnocrático cuya finalidad y función sea la de legitimar a través de cualquier mejoramiento la institución carcelaria en su conjunto”.*¹¹⁶ Por tanto, es indudable que estas acciones deben estar integradas en una política más amplia que también contemple la instrumentación de más medidas alternativas y el desarrollo de estrategias y prácticas eficaces de descarceración.

Esta es la base sobre la cual Baratta plantea su preferencia por el concepto de “reintegración social” frente a los de “resocialización” o “tratamiento”, pues sostiene que *“Tratamiento” y “resocialización” presuponen en efecto, un papel pasivo del detenido y uno activo de las instituciones: son residuos anacrónicos de la vieja criminología positivista que definía al condenado como un individuo anormal e inferior que debía ser (re)adaptado a la sociedad, considerando acriticamente a esta como “buena” y al condenado como “malo”. En cambio el concepto de reintegración social, requiere la apertura de un proceso de comunicación e interacción entre la cárcel y la sociedad, en el que los ciudadanos reclusos en la cárcel se identifiquen en la sociedad externa y la sociedad externa se identifique en la cárcel”.*¹¹⁷

¹¹³ Idem. P. 253.

¹¹⁴ Idem.

¹¹⁵ Idem.

¹¹⁶ Idem. P. 254.

¹¹⁷ Idem. P. 255.

De esta manera no se pretende solamente lograr cambios en el recluso por separado, sino también en la sociedad, haciendo que esta asuma su cuota de responsabilidad y procurando corregir sus condiciones de exclusión.

Para ello es necesario brindar al detenido, aun en las condiciones negativas de reclusión, todas las actividades que puedan ser ejercidas en su favor, con el objetivo de compensar las situaciones de carencia y privación que son frecuentes en sus historias de vida antes del ingreso a la cárcel. Por tanto, *“deben ser ofrecidos al detenido una serie de servicios que van desde la instrucción general y profesional hasta los servicios sanitarios y psicológicos, como una oportunidad de reintegración y no como un aspecto de la disciplina carcelaria. Esto atañe, igualmente, al trabajo dentro y fuera de la cárcel, que también como el goce de los servicios, debe ser ejercicio de un derecho del ciudadano encarcelado”*.¹¹⁸

Asimismo se hace necesario implementar acciones tendientes a hacer más favorables las condiciones existentes en el medio al que el detenido regresará, es decir en su familia, ambiente y en la estructura de relaciones sociales a las que retornará, lo que implica hacer más énfasis en el trabajo social correspondiente, y en roles y competencias que –según este autor- normalmente no tienen mayor relevancia en el marco tradicional de los operadores del tratamiento penitenciario.

El punto de vista de la criminología crítica expuesto por Baratta puede sintetizarse, entonces, citando su pensamiento en el sentido de que *“redefinir los tradicionales conceptos de tratamiento y resocialización en términos de ejercicio de los derechos de los ciudadanos detenidos, y en términos de servicios y oportunidades laborales y sociales que se les proporciona durante y después de la detención, por parte de las instituciones y las comunidades, constituye un núcleo importante de la construcción de una teoría y una práctica nuevas de reintegración social de los condenados, conforme a una interpretación progresista de los principios y de las normas constitucionales e internacionales en materia de pena”*.¹¹⁹

Es decir que resulta necesario hacer hincapié en los derechos y necesidades de quienes se encuentran en reclusión, superando la realidad que el Informe de la Comisión presidida por el doctor Tommasino reconoce que se verifica en la actualidad, en la que *“la cárcel está organizada desde la óptica de las necesidades de la institución, acentuando los principios de la defensa social. El principio debe revertirse y considerar*

¹¹⁸ Idem. P. 256.

¹¹⁹ Idem.

las carencias y necesidades del interno”,¹²⁰ en un marco de respeto a los derechos humanos.

Para ello también puede atenderse el punto de vista de Zaffaroni quien considera que es necesaria *“Una interpretación de la ‘reforma’ y la ‘readaptación’ constitucionales como trato humano, lo menos deteriorante posible y que trate de reducir la vulnerabilidad penal de la persona”*.¹²¹ Y entiende que ello *“constituye un programa penitenciariamente realizable y jurídicamente compatible con las normas constitucionales, dotándolas de sentido pero sacándolas del marco originario de las ideologías ‘re’, que además de vetusto e irrealizable, es incompatible con el encuadre general de los derechos humanos”*.¹²²

Por ello sostiene que en las cárceles se impone que *“el trato sea lo más humano posible, en el sentido de la seguridad personal, de la higiene, etcétera.- Que sea lo menos deteriorante posible, o sea que dentro del general efecto deteriorante de la institucionalización, que condiciona una cierta patología regresiva, trate de que la misma sea lo menos marcada que las circunstancias permitan.- Que le ofrezca la posibilidad de abandonar el papel que motivó su selección criminalizante, es decir de renunciar a su comportamiento autoagresivo, o sea, de elevar su nivel de invulnerabilidad al sistema penal, de reducir su nivel de vulnerabilidad hacia éste, de salirse del estereotipo selectivo del poder punitivo.- No se trataría de que el sistema penal trabaje sobre los delitos cometidos como causas de la prisionización, lo que es falso, sino sobre la verdadera causa de ésta, que es el encuadre en el estereotipo y la consiguiente asunción de las funciones asociadas a éste, o sea, de la vulnerabilidad de la persona al sistema penal”*.¹²³ Así *“el eje se desplaza de la conducta delictiva al comportamiento vulnerable; el preso no está preso porque su conducta fue delictiva, sino porque fue vulnerable”*.¹²⁴

De esta manera cobra relevancia el concepto de vulnerabilidad que procura encontrar carencias en la historia de vida del recluso, ofreciéndole *“los elementos para*

¹²⁰ Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario. Montevideo, 1996. P. 3.

¹²¹ Eugenio Zaffaroni. “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 193.

¹²² Idem.

¹²³ Idem. P. 191.

¹²⁴ Idem. P. 192.

que aumente su nivel de invulnerabilidad frente al ejercicio del poder punitivo del sistema penal”.¹²⁵

En síntesis Zaffaroni sostiene que “Dado que la vulnerabilidad es la causa real de la prisionización, el sistema penitenciario desplazaría su eje del delito cometido (como falsa causa de criminalización) a la vulnerabilidad (encuadre en estereotipo y asunción de sus roles) como causa real de la prisionización”.¹²⁶

Pero para procurar estos objetivos en nuestro país, se hace necesario explicitar la situación actual de las cárceles uruguayas, a fin de tomar clara conciencia de cuál sería el punto de partida.

¹²⁵ Eugenio Zaffaroni. “Sentido y justificación de la pena”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 41.

¹²⁶ Eugenio Zaffaroni. “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 194.

Capítulo 5

SITUACION DE LAS CÁRCELES EN EL URUGUAY

A) Dependencia orgánica

Para analizar la situación carcelaria corresponde tener en cuenta que Uruguay es uno de los pocos países de América Latina cuyas cárceles dependen del Ministerio del Interior. Históricamente dependían del Ministerio de Instrucción Pública –hoy llamado de Educación y Cultura- pero en el año 1971 pasaron a la órbita de la Cartera del Interior. Este Ministerio dirige los establecimientos carcelarios a través de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, el Instituto Nacional de Criminología y el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

La **Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación** -dependencia directa del Ministerio del Interior- interviene en los establecimientos carcelarios más grandes, ubicados en los departamentos de Montevideo y San José, pues el resto de las cárceles departamentales tienen como jerarca inmediato al respectivo Jefe de Policía.

En opinión del doctor Ottonelli *“en especial en los establecimientos que dependen de la Dirección Nacional antes mencionada se practica un trato duro, inhumano, con acendrada preocupación por lo custodial. Numerosos informes así lo confirman, en especial los realizados por el ‘Grupo de Trabajo sobre el Sistema Carcelario Nacional’”*.¹²⁷

Por su parte, el **Instituto Nacional de Criminología** –INACRI-, que desde el 15 de julio de 2002 depende del Ministerio del Interior –antes dependía de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación- se rige por el Decreto N° 648/991, cuyo artículo 1° establece que: *“tiene como función principal el estudio criminológico de los ingresados en los establecimientos penales”*. En tal sentido debe *“a) Intervenir en el tratamiento indicado para su rehabilitación; b) Asesorar a las autoridades judiciales, sobre la respuesta al tratamiento penitenciario y lo referente a*

¹²⁷ Dr. Francisco José Ottonelli. “El sistema penitenciario uruguayo”. En *Entre Políticas Sociales y Políticas criminales*. IELSUR. Montevideo, 1997. P. 249.

*su pronóstico criminológico, a nivel nacional; c) Recoger y procesar los datos relativos a nuestra delincuencia para procurar su prevención”.*¹²⁸

El INACRI está integrado por tres centros: el Centro Nacional de Dictámenes Criminológicos –que asesora al Poder Judicial en lo que tiene que ver con libertades anticipadas y condicionales-, el Centro Nacional de Censo y Estadística Criminal –que se encarga del estudio del movimiento de la población reclusa a nivel nacional, es decir los ingresos, egresos y demás datos que se extraen de las estadísticas-, y el Centro de Observación, Diagnóstico y Tratamiento, que actúa directamente dentro de los establecimientos de COMCAR, Libertad, la Tablada, los Centros de Reclusión Nos. 1 y 2 y la Cárcel de Mujeres.

El Centro de Observación, Diagnóstico y Tratamiento cuenta con un equipo multidisciplinario integrado por un servicio social, uno psicológico, uno psiquiátrico y uno jurídico. La doctora Marta Roque de Blengio, Directora del INACRI, explicaba a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que para el funcionamiento de este Centro *“Se ha previsto un apoyo pedagógico para que actúe en conexión con el área educativa, otro ocupacional para todo lo que tiene que ver con el área laboral y uno médico, en mérito a lo que pueda surgir a ese respecto.- Este Centro tiene equipos que trabajan directamente en el establecimiento de reclusión de Libertad, en el COMCAR, en Cárcel de Mujeres y en los centros de recuperación”.*¹²⁹

El Anexo VII, en el que figura una entrevista a la Asistente Social Teresita Reyes, que desempeña funciones en el INACRI, aporta datos sobre la tarea de dicho Instituto.

El informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario estudió el trabajo del INACRI y concluyó que *“El INCARI en cuanto a sus funciones en el sistema penitenciario no tiene razón de ser”.*¹³⁰ Y sostuvo que *“el Centro de Clasificación, único que interesa al sistema, debería depender de la Dirección Nacional de Cárceles. Las Direcciones de los establecimientos, los funcionarios técnicos y los internos coinciden en la inoperancia de la gestión del INACRI. (...) Atendiendo a la sugerencia de la Dirección la Comisión estima conveniente que el INACRI se integre exclusivamente con los dos Centros (Dictámenes y Censo) y se autonomice el Centro de Clasificación, Diagnóstico y Tratamiento, con independencia técnica y lazos*

¹²⁸ Artículo 1º de Decreto-Ley Nº 648/991.

¹²⁹ Marta Roque de Blengio. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 7 de setiembre de 2000. P. 1.

¹³⁰ Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario. Montevideo, 1996. P. 89.

meramente administrativos con la Dirección de los Establecimientos. Como se prevé en el anteproyecto de ley sobre régimen penitenciario, cada uno de los grandes establecimientos deberá contar con un Centro cuyas funciones en las cárceles más pequeñas serán cumplidas por equipos multidisciplinarios. El Centro del COMCAR deberá tomar la superintendencia técnica”.¹³¹

Otro punto de vista sobre el INACRI fue sostenido por el doctor Borrelli, Subsecretario del Ministerio del Interior, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, quien manifestó que “el INACRI fue un Instituto que siempre despertó pasiones en el Poder Judicial. Cuando estaba en el Poder Judicial tenía una crítica muy dura respecto al Instituto, principalmente con relación a los dictámenes de libertades anticipadas y condicionales. Luego, en la Comisión Honoraria Tommasino que tuve el honor de integrar, se reafirmó más ese concepto”.¹³² En esa oportunidad también expresó que entendía que el INACRI “no está realmente bien aprovechado” y que por ello “En primer lugar, planteamos que salga de la órbita de la Dirección Nacional de Cárceles y que pase a depender directamente de la Secretaría de Estado. Hay una dicotomía tremenda entre las autoridades carcelarias y el Instituto Nacional de Criminología desde hace muchos años a la fecha. Se ha llegado al ridículo de que a profesionales abogados que firmaban como doctores, por ejemplo, se les borraba el título de doctor y es les obligaba a poner Agente de 2da”.¹³³

Además, el doctor Borrelli abundó en las razones por las cuales no consideraba oportuno que el INACRI se expresara acerca de las libertades condicionales y anticipadas. En ese sentido, dijo: “Con respecto a la libertad condicional, es una verdadera aberración que el Instituto Nacional de Criminología se pronuncie ya que se debe traer a la gente que está en libertad provisional –muchas veces desde el interior del país- para que se les haga una breve entrevista de cinco o diez minutos cuando, en realidad, el Juzgado tiene otros elementos y medios para saber si una persona que está en libertad provisional se está haciendo acreedora a la libertad condicional.- Con respecto a la libertad anticipada, evidentemente, lo puede hacer el Instituto Técnico Forense”.¹³⁴

¹³¹ Idem.

¹³² Doctor Borrelli. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 3 de julio de 2001. P. 6.

¹³³ Idem.

¹³⁴ Idem.

El referido *informe Tommasino* se refiere también a la tarea del **Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados** que “*debe ser el eje básico de cualquier plan que apunte a la prevención de la delincuencia; la eficacia de la tutela que ejerza sobre los transgresores de las normas penales se refleja en los índices de reincidencia*”.¹³⁵

El Patronato tiene entre sus cometidos la asistencia social, moral y material de encarcelados y liberados y de sus familiares. Debe colaborar con las autoridades encargadas de las cárceles, crear bolsas de trabajo, promover cooperativas de trabajo, organizar un servicio de libertad vigilada y encargarse de la superintendencia técnica de los Patronatos Departamentales de Encarcelados y Liberados. (Decreto N° 417/885)

El decreto N° 14.470, de creación del Patronato, de fecha 7 de marzo de 1934, establece, en sus fundamentos “... *que resulta verdaderamente incompleta toda obra de regeneración si solo se tiene en cuenta el régimen y vida del preso mientras cumple la condena, olvidándose del momento difícil de su libertad, en que aquella obra debe continuarse, a riesgo de quedar trunca e inútil para la cristalización de los fines que la determinaron; que es menester por tanto para evitar la frustración de tales esfuerzos y acrecer las garantías del bien común, confiar esa difícil misión a un Patronato, cuyos componentes, en mérito a sus reconocidas virtudes filantrópicas y altruistas, sean capaces de velar por la moral del recluso, para que una vez en libertad no vuelva de nuevo al delito, bajo el apremio de necesidades improporrogables, prestándole la ayuda protectora que requiera la afirmación de este postulado social*”.¹³⁶

El informe de la Comisión presidida por el doctor Tommasino considera “*imprescindible promocionar el fortalecimiento orgánico de la institución*” –el Patronato- “*tanto en lo relativo al aumento de personal especializado como en lo atinente a su remuneración dado que el actual sistema de selección e ingreso atribuye a cargos importantes sueldos inadecuados, desestimulando la colaboración de personas con real interés y vocación*”.¹³⁷

Además de las dependencias públicas mencionadas, resulta importante destacar el rol de contralor no oficial que en algunos casos desarrollan organizaciones no gubernamentales como el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay -IELSUR-, el Servicio Paz y Justicia –SERPAJ-, y algunas iglesias, entre otras instituciones.

¹³⁵ *Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario*. Montevideo, 1996. P. 42.

¹³⁶ Decreto N° 14.470, de 7 de marzo de 1934.

¹³⁷ *Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario*. Montevideo, 1996. P. 43.

Sin embargo, su acción choca con serias dificultades, debido a la lógica imperante en los establecimientos carcelarios. Por ese motivo, el doctor Ottonelli sostiene que *“La cárcel está concebida como un centro cerrado, no solo para contener a los internados, sino que, además, se la tiene apartada de la sociedad dificultándose el ingreso a ella de organizaciones sociales, culturales o religiosas, que podrían observar su funcionamiento y servir de apoyo a quienes están presos. No hay estrategia de reducción de violencia penitenciaria posible, que no comience por aumentar el ingreso e influencia permanente de organizaciones de esa naturaleza a las cárceles”*.¹³⁸

¹³⁸ Dr. Francisco José Ottonelli. “El sistema penitenciario uruguayo”. En *Entre Políticas Sociales y Políticas criminales*. IELSUR. Montevideo, 1997. PP. 247 y 248.

B) Situación carcelaria

La realidad de las cárceles de Uruguay presenta serios problemas, con perspectivas de agravarse debido al crecimiento del número de reclusos.

Los principales problemas, en titulares, son los siguientes:

1. Deficientes condiciones físicas de los locales. Hacinamiento.
2. Dificultades en la atención de la salud.
3. Falta de higiene.
4. Problemas de alimentación.
5. Ocio forzado. Incumplimiento de las posibilidades de trabajo.
6. Desamparo jurídico del recluso y sus familiares.
7. Drogas y corrupción.
8. Arbitrariedades: requisas violentas, malos tratos, torturas, celdas de aislamiento, entre otras.
9. Violencia interna: protestas, huelgas de hambre, motines, suicidios, muertes.
10. Intentos de fuga.
11. Falta de preparación del personal penitenciario.
12. Desconocimiento de las normas reglamentarias.
13. Maltrato a quienes visitan a los reclusos.

1. Deficientes condiciones físicas de los locales. Hacinamiento.

Uruguay tiene actualmente más de 5.500 presos, aunque su media histórica ha sido de 4.000 reclusos. *“Los 24 centros de detención existentes en todo el país fueron construidos para albergar a 3.266 presos; esto significa que tienen una superpoblación de 2.253 encarcelados, con el agravante de que el 70% de ellos no recibió aún su condena”*.¹³⁹

Como ejemplo, podemos decir que el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez (COMCAR), que tiene una capacidad para 850 reclusos, aloja actualmente más de 2.200. Y todo parece indicar que los problemas se agravarán, pues solamente en ese centro, la población carcelaria se incrementa en aproximadamente cien reclusos por

¹³⁹ Fuente Ministerio del Interior. Información publicada en el Diario *El Observador. Suplemento de Análisis y actualidad*. 16 de marzo de 2002. P. 4.

mes. Es decir que en ocho meses y medio ingresaría un número de presos equivalente al total que debería albergar ese Complejo.

El siguiente cuadro muestra la capacidad de los establecimientos actuales, comparándola con los reclusos que actualmente tienen.

SISTEMA CARCELARIO NACIONAL		
Centros	Capacidad	Reclusos hoy
Comcar (Santiago Vázquez)	850	2211
Libertad	500	496
Cárcel de Mujeres	80	151+42 menores
Centro Reclusión N° 1 (Andes 1625)	30	31
Centro Reclusión N°2 (Libertad)	60	60
Artigas	50	87
Canelones	402	640
Cerro Largo	85	104
Colonia	70	126
Durazno	74	82
Flores	16	37
Florida	50	66
Lavalleja	40	72
Maldonado	180	261
Montevideo (Cárcel Central)	100	85
Paysandú	156	156
Río Negro	70	67
Rivera	88	169
Rocha	50	117
San José	35	79
Salto	80	100
Soriano	50	110
Tacuarembó	100	123
Treinta y Tres	50	89
Total:	3.266	5.519
Nota: población carcelaria: 5.257 hombres y 262 mujeres que están en la Cárcel de Mujeres (Montevideo) y en las cárceles departamentales. Fuente: Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación. Ministerio del Interior. Febrero de 2002.		

140

*Aclaración: resulta pertinente destacar que en el Penal de Libertad, antes del motín del 1° de marzo de 2002, se encontraban alojados 507 reclusos y a mayo de 2002 había 344 personas reclusas.*¹⁴¹

Estos datos demuestran la situación de hacinamiento actual.

Un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes -del año 2001- se refiere a las deficientes condiciones físicas de los establecimientos carcelarios y al hacinamiento existente, diciendo que *"En varios establecimientos (como los de Santiago Vázquez, Libertad o Canelones) se puede comprobar que en barracas sin el espacio ni la ventilación imprescindibles, con*

¹⁴⁰ Documento brindado a la Comisión Tripartita para el Estudio de la Situación Penitenciaria. Febrero 2002.

¹⁴¹ Ministerio del Interior. Departamento de Información y Prensa. Datos al 5 de mayo de 2002. P. 1.

*cuchetas para doce reclusos, deben cohabitar hasta 18 o 20, lo que los obliga a estar casi permanentemente sobre las cuchetas. Hasta hay quienes deben permanecer en los estrechos pasillos, porque no disponen de otro lugar”.*¹⁴²

En una declaración del Parlamento Latinoamericano, referente a los derechos y la atención de las personas privadas de libertad, se expresa que el hacinamiento *“tiene efectos devastadores en los reclusos y constituye una fuente significativa de abusos a los derechos humanos. Agrava todas las demás condiciones, a menudo volviéndolas inhumanas. También socava seriamente la capacidad de las autoridades penitenciarias para controlar sus prisiones; la difusión de enfermedades se vuelve inevitable, la violencia se agrava, la infraestructura colapsa y los reclusos sufren de severas tensiones mentales y físicas al vivir en tal proximidad”.*¹⁴³

Pero además de estos efectos directos, el hacinamiento, tal como lo expresa el profesor Langón, produce daños aun mayores. En este sentido, sostiene: *“Estas instituciones totales han sido señaladas como desestructuradoras de la personalidad de los individuos. Y se puede hacer la ecuación de que institución total más hacinamiento significa un efecto multiplicador de la criminalidad, de manera tal que se ha señalado el rol criminogénico de las prisiones”.*¹⁴⁴

La superpoblación de los establecimientos carcelarios es tal, que obliga a alojar reclusos en espacios destinados a talleres, recreación, recepción de visitas o, inclusive, asistencia médica, impidiendo la realización de las actividades para las que esos lugares estaban previstos. Al respecto, el Secretario General del Ministerio del Interior, el doctor Guillermo Maciel, reconoce que *“donde había un gimnasio ahora hay gente y donde era un puesto de asistencia médica o de visitas, hay presos”.*¹⁴⁵

El problema de la superpoblación carcelaria se agrava aún más por el hecho de que los edificios destinados a establecimientos de reclusión –además de carecer de capacidad suficiente- no son adecuados desde el punto de vista arquitectónico.

El doctor Ottonelli dice al respecto: *“Los edificios de las cárceles en el interior del país, salvo algunos pocos, son locales que originariamente tuvieron otro destino y luego fueron adaptados a su nuevo cometido. Se trata de locales inadecuados, carentes*

¹⁴² Informe sobre Derechos Humanos de la Comisión de la Cámara de Representantes. 2001. P. 3.

¹⁴³ Proyecto de una Declaración Interamericana sobre los Derechos y la Atención de las Personas Privadas de Libertad. Parlatino. P. 8.

¹⁴⁴ Miguel Langón. “Aspectos criminológicos de la pena de prisión y sus alternativas”. En: *Criminología y Derecho III. Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y Criminología*. Fondo de Cultura Universitario. Montevideo, 1992. P. 7.

de ambientes propicios para realizar tareas de reinserción, enseñanza de oficios y aun para la práctica de deportes.- Al contrario, los establecimientos destinados a los presos de Montevideo, responden a modelos arquitectónicos de 'alta seguridad', que dejan pocos espacios para actividades que minimicen los efectos del encierro.- Uno de ellos, el llamado 'Penal de Libertad' (cercano a la ciudad del mismo nombre), tiene el clásico diseño del panóptico y fue el lugar donde se alojó a los presos políticos durante la dictadura militar, sometiéndolos a un tratamiento de terror. Vueltos a la democracia y cerrado el antiguo Penal de Punta Carretas, se convirtió en el lugar de reclusión de presos comunes; sin embargo, el edificio, por sus características de 'cárcel de seguridad', no permite programar un trato mínimo de humanidad.- El otro establecimiento, 'COMCAR' –Complejo Carcelario de Santiago Vázquez- cercano a la localidad de Santiago Vázquez, departamento de Montevideo, es una construcción moderna compuesta de varios segmentos o módulos independientes, propios para una organización custodial, que con imaginación pueden adaptarse a programas con ciertos niveles de diferenciación y progresividad. Cuenta con grandes galpones para la práctica de oficios o lugar para actividades fabriles. Sin embargo también se ha convertido en un depósito de individuos, donde la preocupación fundamental es evitar la evasión".¹⁴⁶

Por otra parte, y como dato complementario, es importante considerar que la población reclusa en los establecimientos penitenciarios uruguayos es, en su mayoría, muy joven. Si consideramos los datos del COMCAR y de la cárcel de Libertad, se puede apreciar que el 66% de los reclusos tiene entre 18 y 29 años y ese porcentaje alcanza un 85,45% si consideramos la franja etaria comprendida entre los 18 y 39 años.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECLUSOS SEGÚN EDAD EN COMCAR Y LIBERTAD ¹⁴⁷					
18 a 19	20 a 29	30 a 39	40 A 49	50 A 59	Más de 60
17%	49%	19,45%	8,18%	2,88%	1,26%

Además, las perspectivas con respecto al crecimiento de la población carcelaria son sombrías puesto que el agravamiento de las penas -derivado de la llamada ley de

¹⁴⁵ Expresado en el Seminario: *Realidades y Perspectivas del Sistema Carcelario Uruguayo*. Mayo de 2002.

¹⁴⁶ Dr. Francisco José Ottonelli. "El sistema penitenciario uruguayo". En *Entre Políticas Sociales y Políticas criminales*. IELSUR. Montevideo, 1997. PP. 248 y 249.

¹⁴⁷ Ministerio del Interior. Departamento de Información y Prensa. Datos al 5 de mayo de 2002. P. 2.

urgencia aprobada en el año 2000, que en muchos casos eliminó los procesamientos sin prisión- y el crecimiento del número de delitos, entre otros factores, determina el aumento a niveles críticos de la población carcelaria.

El siguiente cuadro muestra el porcentaje de aumento de la población carcelaria con respecto a 1990 y su estimación para el año 2005.

Evolución de la población carcelaria en todo el país

Año	Cantidad de presos	Porcentaje de aumento con respecto a 1990
1990	2790	
1995	3185	14
2000	4369	56,5
2002 (a marzo)	5663	103
Proyección 2005	7100	155

148

Existe un factor adicional a tomar en cuenta y es que actualmente algunos delitos ni siquiera son denunciados por las víctimas. El Uruguay no es ajeno a lo que sucede en otros países, en los que se estima “*que más de la mitad de los delitos graves, incluida la violación, el robo y el asalto con agravio (asalto con el propósito de producir daños graves) no se denuncian a la policía*”¹⁴⁹ lo que, entre otros factores, puede obedecer a falta de confianza en la institución. Es necesario considerar, entonces, que en la medida en que ese factor se supere y las medidas de represión del delito resulten más eficaces, el número de reclusos podrá crecer aún más de lo previsto.

2. Dificultades en la atención de la salud.

En 1996, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la ley de Seguridad Ciudadana (16.707), se formó una Comisión Honoraria para el Mejoramiento del Sistema Carcelario, presidida por el doctor Armando Tommasino, que luego de seis meses de trabajo elaboró un informe con recomendaciones y propuestas concretas que entregó al Ministro del Interior, doctor Didier Operti. Seis años después la situación permanece incambiada o, inclusive, ha empeorado en diversos aspectos.

¹⁴⁸ Informe sobre población reclusa. Ministerio del Interior. 2002. P. 1.

¹⁴⁹ Anthony Guiddens. *Sociología*. Alianza Universidad. Madrid, 1992. P. 166.

El informe de dicha Comisión estableció que: *“No existe ninguna información epidemiológica.- No existe ningún indicador de salud.- No existe ningún indicador de morbimortalidad.- No existen actividades de promoción de la salud.- No existen historias clínicas o están incompletas.- No existen datos clínicos de ingreso ni egreso.- Las actividades de prevención de la salud son mínimas.- Solo se presta atención a la recuperación de los enfermos. No hay actividades de rehabilitación.- No hay programas de alimentación; la vestimenta es inadecuada.- Los locales en algunos aspectos y principalmente las llamadas celdas de castigo son intolerables y atentan contra la salud del recluso.- No hay estructura que pueda contener al interno por un lapso que permita su estudio psicofísico y en base a ello la conducta que se deberá tomar con el mismo.- Los recursos son muy escasos y muchos de ellos no pertenecen a la institución.- El acto médico y sus consecuencias se realizan en el marco de una dependencia de las autoridades policiales de cada penal y generalmente están supeditadas a las prioridades de estas”*.¹⁵⁰

Seminarios sobre medicina carcelaria han destacado que es de fundamental importancia la independencia total del cuerpo médico y de su quehacer, con respecto al reglamento policial, punto de vista compartido por SERPAJ y por la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario. En la actualidad todos los médicos que cumplen funciones dentro de los establecimientos carcelarios deben ingresar al escalafón policial en la categoría de agentes de segunda, lo que implica que están subordinados a una escala jerárquica no médica y que en caso de no obedecer órdenes de “superiores” no médicos, pueden ser castigados con arrestos. Están obligados además, a que todos los planteos o cuestionamientos sigan la escala jerárquica.

La falta de historias clínicas indica que no hay un conocimiento de los problemas de salud de los internos, ni se realiza un seguimiento adecuado. La atención de las urgencias, además -según se ha denunciado también por SERPAJ-, se ve interferida por la voluntad del guardiacárcel de turno, no existiendo una comunicación directa y fluida con el médico.

El stock de medicamentos es ínfimo en relación a la población de cada establecimiento.

¹⁵⁰ Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario. Montevideo, 1996. P. 68.

Todas estas condiciones hacen especialmente grave la situación de los reclusos afectados de VIH. *“Si la población reclusa sufre una de las mayores estigmatizaciones por parte de la sociedad, los presos y presas portadores de VIH son los más marginados entre los marginados. El Servicio Paz y Justicia ha recibido un cúmulo importante de denuncias de reclusos, familiares y organizaciones sociales y religiosas, las que ponen de manifiesto las carencias en la atención de internos e internas portadores. Son estas reiteradas denuncias las que, entre otros factores, han motivado la realización de investigaciones. Reclusos y reclusas que padecen SIDA corren mayores riesgos de ser perjudicados por las condiciones en las que cumplen sus penas de prisión. Estas personas están más expuestas a sufrir el agravamiento de su condición por la mala alimentación, las pésimas condiciones de alojamiento, la falta de higiene, la ausencia de seguimiento médico adecuado y de medicamentación, entre otros factores adversos”*.¹⁵¹

Al respecto, el testimonio de la madre del recluso enfermo de SIDA fallecido en la cárcel –contenido en el Anexo I- resulta particularmente ilustrativo.

Los casos de los reclusos con patologías psiquiátricas también presentan especiales dificultades. Aunque deberían ser trasladados a instituciones psiquiátricas para su atención, algunos de ellos permanecen en las cárceles o luego de un período de permanencia en esas instituciones retornan al establecimiento carcelario aún presentando patologías, lo que implica graves consecuencias para su atención e inclusive para el relacionamiento con los guardias y demás reclusos.

3. Falta de higiene.

La higiene en los establecimientos carcelarios también es deficiente. Actualmente, existen casos particularmente graves como los que se verifican en el Penal de Libertad, luego de los sucesos ocurridos el 1º de marzo de 2002. Un informe de La Dirección Nacional de Cárceles del 3 de abril de 2002 establece: *“situación controlada pero al borde de una crisis gravísima, por diferentes circunstancias: locales habitacionales totalmente destruidos con un hacinamiento importantísimo, escasos servicios higiénicos (wc, duchas, etcétera), no existe un solo lugar para enfermería o para consultorios médicos u odontológicos. Falta de saneamiento de los desechos, falta*

¹⁵¹ Informe de SERPAJ. Centro de Documentación en Derechos Humanos. Recopilación y edición periodística Lic. Jimena Brusa. P. 1.

*total de higiene corporal, presencia de roedores, etcétera. Aumento de enfermedades de la piel, como piodermitis, sarna, piojos. Existen posibilidades latentes de epidemias moderadas y graves como hepatitis y otras propias de la época, llegada casi inevitable del dengue, enfermedades respiratorias con la llegada de los fríos y aumento de las enfermedades de transmisión sexual”.*¹⁵²

Otro pasaje del mismo informe, al referirse al establecimiento de reclusión La Tablada expresa: *“La situación sanitaria es más correcta, aunque las celdas habitación carecen de servicios higiénicos, se proporcionan baldes de plástico, lo que resulta higiénicamente malo, tanto como para el recluso, como para el funcionario que debe retirar los mismos”.*¹⁵³

Condiciones como las descritas son las que han llevado a que en el informe Tommasino se afirmase que *“La situación de hacinamiento en algunas cárceles las transforma en importantes focos de riesgo para la salud”* y que *“Al observar los gabinetes higiénicos y sus condiciones de asepsia, no se encuentra explicación a la inexistencia de epidemias”.*¹⁵⁴

4. Problemas de alimentación.

En cuanto a la alimentación la situación es similar en diversos establecimientos. Por ese motivo se puede citar como ejemplo, lo observado en el Penal de Libertad por representantes de SERPAJ, que consta en el Informe 2000 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Allí se expresa: *“La dieta es básicamente de olla y aunque las autoridades manifiestan que cuentan con materia prima aceptable, pudimos constatar que la comida del día era un ensopado. La dieta especial se compone de arroz; se distribuye leche”.*¹⁵⁵

Acerca del establecimiento de Santiago Vázquez el mismo informe expresa: *“De acuerdo a lo informado, se trata normalmente de comida de olla, sin variaciones. Por razones presupuestales –partidas muy insuficientes- no se consumen verduras ni frutas. La comida del establecimiento es mejorada por los propios reclusos con alimentos que*

¹⁵² Informe de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación. 3 de abril de 2002. P. 5.

¹⁵³ Idem. P. 6.

¹⁵⁴ Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario. Montevideo, 1996. P. 68.

¹⁵⁵ Informe 2000. Derechos Humanos en el Uruguay. Ediciones SERPAJ. Montevideo. P. 47.

traen los familiares, y con la facilidad, en algunos casos, de que pueden prepararse comidas en el celdario".¹⁵⁶

En la cárcel de "Las Rosas", del departamento de Maldonado, la situación es algo mejor que en otras, pero de todos modos *"La alimentación es de mala calidad. No se cuenta con frutas ni verduras y la carne es muy escasa. Trabajan en la elaboración reclusos que reciben peculio por la tarea. La comida de la guardia se elabora por separado y se encargan algunas reclusas de su preparación. Todos los entrevistados coincidieron en que la alimentación era mala; incluso alguno nos dijo que no se le cumplía con la dieta prescrita por el médico. En algunos casos el recluso cocina en su celda con los elementos que le trae la visita"*.¹⁵⁷

Este último aspecto citado hace que también exista una diferencia nítida entre los reclusos que tienen familia o amigos que pueden acercarle alimentos y aquellos que no, o que se encuentran en establecimientos alejados del lugar donde residen sus allegados, circunstancia que se agrava especialmente cuando –como en la mayoría de los casos- la familia carece de recursos.

Pero el problema de la alimentación presenta otros aspectos complejos y en este sentido los propios familiares de los reclusos denuncian: *"Habría que preguntarse cuánto invierte cotidianamente el Estado uruguayo en alimentación, medicina, y mantenimiento general de la cárcel. Son millones, y el rancho que comen los presos es un ensopado con unos fideos y algún hueso que otro"*.¹⁵⁸

5. Ocio forzado. Incumplimiento de las posibilidades de trabajo.

Kropotkine decía, ya en 1890, que *"Todo el mundo conoce la influencia deletérea de la ociosidad"*,¹⁵⁹ que en el caso de los reclusos es forzada y se debe limitar casi solamente a la contemplación del paso de las horas.

Esas condiciones llevan a que la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, exprese que *"Cada actividad de los internos, se lleva a cabo en la compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se requiere que hagan juntos las mismas cosas, llevando esto a una suerte de indiferenciación entre*

¹⁵⁶ Idem. P. 52.

¹⁵⁷ Idem. PP. 39 y 40.

¹⁵⁸ Carta de la Comisión de familiares de apoyo a los presos del Penal de Libertad, enviada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. P. 2.

¹⁵⁹ Kropotkine. *Las prisiones*. F. Sempere y C. Editores, Valencia. 1890. P. 24.

unos y otros donde las particularidades se pierden y donde es bastante difícil ser considerado una individualidad con necesidades específicas diferentes a las de una masa”.¹⁶⁰

Por tanto, resulta obvio señalar que todo recluso al que en muchos casos se le mantiene día y noche en su celda, o se le permite salir solo unas pocas horas, sin posibilidad de trabajar, educarse o aprender un oficio, sometido a ese ocio forzado, deteriora su organismo y perturba su salud mental.

A pesar de que el trabajo es un derecho establecido en la Constitución, en las cárceles es habitualmente escaso y ocupa un bajísimo porcentaje de la población.

En 1996 el Informe Tommasino estableció que *“el trabajo de las personas recluidas en prisión constituye un instrumento primordial, acaso el más importante, para alcanzar el objetivo del sistema penitenciario, de la reinserción social del interno”*.¹⁶¹ (...) *“El país requiere acompañar el mejoramiento carcelario con un conjunto de medidas, entre ellas una infraestructura edilicia adecuada y suficiente. Pero sin la menor duda, sin talleres, oficios y enseñanza profesional, ningún propósito de readaptación social será posible y fracasará, acosado por el ocio y los vicios de intramuros, nota saliente de muchas cárceles, incluidas las nuestras”*.¹⁶²

A pesar de este claro reconocimiento, la falta de trabajo sigue siendo una de las graves insuficiencias del sistema carcelario.

El trabajo reporta beneficios que serían sumamente necesarios pues *“Si se realiza en condiciones satisfactorias, dignifica, fortalece la autoestima, la confianza en la propia productividad y estimula la creatividad. (...) Una prisión sin trabajo es un encierro desprovisto de toda explicación científica, moral y social; pierde la finalidad reeducativa establecida en la Constitución de la República, en el Código Penal y en la Ley N° 14.470, así como en normas internacionales...”*.¹⁶³

Contar con posibilidades de trabajo permitiría, además de contribuir con el autoabastecimiento y la mejora de las condiciones físicas de los locales, etcétera, capacitar a una población reclusa que en un 60% carece de preparación para incorporarse al sistema productivo a su egreso.

¹⁶⁰ Elizabeth Lippert. “Consecuencias psicológicas del Encierro”. En *Cárceles un quehacer de todos*. SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 65.

¹⁶¹ *Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario*. Montevideo, 1996. P. 76.

¹⁶² Idem. P. 78.

¹⁶³ Margarita O’Neill de Gutiérrez. “El trabajo como factor de rehabilitación social en el tratamiento penitenciario”. En *Anales de las Primeras Jornadas Uruguayas de Criminología*. Tomo I. Instituto

6. Desamparo jurídico del recluso y sus familiares.

Según informes oficiales,¹⁶⁴ una de las principales demandas planteada por los reclusos se debe al desamparo desde el punto de vista jurídico. En otros términos: un porcentaje elevado de presos manifiesta carecer de información sobre la marcha de sus respectivos procesos y se queja por la falta de comunicación con los abogados defensores. Se insiste por parte de algunos reclusos, en que no están en contacto con el abogado con la frecuencia que desearían.

Sucede, además, que la información que suele llegar por intermedio de familiares resulta incorrecta debido a la dificultad que implica el lenguaje jurídico. Por otra parte, con frecuencia los familiares deben hacer largas antesalas para contactarse con los jueces, que están excesivamente ocupados, o con los propios abogados. Todo ello crea un mecanismo de gran tensión, destacado especialmente en el último informe del Parlamento Latinoamericano que señala como una de las vías de solución de este problema, el hecho de que en algunos establecimientos se ha podido crear ámbitos, con todas las garantías, donde los abogados, de Oficio o particulares, reciben al recluso y le informan, o escuchan las inquietudes que cada recluso desee comunicar.

Por otro lado, es importante resaltar que Uruguay tiene actualmente un importante número de reclusos –entre el 70% y el 77%- en situación de procesamiento sin condena y, tal como lo expresa Langón, es bueno recordar que se trata de *“Individuos respecto de los que el discurso jurídico, político, ideológico, afirma que son presuntos inocentes, por lo que establece el artículo 12 de nuestra Constitución, de que nadie es culpable ni puede ser tratado como reo hasta que exista una sentencia de condena basada en autoridad de cosa juzgada, y por lo que establece concomitantemente también el Pacto de San José, la Convención Americana de los Derechos Humanos”*.¹⁶⁵

Al respecto, los datos de COMCAR y Libertad, resultan ilustrativos.

Nacional de Criminología. Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Reclusión. Montevideo, 1989. P. 162.

¹⁶⁴ Informe sobre Derechos Humanos de la Comisión de la Cámara de Representantes para el Parlantino. 2001. P. 5.

¹⁶⁵ Miguel Langón. “Aspectos criminológicos de la pena de prisión y sus alternativas”. En: *Criminología y Derecho III. Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y Criminología*. Fondo de Cultura Universitario. Montevideo, 1992. P. 7.

Estadística realizada al 26.2.02 sobre un total de 2226 reclusos en COMCAR y 498 reclusos en Libertad.

COMCAR		LIBERTAD	
Procesados	Penados	Procesados	Penados
77% : 1.714	23% : 512	41% : 202	59% : 296
Reincidentes	Primarios	Reincidentes	Primarios
55,5%	45,5%	64%	36%

166

7. Drogas y corrupción.

El informe carcelario del Parlamento Latinoamericano denuncia que la prisión *“constituye un ambiente especialmente propicio para distintas formas de corrupción. Se ha comprobado que, en varias prisiones, es habitual el ingreso de alcohol y drogas, lo que resultaría imposible sin la complicidad de los funcionarios (esta circunstancia ha sido reconocida por más de un director).- En algún caso, se denuncia el ingreso al establecimiento de armas, aun de fuego, estableciéndose la tarifa para que ello ocurra”*.¹⁶⁷

Dicho informe sostiene que si se intenta buscar una explicación para ello, resulta necesario tener en cuenta que *“el propio personal penitenciario –él también, en cierta manera prisionizado- es habitualmente mal preparado y mal pago, dando lugar a frecuentes fenómenos de corrupción.- Pero aun si ello no ocurriera, la propia estructura carcelaria crea una barrera entre esos dos mundos: por un lado los guarda-cárceles -obsesionados por la seguridad y la disciplina cuya meta lejos de ser el futuro ciudadano es el presente recluso-, por el otro, el de los internos (...) que no pueden dejar de ver en los funcionarios un enemigo”*.¹⁶⁸

Es decir que la realidad que se verifica en el ámbito carcelario contribuye a crear una división entre reclusos y funcionarios que, de alguna manera, propicia enfrentamientos y da lugar a los fenómenos mencionados.

A pesar de que es sabido que estos hechos suceden, resultan difíciles de probar, pero aun así, de alguna manera son reconocidos por las autoridades. Por ese motivo

¹⁶⁶ Ministerio del Interior. Departamento de Información y Prensa. Datos al 5 de mayo de 2002. P. 2.

¹⁶⁷ *Informe Carcelario del Parlamento Latinoamericano*. Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina. 2000. P. 24.

¹⁶⁸ Idem. P. 11.

resulta ilustrativo citar un pasaje de un artículo publicado en el Semanario Brecha, que dice lo siguiente: *“Ante la evidencia de que la cocaína fluye como el azúcar, algún jefe carcelario ensaya la explicación de que la droga entra en el penal en la vagina de las mujeres visitantes. La infame idea no funciona para los revólveres o los celulares, y menos para las botellas de whisky. El Ministro del Interior, Guillermo Stirling, no eludió el problema: ‘Quedaron demostradas serias irregularidades’, admitió. El Director General de Cárceles, Carlos De Ávila, fue más condescendiente: los controles se eluden porque ‘el personal (de las cárceles) no es el mejor, con los sueldos que se pagan’. Para redondear el sueldo ciertas changuitas tienen tarifa: un litro de whisky, 200 pesos; un traslado a Cárcel Central, mil dólares”*.¹⁶⁹

Las denuncias de corrupción son frecuentes aunque de dificultosa constatación. Cuando en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes se le preguntó a representantes del Colegio de Abogados, si les había llegado la versión de que los traslados y algunos de los escasos puestos de trabajo, suelen ser vendidos a reclusos que pueden pagarlos, la respuesta fue: *“Todos sabemos que esa versión circula, pero no tenemos pruebas”*.¹⁷⁰ Y esto sucede porque a pesar de que hay personas que concurren a las cárceles, y denuncian estos hechos ante integrantes de la citada Comisión, no se arriesgan a colaborar en su investigación por temor a represalias contra sus familiares presos.

Sin embargo, el 29 de junio de 2002, se hizo público un escándalo de corrupción policial. Al respecto la prensa informó que: *“La Policía y la Justicia dieron ayer un severo golpe a la corrupción policial y lograron procesar a tres uniformados que habían montado una organización delictiva dentro del sistema carcelario, encabezada por el propio Director Nacional de Cárceles, el inspector principal retirado Carlos de Avila. Los policías les pedían coimas de US\$ 1.000 a los familiares de los presos para lograr su traslado del COMCAR y de Libertad hacia el llamado Centro N° 2, una chacra abierta que funciona en San José. De Avila, el Coordinador de Cárceles, Hugo Güira y el ex Director de Libertad, Pablo Machado, fueron procesados con prisión por abuso de funciones en casos no previstos por la ley. (...) El traslado de los presos es una decisión que compete casi exclusivamente a la Dirección de Cárceles, lo cual le daba a los policías corruptos un enorme poder para operar en este sentido”*.¹⁷¹

¹⁶⁹ Semanario *Brecha*. 8 de marzo de 2002. P. 3.

¹⁷⁰ Doctor Lagos. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 23 de abril de 2000. P. 24.

¹⁷¹ Diario *El Observador*. 29 de junio de 2002. P. 3.

Denuncias de este tipo también se mencionan en el Anexo I, testimoniadas por la madre de un recluso fallecido.

8. Arbitrariedades: requisas violentas, malos tratos, torturas, celdas de aislamiento, entre otras.

El periodista Samuel Blixen ha denunciado que *“Hay algunas prácticas que no se justifican ni siquiera con un criterio de máximo rigor en un establecimiento de alta seguridad, y que simplemente son una herencia de los métodos de la dictadura con los presos políticos: el ‘ablande’ a la llegada, esa inevitable paliza subiendo los cinco pisos del celdario, el garrotazo gratuito para marcar la cancha, para aclarar quién manda; la requisa con el objeto de destruir las pertenencias de los presos, manosear sus objetos privados, como las fotos de sus familiares; la arbitrariedad en la aplicación de un reglamento para fomentar la inseguridad del preso, todo ello con el objeto de instalar un universo hermético, que nada tiene que ver con la rehabilitación del recluso, y sí con una fábrica de desmanes propicia para la corrupción. Si no hubiera ratas, si no hubiera excrementos flotando en los pisos, si no hubiera hacinamiento ni régimen de ocio impuesto durante 24 horas, es posible que no hubiera tanta demanda de alcohol y drogas. ¿Cómo piensa la gente que puede vivir y sobrevivir un preso obligado a permanecer 22 horas en una celda con los caños tapados, durmiendo en el piso con otros 18 reclusos en un espacio programado para cuatro personas, si no es ingiriendo tranquilizantes que la enfermería distribuye?”*¹⁷² Sobre este último punto también se denuncia frecuentemente la especulación por las pastillas para dormir que luego de ser distribuidas por los médicos, se comercializan entre los presos, porque las condiciones de reclusión vuelven dificultoso conciliar el sueño.

Los malos tratos y las torturas también son moneda corriente, pero para los reclusos la decisión de hacer las denuncias correspondientes no resulta sencilla. En ese sentido un representante de la Defensoría de Oficio en lo Penal, el doctor Eduardo Pesce, expresaba en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes: *“El tema de malos tratos es sumamente delicado y pasa por una decisión personal del preso de hacer la denuncia o no. Muchos reclusos tienen miedo de hacerla, no sólo porque quizás después en el Juzgado no pase nada, sino porque temen ser más maltratados. Entonces, nosotros tenemos conocimiento de muchas*

*denuncias de malos tratos y luego cuando le decimos al detenido 'hacemos la denuncia ante el Juez', porque en ese caso contamos con mecanismos legales, dicen 'No, doctor, deje todo tranquilo'. Es un tema delicado".*¹⁷³

Una denuncia sobre este aspecto figura en el Anexo II, en el que un recluso relata cómo se tomaron medidas de represión que las autoridades pretendieron justificar alegando la existencia de un motín que, a su juicio, no fue tal.

Asimismo se ha denunciado la violencia que grupos especiales, dependientes de la Guardia Republicana, emplean en los procedimientos de requisas. En alguna oportunidad esos hechos han sido denunciados ante el Poder Judicial, solicitándose la intervención de médicos forenses para comprobar las lesiones recibidas por algunos reclusos, pero el problema perdura, tal como surge de las reiteradas denuncias de familiares y de constataciones realizadas por organizaciones de derechos humanos.

Un informe de SERPAJ denuncia que se realizan *"Requisas violentas, tanto a reclusos como a familiares (...). Varios testimonios dan cuenta de procedimientos de requisas en las celdas realizados con empleo de violencia durante los cuales los funcionarios policiales intervinientes ingresan a las celdas y pabellones destruyendo los enseres personales"*.¹⁷⁴ Es decir que se ha denunciado que estas requisas se hacen en forma violenta golpeando a los reclusos y destruyendo sus elementos personales y recuerdos familiares.

Cuando ellas se realizan los presos deben salir desnudos de sus celdas, y con frecuencia hay reclusos que resultan lesionados o heridos gravemente.

El mencionado informe de SERPAJ se refiere también a las celdas de aislamiento y expresa que *"Si bien se advierte en determinadas circunstancias la necesidad de aplicar sanciones de aislamiento a los presos que pueden representar un riesgo para la seguridad institucional o que pongan en riesgo la integridad del resto de la población reclusa y de los funcionarios penitenciarios, esta medida debe cumplirse en recintos que tengan las condiciones mínimas para alojar a una persona (higiene, abrigo, acceso a servicios sanitarios, etc.), bajo estrictos controles médicos y con visita*

¹⁷² Idem.

¹⁷³ Eduardo Pesce. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 18 de mayo de 2000. P. 16.

¹⁷⁴ Citado en la Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 6 de abril de 2000. P. 23.

*de los familiares. Nosotros reivindicamos la abolición de las celdas de aislamiento, cuando éstas implican castigo”.*¹⁷⁵

Sin embargo esas celdas son, en la realidad, *“recintos en condiciones extremas de vida. Sin luz natural, sin acceso directo a baño, agua; sin visitas, sin salidas a recreo, sin contacto con otros reclusos, sin mate, cigarrillos, radio, y otros enseres personales; en varios casos se retira colchón y frazada durante el día. La sanción puede extenderse por varios días o meses, y lo común es que ésta se cumpla sin supervisión médica-psiquiátrica previa”.*¹⁷⁶

9. Violencia interna: protestas, huelgas de hambre, motines, suicidios, muertes.

Las condiciones antes mencionadas y los diversos problemas que tienen lugar en los establecimientos carcelarios hacen que se viva un clima de tensión y violencia tanto entre reclusos y personal penitenciario como entre presos, debido a las relaciones de poder que se establecen entre ellos. Este ambiente hace que la ocurrencia de hechos violentos y hasta de motines, pase a formar parte de lo cíclicamente esperado.

Un informe de SERPAJ difundido en el año 2000, permite constatar un agravamiento de la situación si se la compara con los años en que fue elaborado el ya citado informe de la Comisión presidida por el doctor Tommasino. *“Signos de ese deterioro agudo”* -expresa- *“son los permanentes episodios de violencia que se han registrado en los últimos años: motines, destrozos, huelgas de hambre, protestas masivas de familiares, etcétera y con la novedad de algún episodio con toma de rehenes, hecho sin precedentes en Uruguay en el ámbito carcelario”.*¹⁷⁷ A lo que aún podemos agregar los suicidios y las muertes no del todo claras ocurridas luego del motín del 1º de marzo de 2002. Estos hechos han sido tan graves que obligan a hacer una digresión a fin de mencionar lo sucedido.

El 1º de marzo tuvo lugar un motín en el Penal de Libertad en el que, en protesta por las condiciones de reclusión, los presos tomaron guardias como rehenes y destruyeron casi totalmente el establecimiento.

¹⁷⁵ Idem. P. 22.

¹⁷⁶ Informe de SERPAJ. *Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 12.

¹⁷⁷ Informe de SERPAJ. Citado en la Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 6 de abril de 2000. P. 21.

La violencia fue creciendo y solo pudo ser superada al final de una mediación, en el lugar de los hechos, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Gervasio Guillot, el Ministro del Interior, escribano Guillermo Stirling, e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

La tensión cobró tal magnitud que un policía, consultado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo: *“Doctor, si cae un funcionario va a haber una masacre porque van a morir seguramente todos los reclusos. Y si usted y el Ministro se ponen por delante van a morir también”*.¹⁷⁸

El desenlace se logró luego de diez horas de gestiones en las que se acordó el ingreso de los canales de televisión al establecimiento, a fin de filmar las negociaciones y dar testimonio de que los rehenes eran liberados sin haber sufrido daños. El acuerdo incluyó el compromiso de que no habría castigos físicos individuales ni colectivos y que se constituiría una Comisión Tripartita integrada por representantes del Poder Ejecutivo (Ministerio del Interior), Suprema Corte de Justicia y Poder Legislativo, a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, para plantear propuestas de mejoramiento de la situación carcelaria.

A fin de descongestionar el Penal de Libertad varios reclusos fueron trasladados al establecimiento de La Tablada y en los días siguientes miembros de la Comisión de Derechos Humanos denunciaron las deficientes condiciones del lugar y el incumplimiento del acuerdo a través del castigo a reclusos de Libertad y la Tablada, lo que inclusive fue filmado por un canal de televisión.

La violencia creció en la cárcel de Libertad y entre el 7 de abril y el 16 de mayo cinco reclusos murieron o fueron asesinados bajo la modalidad de ahorcamiento –los hechos aún están siendo investigado por el Poder Judicial-, en lo que según la hipótesis del Ministerio del Interior, se trataría de ajustes de cuentas entre reclusos tras el motín iniciado el 1º de marzo de 2002.

Estos cinco horcados conforman un total de 14 muertes violentas en las cárceles uruguayas en lo que va del año 2002: un promedio de una cada 10 días, aproximadamente.

Como ya se ha mencionado las protestas y motines –como consecuencia de la falta de solución de los problemas carcelarios- son, de alguna manera, previsibles. Tanto es así que con respecto al motín de Libertad los medios de comunicación informaron

¹⁷⁸ Diario *El Observador*. 3 de marzo de 2002. P. 3.

que: “En el Ministerio del Interior se sabía que la densa situación en el penal no pasaba de marzo sin explotar”.¹⁷⁹

10. Intentos de fuga.

En varias oportunidades los intentos de fuga de los establecimientos carcelarios han ganado la primera plana de la prensa, lo que pudo conducir a pensar que son muy frecuentes.

Las cifras de fugas de COMCAR, Libertad y de las cárceles departamentales, correspondientes a los años 2000, 2001 y primer trimestre de 2002, son las siguientes:

FUGAS						
Por no presentación de salidas transitorias				comunes		
	2000	2001	2002 1er. Trimes.	2000	2001	2002 1er. Trimes.
COMCAR	35	27	7	2	1	0
LIBERTAD	5	5	1	0	1	0
CARCELES DEPARTAMENTALES		No surge	No surge	29	42	17

180

Aunque, como lo demuestra el cuadro anterior, el número de fugas no es elevado, la primera medida tomada después de los sucesos ocurridos en el Penal de Libertad, y con motivo del traslado de reclusos al establecimiento de La Tablada, fue un decreto del Poder Ejecutivo referido a las posibilidades de acción de la guardia policial destacada en los perímetros de los establecimientos carcelarios.

El artículo 2º de ese Decreto establece: “El guardia policial que esté apostado en el perímetro de los establecimientos carcelarios deberá cumplir para el buen desempeño de su misión, ante un intento de fuga o actividad anormal en el entorno, con los siguientes procedimientos: se dará la voz de ALTO y solicitud de identificación, en forma enérgica y clara.- De no acatarse la misma, se repetirá, con la advertencia de que se hará uso del arma de fuego. En caso de persistir en la actitud, se efectuarán dos disparos al aire con fines intimidatorios. Y si aún así la persona sospechosa continuara con su intención de fugarse se le disparará a los fines de su detención efectiva”.¹⁸¹

¹⁷⁹ Diario *El Observador*. 8 de marzo de 2002. P. 12.

¹⁸⁰ Ministerio del Interior. Departamento de Información y Prensa. Datos al 5 de mayo de 2002. P. 2.

¹⁸¹ Decreto de ley N° 110/2002, 22 de marzo de 2002.

El doctor Langón Cuñarro, afirmó que sería conveniente la derogación de dicho decreto, ya que *“no se le puede disparar a un recluso por pretender fugar sin violencia”*, agregando que *“el decreto en cuestión rompe con la tradición y la doctrina del país”*.¹⁸²

11. Falta de preparación del personal penitenciario.

A las dificultades de relacionamiento entre reclusos y guardias que tiene lugar en el ámbito carcelario, se agrega la falta de preparación especializada del funcionario policial, que lo lleva a limitarse a las tareas de custodia y represión.

Con respecto a este punto, un informe de SERPAJ expresa que *“Se trata de un personal no solo carente de especialización alguna, sino escaso, mal remunerado y no vocacional.- Es excepcional el policía que se siente a gusto en esta tarea. Por el contrario, desde el personal jerárquico hasta los agentes de menor escalafón, no se sienten ni motivados ni formados para esta función”*.¹⁸³

El Diputado Díaz Maynard decía, en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que *“los encargados del instituto penitenciario no tienen una formación destinada a esa tarea. Los propios reclusos –por ejemplo, en el Penal de Libertad- se referían con simpatía y casi con piedad a los policías que trabajaban durante 18 horas en la cárcel, en condiciones bastante similares a las suyas. Evidentemente, estos funcionarios no optaron por ser policías para convertirse en guarda-cárceles ni fueron educados para ello”*. Y continúa diciendo que hasta un Director del Penal de Libertad comentó: *“Yo de esto no sé nada. A mí nunca me enseñaron a manejar un establecimiento carcelario”*.¹⁸⁴

De manera de atender esta situación, el Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario, postula *“el funcionamiento de una escuela de capacitación penitenciaria realmente especializada y permanente en tanto resulta insuficiente la previsión de alguna materia específica en el plan de la escuela policial”*.¹⁸⁵

¹⁸² Semanario *Estado de Derecho*. N° 77. 8 de mayo de 2002. P. 1.

¹⁸³ Informe de SERPAJ. *Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. P. 15.

¹⁸⁴ Diputado Díaz Maynard. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 6 de abril de 2002. P. 6.

¹⁸⁵ *Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario*. Montevideo, 1996. P. 11.

Pero también sostiene que *“Ontológicamente la función policial y la penitenciaria no sólo son diferentes sino antitéticas”* y que *“ La experiencia de estos 25 años demuestra que la diversidad de fines se exterioriza en la interrelación del funcionario policial y el recluso, cargada de desprecio y reproches recíprocos. El funcionario policial, educado y habituado a desenvolverse dentro de la lucha contra la delincuencia, una vez dentro del sistema penitenciario visualiza al interno como su enemigo y el propio sistema lo condiciona contra él; asimismo el interno percibe a su custodia como su aprehensor y rival”*.¹⁸⁶

Expresando el mismo parecer, el Informe Carcelario del Parlamento Latinoamericano también considera que se forma una barrera entre reclusos y funcionarios y que *“Esta barrera se acentúa cuando el personal es reclutado en la propia policía que ha sido, en numerosos casos, la responsable de la pérdida de la libertad dando lugar así a una de las más absurdas paradojas del sistema penal: el segmento de mayor poder selectivo en el proceso de criminalización –el policial- luego de haber identificado, seleccionado y estigmatizado al desviado, tiene a su cargo la tarea de rehabilitación del infractor”*.¹⁸⁷

Por ese motivo tanto el informe del Parlamento Latinoamericano como el de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario, recomiendan que los establecimientos penitenciarios salgan de la órbita del Ministerio del Interior, pasando a constituir un servicio descentralizado con su propia organización, lo que –sin duda-, debería obedecer también a una reforma de fondo, que no solamente atienda el aspecto de la dependencia administrativa.

De ese modo se solucionaría el problema del personal técnico que también se encuentra afectado por la dependencia al escalafón policial. En ese sentido, el informe de SERPAJ expresa que *“En todos los establecimientos visitados se observan carencias de personal técnico especializado, lo que impide la aplicación del tratamiento diferencial ordenado por la Ley.- En la mayoría de los establecimientos del interior del país no existen técnicos. La mayoría de los técnicos están incorporados al Instituto Nacional de Criminología, y están asimilados al escalafón policial, sujetos por lo tanto al reglamento que regula al personal subalterno del Ministerio del Interior. Esta relación de dependencia pone en juego la autonomía e independencia profesional y, de*

¹⁸⁶ Idem. P. 11.

¹⁸⁷ Informe Carcelario del Parlamento Latinoamericano. Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina. 2000. P. 11.

hecho, el acto técnico-profesional, estará en última instancia, sujeto a la decisión de la autoridad administrativa.- Testimonios de diversos técnicos sobre este aspecto indican que esta relación laboral es un serio inconveniente para el desempeño profesional, independientemente de la disciplina de la que se trate”.¹⁸⁸

12. Desconocimiento de las normas reglamentarias.

En cada cárcel existen reglamentos al cual deben ajustar su conducta tanto autoridades como reclusos. No obstante, habitualmente estos no se aplican y el hecho de que sean absolutamente desconocidos por los reclusos permite a los guardias actuar con absoluta arbitrariedad.

Eso es lo que habilita a que el informe de SERPAJ exprese que “*El individuo recluido conoce las reglas recién cuando las viola*”¹⁸⁹, lo que indirectamente denuncia que no se actúa con la transparencia debida.

13. Maltrato a quienes visitan a los reclusos.

En este sentido SERPAJ también ha denunciado, la victimización de familiares y amigos de los presos, que deben soportar largas esperas –bajo el sol del verano, o en el frío invernal- para ingresar a los principales establecimientos carcelarios. Por otra parte, se reiteran denuncias de que la revisión al ingresar a las visitas en algunos casos es agresiva y sin el debido respeto a la dignidad de las personas.

En el informe de SERPAJ se dice que “*El registro de las visitas es también otra causal de quejas, por el empleo de métodos humillantes y abusivos, sobre todo en la revisión de mujeres al ingreso de éstas a los establecimientos*”.¹⁹⁰

A la vez los familiares se quejan de que a los reclusos no les llegan los alimentos que les llevan y, entre otras cosas, también denuncian que es habitual la censura de la correspondencia, tanto la que ingresa como la que sale, que es leída preventivamente por el funcionario de turno.

Por otra parte, “*El recinto donde se produce la visita es en la mayoría de los casos reducido en relación al número de visitantes; sin sillas y mesas suficientes, con*

¹⁸⁸ Informe de SERPAJ. *Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995.P. 15.

¹⁸⁹ Citado en la Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 6 de abril de 2000. P. 22.

¹⁹⁰ Idem. P. 23.

*carencias totales de intimidad y de silencio para desarrollar un diálogo normal; procedimientos rígidos de revisión al ingreso y egreso del visitante, muchas veces humillante.- A estas carencias se suman las ocasiones en que se produce una sanción lo que implica que el familiar no accede a la visita”.*¹⁹¹

El conjunto de elementos listados permite constatar un cuadro de “*severas (y en ocasiones gravísimas) violaciones a los derechos humanos*”.¹⁹²

Y entonces es necesario considerar “*que los establecimientos de reclusión son, antes que nada, elementos de contención en los que por orden judicial un ser humano queda privado de su libertad y el Estado asume la responsabilidad de esa privación de libertad. Esto último implica disponer de la privación de libertad pero también las condiciones en las que se lleva adelante*”.¹⁹³ Es decir que el Estado es el responsable de las condiciones de reclusión.

Este aspecto es el que lleva al profesor Langón a expresar que “*El Estado es el garante de los reclusos que mantiene a su disposición*” y por ese motivo, podría aplicársele la figura del “*delito de omisión impropia*” debido a los “*malos tratos proporcionados por los guardias, los hurtos, las violaciones cometidas al interior de las cárceles, los suicidios, etcétera*”. Pues “*no impedir un resultado que se tiene la obligación de evitar equivale a producirlo; existe una equivalencia entre cometer un hecho directamente y no evitar que se produzca*”.¹⁹⁴

Como lo dice Gonzalo Fernández “*Estamos en una institución total con características deteriorantes*”, pero -continúa-, “*podemos hacer el máximo esfuerzo para evitar que estas características institucionales se traduzcan en efectivo deterioro. Es decir, tratar de que la cárcel deteriore lo menos posible. Eso sí, eso se puede hacer. No es necesario hacer requisas que humillen a la gente, no es necesario dar gritos de indios y golpear los barrotes con los palos y hacer poner a la gente desnuda en el fondo, tirarle todas las pertenencias al medio del pabellón para secuestrarles punzones (nunca entendí por qué se hacen estas atrocidades), no es necesario revistarlas*

¹⁹¹ Informe de SERPAJ. *Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995.P. 14.

¹⁹² Informe de SERPAJ. Citado en la Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 6 de abril de 2000. P. 22.

¹⁹³ Diputado Alberto Scavarelli. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 6 de abril de 2000. P. 10

¹⁹⁴ Miguel Langón. *Seminario: Realidades y Perspectivas del Sistema Carcelario Uruguayo*. 9 de mayo de 2002.

*físicamente en condiciones humillantes; no es necesario hacer que se bañen desnudos todos juntos perdiendo toda intimidad, no es necesario un fenómeno de contaminación, es decir que el sujeto tenga relación con su mujer o con su compañera y que los demás estén haciendo una barrera; no es necesario someter a vejaciones a la vista, no es necesario destruir los paquetes para ver si entran metales; hay detector de metales en todos los aeropuertos, se pueden poner en las cárceles. Es decir, todas esas maldades gratuitas, vejatorias, destructoras de la personalidad se pueden evitar tranquilamente. Creo que ya es algo que trata por lo menos de reducir el efecto del deterioro”.*¹⁹⁵

¹⁹⁵ Citado por Guillermo Payseé. Versión taquigráfica del Grupo Tripartito de Derechos Humanos. Sesión del día 9 de mayo de 2002. P. 15.

Capítulo 6

ALGUNAS PROPUESTAS ALTERNATIVAS

A partir del marco teórico planteado, es necesario considerar que las propuestas de mejoramiento no pueden pasar por la legitimación del sistema carcelario.

En opinión de quienes han estudiado en profundidad la realidad carcelaria, *“No hay ninguna cárcel rehabilitadora. Si hubiera una cárcel de cinco estrellas no sería rehabilitadora. Cuando hablamos de la necesidad de mejorar el sistema carcelario no estamos buscando legitimarlo. (...) Nosotros deseamos un sistema carcelario menos violento, más humano, más respetuoso de los derechos (...) pero de ninguna manera estamos legitimando las cárceles”*.¹⁹⁶

Partiendo, entonces, de este supuesto, se citarán algunas de las propuestas que se están considerando en la actualidad.

Recomendaciones del Parlamento Latinoamericano

La Comisión Especial de Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano considera que frente a la crisis de las prisiones pueden asumirse tres posiciones. En primer lugar, la abolicionista, sostenida por ilustres pensadores, pero que ha quedado de lado pues no ha propuesto soluciones alternativas.

En segundo término, *“aceptar con cinismo –como ocurre en autores norteamericanos que ante el fracaso de las ideologías resocializadoras ‘lo correcto es que la prisión sea un mero local de depósito de mercadería humana fallada y lo mejor es que las administren empresas privadas, que son más eficientes que el Estado’ (Zaffaroni)”*.¹⁹⁷

Por último, una posición que plantea la descriminalización y la descarcerización mediante medidas alternativas y que considera la prisión como la última instancia a la que debe llegarse. Esta posición sostiene, además, la necesidad de *“integrar el subsistema penitenciario al sistema penal, haciendo efectivo en él los principios de*

¹⁹⁶ Diputado Díaz Maynard. *Seminario: Realidades y Perspectivas del Sistema Carcelario Uruguayo*. 9 de mayo de 2002.

¹⁹⁷ *Informe Carcelario del Parlamento Latinoamericano*. Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina. P. 12. Citando a Zaffaroni en “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas

*legalidad y protección de los D.D.H.H., imponer su humanización, colocando en el centro del mismo el concepto de dignidad del recluso como sujeto de todos los derechos que la resolución judicial privativa de libertad no haya limitado y, por fin, democratizarlo, a través de la gestión de los propios reclusos en la organización de su sistema de vida y de la participación de la comunidad, para lo cual resulta imprescindible terminar con su hermetismo y opacidad”.*¹⁹⁸

Y manifestándose partidaria de esta última opción, plantea una lista de recomendaciones para mejorar el sistema carcelario actual. (Ver Anexo III).

Con respecto al problema del hacinamiento propone, de acuerdo a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, aprobadas por la ONU en 1990, las siguientes medidas inmediatas. “1. *Definición clara y precisa del objeto de la pena privativa de libertad.*- 2. *Despenalizar conductas que no signifiquen un grave daño a la sociedad ni a la víctima.*- 3. *Reemplazar en ciertos casos, la privación de libertad por medidas alternativas, tales como: a) sanciones verbales; b) libertad condicional; c) pérdida de derechos e inhabilitaciones; d) multas; e) incautación; f) indemnización a la víctima; g) suspensión de la sentencia o condena diferida; h) régimen de prueba y vigilancia judicial; i) prestación de servicio a la comunidad; j) presentaciones periódicas; k) arresto domiciliario; l) cualquier otro régimen que no entrañe internamiento”.*¹⁹⁹

Entre las demás recomendaciones se destaca que los establecimientos carcelarios dependan de un Ministerio de Justicia o de institutos autónomos independientes de la policía, la formación del personal penitenciario en institutos adecuados, y la adecuación de las cárceles existentes y las que se construyan, a los principios de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Plantea también la necesidad de una adecuada defensa, el tratamiento diferenciado a los jóvenes menores de 21 años que ingresen a prisión, la eliminación de privilegios y la adopción de modelos que eliminen la violencia interna y la corrupción, etcétera.

Asimismo, propone fomentar la colaboración de la comunidad en la rehabilitación del recluso, la adecuada atención a sus familiares y la restitución de los derechos civiles del recluso.

constitucionales” En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. P. 186.

¹⁹⁸ Idem.

¹⁹⁹ Idem. P. 27.

En el informe también se recomienda especialmente, la aplicación de proyectos de autogestión que se han venido implementando con buenos resultados. En cuanto a ellos, explica que *“Se trata de la división de los reclusos en grupos pequeños –entre ochenta y cien en un caso y no más de treinta en otro- a cuyo cargo se encuentra un Director o ‘Monitor’, lo que permite un relacionamiento directo e individualizado con cada uno de los componentes del grupo. Su resultado tendería a convertir grandes prisiones -totalmente desaconsejables por las dificultades de administración y por la necesaria despersonalización que implican- en un conjunto de prisiones de tamaño reducido funcionando en el mismo recinto. Si el personal a cargo de cada uno de esos grupos -que en general están acompañados de Comisiones Técnicas con cometidos específicos- tiene suficiente nivel de capacitación, el procedimiento debe significar un sensible mejoramiento de las posibilidades de que tengan éxito los programas que pretendan la reinserción social de los internos”*.²⁰⁰

Medidas alternativas

Como se ha mencionado, una de las acciones a emprender frente al tema carcelario, pasa por la instrumentación de medidas alternativas, es decir por el desarrollo de una estrategia que reduzca progresivamente la aplicación de la sanción carcelaria.

Como ejemplos de medidas alternativas, resulta pertinente citar la clasificación que propone Gonzalo Fernández, quien las divide en cinco grupos.

El primero de ellos estaría conformado por las llamadas medidas semiprivativas de libertad, entre las que se incluyen *“los sistemas de arresto intermitente, el arresto de fin de semana, el arresto nocturno, los sistemas de semi-detención o un instituto bastante novedoso, empleado en Holanda: la exploración carcelaria; una visita guiada del infractor –transgresor juvenil o delincuente primario- por el sistema penitenciario, que tiene propósito ejemplarizante y busca hacerle conocer la realidad que le aguarda, en caso de reincidencia”*.²⁰¹

En el segundo grupo de medidas alternativas se encontrarían las consistentes en prestaciones laborales *“a través del servicio civil, el trabajo en beneficio de la víctima,*

²⁰⁰ Idem. P. 16.

²⁰¹ Gonzalo Fernández. “Crisis de la prisión y medidas alternativas” En *La Justicia Uruguaya*. Tomo CXI. P. 143.

el trabajo comunitario o de interés general".²⁰² Pero es necesario considerar que las prestaciones laborales deben hacerse con el consentimiento del sujeto, quien debe expresar su voluntad de optar por ese régimen sancionatorio penal. *"Su consentimiento deviene pieza fundamental, ya que de lo contrario se caería en una situación de trabajo forzado, prohibido por muchos textos constitucionales y también por el Convenio N° 29 de la OIT"*.²⁰³

Entre las medidas contenidas en el tercer grupo, estarían *"aquellas de tipo interdictivo, centradas en las inhabilitaciones, y las de carácter limitativo, tales como la prohibición de ausentarse del país, el retiro del pasaporte, las privaciones temporarias del permiso de conducir, la obligación de presentación periódica a la autoridad administrativa o judicial, la prohibición de tenencia y/o porte de armas, etc"*.²⁰⁴

El cuarto grupo contendría las medidas de índole patrimonial, compuestas básicamente por multas y, el quinto, las *"sanciones puramente morales, indicadas para delitos levisimos, tales como la amonestación, el apercibimiento o la reprensión judicial, consistentes todas ellas en una severa admonición al sujeto, apercibiéndole a título de advertencia penal"*.²⁰⁵

La mayoría de las propuestas actuales destacan la eficacia de la instrumentación de medidas alternativas, y al respecto los dos ejemplos siguientes resultan ilustrativos.

El primero consta en el informe del Parlamento Latinoamericano y dice lo siguiente: *"Refiriéndose a la reforma carcelaria de Cataluña, el Prof. de criminología de Barcelona, Santiago Redondo, después de manifestar cómo ella redundó en forma inmediata en la mejora de la convivencia en las prisiones, se formula la pregunta de si las medidas y programas de rehabilitación implementados reducen la reincidencia, tema que en su opinión es la prueba de fuego de la que puede hacerse en el subsistema penitenciario. Responde a ella, estableciendo que las investigaciones realizadas después de la reforma comprueban 'que existen grandes diferencias en la reincidencia de los sujetos, dependiendo de las medidas de rehabilitación aplicadas a ellos'. Y proporciona dos ejemplos claros: el primero 'se refiere a la comparación entre quienes durante el cumplimiento de su condena pasaron por régimen cerrado y aquellos otros sujetos que lo hicieron por régimen abierto. De los primeros, seis de cada diez sujetos*

²⁰² Idem.

²⁰³ Idem.

²⁰⁴ Idem. P. 144.

²⁰⁵ Idem.

reincidieron, mientras que de los segundos sólo dos de cada diez volvieron a delinquir...; el segundo ejemplo se refiere a la población estudiada entre quienes habían terminado su cumplimiento mediante extinción de condena y quienes, por el contrario, habían accedido a la libertad condicional. De los primeros, cinco de cada diez reincidieron, mientras que de los segundos sólo volvieron a delinquir dos de cada diez”.²⁰⁶

El segundo testimonio es de la doctora Tonar, quien en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes decía: “Con respecto a las penas alternativas, quiero decir que antes de ser defensora en lo penal en Montevideo trabajé en el interior, y luego como defensora de menores infractores en la capital del país. En los últimos dos años en que trabajé en los Juzgados de menores infractores se probó aplicar medidas alternativas con aquellos jóvenes que cometieran delitos ‘graves’ –dicho esto entre comillas- como pueden ser rapiñas o algunos homicidios. En estos casos no se internaba al menor sino que se lo obligaba a cumplir trabajos comunitarios. En estos momentos no tengo los datos exactos pero llevábamos una estadística y de ella comprobamos que la cantidad de chicos que cometían delitos eran los menos, pero el 95% -diría que hasta el 100%- de quienes habían sido internados en lo que antes se conocía como cárcel de Miguelete para menores infractores o en la Tablada, los veo hoy, lamentablemente, con más de dieciocho años de edad, en Santiago Vázquez o en la cárcel de Libertad”.²⁰⁷ Y por ello considera que “Hay que tomar muy en cuenta las medidas alternativas no sólo para descomprimir las cárceles sino para brindar una oportunidad a los primarios”.²⁰⁸

A pesar de la demostrada eficacia de las medidas alternativas nuestro país aún no cuenta con leyes en tal sentido. Aunque en 1996 la Cámara de Representantes votó un proyecto de medidas alternativas, este no fue ratificado por el Senado. Sin embargo -y a pesar de ello-, algunos jueces las aplican sin ley y aun contra ella, aunque con el lógico respaldo de la Suprema Corte de Justicia.

²⁰⁶ Idem. P. 9.

²⁰⁷ Dra. Estela Tonar. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 18 de mayo de 2002. P. 12.

²⁰⁸ Idem.

Propuestas que tienen que ver con el trabajo

Entre las medidas fundamentales para mejorar la situación carcelaria, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes -integrado con representantes del Poder Judicial y de los Ministerios del Interior y de Salud Pública- está estudiando las que tienen que ver con el trabajo. Estas se refieren no solo a superar el ocio obligatorio, sino a promover los efectos que el trabajo puede generar en la vida del recluso. Los trabajos que actualmente se considera que podrían organizarse, se refieren a tareas agrarias, artesanías, trabajos de tipo industrial, entre otros, incluyendo enseñanza de oficios, con el complemento de talleres educativos (primaria, secundaria, computación, etcétera), para lo que podría contarse con la colaboración de fundaciones, iglesias, dependencias universitarias y docentes voluntarios.

Por ello, en una de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, el Diputado Agazzi, destacaba los efectos que el trabajo agrario puede generar. Y decía que *“Se trabaja en grupos; en la tierra nadie puede trabajar solo. Uno puede dar vuelta tierra con palas de diente, preparar canteros grandes, pero después tienen que venir cinco personas para encarterar, luego tres más para sembrar y posteriormente ocho para otras cosas. Esta labor ayuda a la organización, pero para que sea posible implica una reorganización del penal. (...) En esto todos tienen que colaborar, hasta quien guarda las herramientas y se las da a los reclusos”*.²⁰⁹

Pero además del aprendizaje que implica el trabajo grupal, son reconocidos los beneficios que reporta el trabajo en general. *“Por el trabajo, el hombre transforma su mundo circundante, construye y crea. Al darle forma, utilidad o belleza a alguna cosa, por modesta que sea, se va modelando su personalidad y su carácter, creando el hábito del esfuerzo consciente, ordenado y metódico.- Si se realiza en condiciones satisfactorias, dignifica, fortalece la autoestima, la confianza en la propia productividad y estimula la creatividad”*.²¹⁰

²⁰⁹ Diputado Agazzi. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 9 de mayo de 2002. P. 9.

²¹⁰ Margarita O'Neill de Gutiérrez. “El trabajo como factor de rehabilitación social en el tratamiento penitenciario” En *Anales de las Primeras Jornadas Uruguayas de Criminología*. Tomo II. Instituto Nacional de Criminología. Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Reclusión. Montevideo, 1989. P. 162.

Por ello se procura el incremento de las plazas laborales para los reclusos, lo que, entre otros elementos, sería posible “a) Si se extendiera la explotación agraria en los establecimientos ubicados en zonas rurales.- b) Si se empleara la producción de los talleres escuela para el autoabastecimiento y equipamiento del personal penitenciario.- c) Si se realizaran más convenios con organismos públicos o privados”.²¹¹

Proyectos actualmente a estudio

Proyecto de ley de creación del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario

En noviembre de 2001 la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley titulado *Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario*, que había sido presentado en 1990 por el señor Diputado Díaz Maynard, y que actualmente se encuentra a estudio de la Cámara de Senadores. (Ver Anexo IV)

La persona que desempeñará el cargo de Comisionado Parlamentario será designada por tres quintos de votos de la Asamblea General, lo que exigirá un importante consenso político en torno a su idoneidad profesional y su versación en derechos humanos.

Entre los requisitos solicitados se establece que deberá contar un mínimo de diez años de antigüedad en el ejercicio profesional y al menos cuarenta años de edad.

Su cometido será el de asesorar al Poder Legislativo en su función de control de los demás poderes del Estado, teniendo como principal objetivo la promoción del respeto de los derechos humanos de las personas sometidas a privación de libertad.

El Comisionado podrá solicitar información a las autoridades carcelarias sobre las condiciones de vida de los reclusos y las medidas adoptadas que puedan afectar sus derechos. Tendrá la potestad de formular recomendaciones a los encargados de los establecimientos carcelarios quienes, en caso de no seguirlas, deberán dar cuenta de las razones para ello. Asimismo, podrá recibir denuncias sobre violaciones de derechos, realizar inspecciones, preparar y promover los estudios e informes que considere de interés para el desempeño de sus funciones, interponer recursos de amparo o habeas corpus, etcétera.

²¹¹ Idem. P. 164.

Asimismo, rendirá un informe anual ante la Asamblea General, pudiendo brindar informes extraordinarios cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo ameriten.

Proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Rehabilitación.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes está estudiando un proyecto, presentado también por el Diputado Díaz Maynard, por el que se crea el Instituto Nacional de Rehabilitación (ver Anexo V) como un servicio descentralizado que sucederá a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, del que pasarán a depender los establecimientos carcelarios y el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

A raíz de esta iniciativa las cárceles dejarían de depender del Ministerio del Interior relacionándose con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura.

El Diputado Díaz Maynard considera que la dependencia de las cárceles del Ministerio del Interior *“es un error profundo, que pudo haberse justificado en el año 1971, en situaciones particularmente complicadas para el país”*.²¹² Pero actualmente, tal como lo entendió la comisión presidida por el doctor Tommasino, no se justifica esa inserción institucional, por lo que propone el presente proyecto sin dejar de considerar, sin embargo, que la reforma del sistema carcelario debe ser más profunda, pues no alcanza solamente con un simple cambio que modifique la dependencia institucional.

Este Instituto será el encargado de cumplir las normas constitucionales, pactos internacionales y disposiciones legales que tengan que ver con el régimen penitenciario, propiciando el mejoramiento de todo el sistema carcelario y la normativa al respecto, para lo que podrá presentar los anteproyectos que entienda adecuados.

El proyecto prevé la creación de una Comisión Honoraria, designada por el Poder Ejecutivo, que asesorará al Instituto en lo relativo al mejoramiento del sistema carcelario por medio de la actualización de la legislación penitenciaria. Entre sus cometidos figura el asesoramiento acerca de la puesta en práctica y reglamentación de la actividad laboral de los reclusos, la instrumentación de cursos técnico- educativos y también del Hospital Penitenciario o Comisiones de Sanidad Penitenciaria.

²¹² Diputado Díaz Maynard. *Seminario: Realidades y Perspectivas del Sistema Carcelario Uruguayo*. 9 de mayo de 2002.

Tal como lo establece el artículo 9º, dicha Comisión estará integrada por un miembro propuesto por la Suprema Corte de Justicia, uno por el Ministerio del Interior, uno por el Ministerio de Educación y Cultura, uno por la Universidad de la República, y otro por Organizaciones No Gubernamentales de protección de los Derechos Humanos.

Proyecto de creación del Centro Nacional de Rehabilitación

El proyecto del Centro Nacional de Rehabilitación, que funcionará en el local del ex Hospital Musto, será ejecutado en la órbita del Ministerio del Interior y se instrumentará con la asistencia financiera del BID. La concreción del proyecto se ha retrasado pues estaba prevista para fines del año 2001, pero actualmente se estima que comenzaría a funcionar en julio de 2002.

Al exponer esta iniciativa en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes el doctor Borrelli, Subsecretario del Ministerio del Interior, explicó que: *“se trata de una experiencia piloto, durante el primer año se atenderá a cincuenta reclusos, en transición hacia la libertad, de dieciocho a veintinueve años, diagnosticados para una seguridad mínima y que estén autorizados a las salidas transitorias otorgadas por parte del Poder Judicial. Este centro de reclusión será de mínima seguridad, ya que estará ubicado en pleno centro de Colón”*.²¹³

Para la planificación de este Centro se han tomado en cuenta las consideraciones de la Comisión presidida por el doctor Tommasino y las directivas nacionales e internacionales en la materia, *“buscando el régimen progresivo para que el individuo vaya comprometiéndose a un programa y a buscar una salida. Además, se le hace perder todos los hábitos carcelarios –los que ha tenido durante mucho tiempo-, que muchas veces son perversos, introduciéndolo en una etapa anterior a la de su egreso”*.²¹⁴

En el diseño de este proyecto se ha hecho hincapié en la creación y el fortalecimiento de una red institucional. Para ello se coordinarán esfuerzos con instituciones que desarrollen programas, tanto en la órbita pública como en la privada, a fin de cubrir las necesidades de los futuros internos en cuanto a capacitación laboral y reinserción el mercado de trabajo.

²¹³ Doctor Borrelli. Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 13 de marzo de 2001. P. 9.

²¹⁴ Idem.

Asimismo, se ha previsto apoyar al recluso mediante una estrategia de intervención a nivel individual pero también, familiar y comunitario, la que será desarrollada por un equipo técnico.

Al preguntársele en la Comisión de Derechos Humanos acerca del personal que actuaría en este Centro en contacto con los reclusos, el doctor Borrelli contestó que: *“La idea es que no sea el mismo personal que actualmente está trabajando en la penitenciaría del COMCAR y en el Penal de Libertad, ni siquiera el custodial. Nuestra intención es que quienes tratan con los detenidos sean técnicos y que para la custodia se traigan personas de otras partes, que no estén ‘contaminadas’ –lamento tener que utilizar esta palabra- con el sistema carcelario”*.²¹⁵

A la vez, expresó que ya se comenzaría a instruir al personal y que *“Lo fundamental es que el preso reciba una atención individual y personalizada y que su referente sea una persona a quien pueda transmitir todos sus problemas. Esto para que el preso sienta que tiene un referente aun dentro del sistema carcelario”*.²¹⁶

El trabajo del Centro Nacional de Rehabilitación también tomará en cuenta el territorio en el que se desarrollará el proyecto y el trabajo en lo que tiene que ver con la red social. Con respecto a esto en el informe final de la Consultoría sobre relacionamiento del Centro con la comunidad se expresa: *“La premisa con la cual partimos para la consideración de este punto, fue que una de las tareas prioritarias del CNR como institución que opera en un territorio concreto es contribuir al fortalecimiento de la red social territorial y promover políticas y proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de los vecinos de su entorno. En esto se juega no solamente la posibilidad de reinserción social eficaz de los internos, sino también la construcción de una imagen de institución integrada y abierta a las necesidades y aspiraciones de la comunidad”*.²¹⁷

También es importante destacar que el Centro Nacional de Rehabilitación no dependerá de la Dirección Nacional de Cárcenes sino, directamente, del Ministerio del Interior, y su Dirección estará desempeñada por un *“Docente egresado del Instituto de Formación Docente, con postgrados que le acrediten nivel terciario en Organización y Supervisión Escolares; con experiencia en Dirección de Centros Educativos; con por lo menos diez años de experiencia laboral en Centros de Rehabilitación Carcelaria; con*

²¹⁵ Idem. P. 10.

²¹⁶ Idem.

²¹⁷ Informe final de la Consultoría sobre relacionamiento CNR-Comunidad. Montevideo, 2000. P. 3.

*por lo menos cinco años de experiencia en cargos directivos de administración, coordinación y/o dirección de programas educativos y de rehabilitación de infractores”.*²¹⁸

A la vez, el Centro contará con el asesoramiento de una Comisión integrada por miembros de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de la Juventud, la Dirección Nacional de Cárceles, el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y también del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Sur –IELSUR- como Organización No Gubernamental, en representación de la sociedad civil.

²¹⁸ *Informe final de la Consultoría encargada del diseño de un plan educativo para el CNR.* Montevideo, 2000. P. 37.

Reflexiones finales

Para finalizar, nos parece importante citar un pensamiento de Carlos Elbert que expresa: *“El trabajo social comprometido con un proceso de realización humana, supone a nuestro juicio no solamente una acción hacia los sectores desposeídos en una percepción económico-social. En una perspectiva más amplia supone un compromiso con la acción afirmativa de derechos de todos los sectores discriminados o vulnerados en sus condiciones esenciales de dignidad humana”*.²¹⁹

Las condiciones de reclusión en las cárceles de nuestro país y la ideología a la que obedecen, hacen de las personas que allí se encuentran un grupo especialmente vulnerable en cuanto a las probabilidades de violación de sus derechos humanos.

Los argumentos y datos contenidos en el presente trabajo ratifican la hipótesis inicial en el sentido de que las condiciones actuales de las cárceles del Uruguay no contribuyen a la reinserción social de los internos. Más aún, el paradigma de la rehabilitación no resulta válido si no es reformulado de acuerdo con lo expuesto procurando, en primer lugar, neutralizar los efectos desocializadores de la cárcel, respetando los derechos humanos de los reclusos.

Sin pretender haber logrado un análisis exhaustivo, este trabajo ha apuntado a la necesidad de comenzar a saldar una deuda que el Trabajo Social tiene en la reflexión de la realidad carcelaria de nuestro país y del marco teórico en el que ella se desarrolla.

²¹⁹ Carlos Eroles. *Los Derechos Humanos. Compromiso ético del Trabajo Social*. Editorial Espacio. Buenos Aires, 1997. P. 26.

ANEXO I

Testimonio de la madre de un recluso fallecido

Estracto de la Versión taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesión del día 23 de abril de 2002.

“(Ingresa a Sala la madre de un recluso fallecido, señora Miriam Poggio)

--La Comisión de Derechos Humanos da la bienvenida a la señora Poggio.

SEÑORA POGGIO.- Viene a hablar una madre que ya no tiene a su hijo, que hace dos años falleció. Mi hijo falleció a causa de los malos tratos, e inhumanidad del plantel policial, porque son más corruptos los policías que los propios presos que están adentro.

Mi hijo estuvo en dos motines, en el último ya estaba enfermo. Fue a ver al doctor Inchaustegui porque se sentía enfermo y tenía ganglios. El doctor le dijo que era un simulador. Siguió una semana enfermo hasta que los compañeros empezaron a golpear las rejas porque, prácticamente, no tenía conocimiento. Entonces, llamaron a una ambulancia y lo trasladaron al COMCAR. A mí no me avisaron nada; cuando llamé y pregunté por qué no le habían avisado a los familiares, me dijeron que la familia no contaba. Tuve que esperar el día de la visita para ir a verlo. Cuando lo voy a ver, me quise morir. Estaba en una cama sin colchón, con una frazada toda mugrienta, sin funda; era un viejito, ellos se creían que él era mi papá. Le cambié la cama, le arreglé todo, le puse sábanas limpias. Hablo con el enfermero y me dice que mi hijo tiene SIDA, yo no estaba enterada de nada. Entonces, ¿qué hacer? Porque los familiares no contamos para nada.

Me vine para mi casa, llamé al COMCAR y me dijeron que lo iban a trasladar al Saint Bois, porque se creía que estaba tuberculoso. Para mí, él tenía una neumonía muy grande. Pasé todo un día llamando al Saint Bois y me dijeron que llamara hasta la 1 de la mañana que no molestaba. Recién al otro día, a las 5 de la tarde -que yo seguí llamando-, me dicen que ya lo trajeron, que fuera, y aunque no era día de visita me lo iban a dejar ver. Cuando lo fui a ver, me quise morir porque no me conocía; le llevé algunos merengues pero no los comió.

Me vengo para mi casa, al otro día voy, hablo con el médico y le dije de qué me valía a mí llevarle comida si mi hijo no podía comer por sus propios medios. Entonces, el

médico me dijo: "Yo le voy a hacer una carta para ellos, para que la dejen venir a darle todos los días la comida a su hijo; pero acá los que mandan son ellos". Llevé la carta y todos los días me permitieron llevarle la comida y darle de comer en la boca, porque mi hijo no podía comer por sus propios medios.

Después de eso, por la alimentación que yo le llevaba, por los medicamentos que le daban ahí -que muchas veces faltaban pero me permitían llevarle-, mi hijo se recuperó, aumentó de peso. Un día llegué y le dije: "Qué lindo que estás Marcelo". Y el me dijo: "Mamá, no te hagas ilusiones, porque hoy estoy acá y mañana me ves en el pozo".

Sucesivamente, le empezaron dolores de cabeza. Lo llevaron a sacar placas al Sanatorio Americano primero -donde fue muy bien atendido- y el doctor me dijo que tenía un tumor, que era como una naranja y me dijo: "Voy a decírselo a Marcelo". Le dije: "No, doctor, porque mi hijo ya tiene bastante con todo lo que tiene". Yo le dije a mi hijo que era un microbio y hasta que no dieran con el tipo que era, no le podían dar medicamentos. Cuando al otro día yo llegaba de mañana, tenía la celda que era una batalla campal, porque cuando le daban la morfina y él estaba solo, lo encontraba dormido en el suelo, el agua y el ventilador tirados, era algo así desastroso. Hasta ahí todo fue marchando más o menos bien porque lo atendían bien, del hospital no tengo queja. Pero la queja que sí tengo es que cuando lo llevaron por última vez a hacerse la tomografía -en esa oportunidad él no tenía fuerzas ni para caminar- como no había ambulancia, lo trasladaron en una camioneta policial, esposado en el suelo y con las manos atrás. Imagínese que fue de un punto a otro, porque fue del hospital al Maciel.

Yo estaba esperando, mi hijo llegó y me dijo -parece que lo veo-: mamá, no puedo más. De allí en más, mi hijo se siguió agravando.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita, para la versión taquigráfica y para conocimiento de los integrantes de la Comisión, que nos diga el nombre completo de su hijo, la edad que tenía al momento de fallecer y cuando sucedió esto.

SEÑORA POGGIO.- Mi hijo tenía treinta y siete años. Prácticamente no recuerdo las fechas debido a que al poco tiempo enfermó mi esposo y murió; las dos únicas personas que quería ya no las tengo.

Hablamos de algo que sucedió hace dos años. Yo le voy a dar el nombre y apellido mío, porque el padre no le quiso poner el apellido cuando murió, en el sepelio. Todo esto

era debido a que mi hijo había hecho algo malo y estábamos separados; aclaro que soy casada por segundas nupcias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le pido disculpas, pero es a los efectos de identificarlo en el sistema carcelario.

SEÑORA POGGIO.- Se llamaba Marcelo Javier Oronell Poggio. Cuando vino de hacerse la tomografía comenzó a agravarse. Recuerdo que una vez no había medicamentos y hacía dos días que estaba con dolor en el pecho. Debido a esto le dije al enfermero que si no había algún medicamento yo se lo compraba, como fuera. Tal es así que un sábado salí a comprar un medicamento y se lo traje. Esto le calmó un poco el dolor pero siguió grave. Hasta que un día que lo vi mal llamé al médico y cuando lo revisa dice que tiene pulso fino. El médico me llama y me dice que le quedan pocas horas de vida. A todo esto yo le pedí que me dejara quedarme con mi hijo y tuve la gran suerte de que pude estar con él toda la noche hasta el otro día que falleció. Ese día me dejaron la puerta de la celda abierta.

Aunque yo no tenga a mi hijo en este momento, entiendo el sufrimiento que deben pasar todas las madres que tienen a sus hijos enfermos y no hay ni una aspirina. Si usted pide un medicamento en Libertad: mentira, no lo hay, así como no hay una alimentación como la gente. Pero tampoco dejan pasar al familiar muchas cosas como puede ser un té Virginia -que si alguien se siente mal del estómago al tomarlo se recupera un poco- una crema con plantillas -como yo le llevaba a mi hijo- o una sopa crema. Pensé que ya que ellos no daban bien de comer en pleno invierno, una sopa crema lo reanimaría un poco. Hay muchísimas fallas.

Es tal la corrupción que hay que un policía me llamó a mi casa para decirme que él le daba bien de comer a mi hijo si yo le pagaba los conformes de una moto. A esto le respondí que yo le llevaba la comida y que las cosas las hablara con mi hijo y no conmigo. Esto es lo mínimo que puede pasar en una cárcel. Es lo mínimo.

Además, me han contado que cobran \$ 5.000 por los traslados al TACOMA y \$ 350 los celulares. Entonces, quien es más corrupto; los más corruptos son los más grandes.

Tengo en mi poder una carta -después voy a entregarla a Secretaría- que me escribió un recluso que hace tres años que no ve a los hijos porque está separado de la señora, la familia es muy pobre y no pueden sacarle la cédula de identidad a los niños.

Ayer me llamó una señora que tiene al esposo allí y me dijo que todas las noches los están apaleando. Todas las noches. Inclusive, les sacan las pertenencias que les sirven a ellos. El Comisario es el que hace dar las palizas todas las noches. De distintos módulos se juntaron reclusos para ir a hablar con el Director y él les dijo que no les iban a pegar más. Y esa noche les volvieron a pegar otra vez, como todas las noches. No sé que se puede hacer frente a todo esto, porque es castigo tras castigo. ¿Cómo va a salir bien una persona?

Un señor me dijo "Es una pena la cantidad de jóvenes que hay y cómo son apaleados". Hace poco murió un preso de hepatitis porque el doctor lo hizo bañar dos veces y lo apalearon; pero como no tenía familia todo quedó tapado. No me pudo averiguar el nombre del fallecido porque -como me dice en la carta- se pueden enterar otras personas, a él le puede ir mal y puede parecer ahorcado también. Muchos dicen que fue un ajuste de cuentas pero yo quisiera saber si fue tan así, porque ellos les dan a matar. La prueba está que el 24 de marzo yo realicé la reducción de los restos de mi hijo y el cráneo estaba todo aplastado. ¿Eso qué quiere decir?

¡Que los traten como gente, que los respeten y ellos van a ser respetados también! Eso pienso. Porque si a usted lo insultan, no se va a quedar callado la boca. A mi hijo le decían "pichi" y de todo. Creo que el más apaleado en el penal fue mi hijo porque no se callaba. Cuando el doctor Inchaustegui fue a ver al Saint Bois un preso que estaba por morir de SIDA, mi hijo justamente estaba hablando con un Cabo, tenía la celda abierta y entonces el doctor le preguntó "¿Cómo está Oronell?". No puedo decir todo lo que le dijo mi hijo. "¿Ahora me preguntás cómo estoy, después que me dejaste morir?" Y otras cosas más. El Cabo me dijo: "No, señora, tiene toda la razón, el doctor se dio media vuelta y se fue". Claro, los dejan morir. Usted va con un dolor y lo único que le pueden dar es una pastilla para dormir. Otra cosa no. Mentira que les dan medicamentos; mentira que gastan tanta plata en comida. Ponen en una olla 50 o no sé cuántos litros de agua, tres o cuatro huesos, un pedazo de carne, cuatro papas y unos fideos y eso es lo que comen. Cuando entran dos camiones de carne, uno entra vacío y el otro lleno. Una señora me dijo que esta es la leche que les dan; ella me la dio y la puedo mostrar. Se supone que es un litro de leche.

Si el Gobierno dice que gasta US\$ 500 en mantener a cada preso -no creo que con esto gaste tanta cantidad de dinero-, ¿a dónde va a parar lo demás? ¿Dónde va a parar la carne que no les dan y la verdura por la que los presos, de pronto trabajan, y no comen? No sólo no les dan la comida mínima que les corresponde -algo decente para comer- sino que

tampoco dejan que los familiares les llevemos. De pronto permiten pasar algo y al otro día no. Y a los gritos. Somos maltratados.

Un día cuando fui al COMCAR me quedó una moneda del ómnibus en el bolsillo y la agente femenina me gritó tanto, tanto... Yo le dije: "Es una moneda del vuelto del ómnibus. ¿Qué puede hacer con esta moneda?" Y me respondió: "Acá, con esta moneda son millonarios". Entonces, le contesté: "Si son millonarios, póngame a mí adentro con ellos", porque no creo que con esta moneda hagan algo".

Quiero dar un testimonio para que mejoren las cosas. Pero no sé, porque hay tanta corrupción. No es un policía sólo. Son varios y grandes. Y grandes. No digo que sean todos iguales porque se pueden encontrar buenos. Yo encontré una persona o dos muy bien, pero la mayoría son corruptos. Entonces, ¿cómo los presos van a andar bien si son más corruptos los policías que ellos?

SEÑOR PRESIDENTE.- Queremos formular una pregunta antes de realizar otras consideraciones.

Este testimonio que nos está brindando esta tarde seguramente lo vamos a hacer llegar a las autoridades competentes, concretamente, en conocimiento del señor Ministro del Interior.

SEÑORA POGGIO.- Puedo hablar en cualquier lado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La pregunta es si alguna de estas situaciones las ha denunciado ante la justicia.

SEÑORA POGGIO.- No.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda claro para la versión taquigráfica.

Si el señor Ministro o alguna autoridad competente quisieran ponerse en contacto con usted para esclarecer alguno de estos temas -por ejemplo, concretamente, el de ese funcionario que le planteaba el tema de los vales de una moto- ¿sería posible?

SEÑORA POGGIO.- Sí, no tengo inconveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Más allá de que usted está apuntando a algo general, entendemos su planteo y agradecemos su disposición porque está claro que no está reclamando por lo suyo porque ya no hay forma de resarcirlo. Está tratando de prevenir que continúe esta situación.

SEÑORA POGGIO.- Que las madres no sufran como sigo sufriendo yo hasta ahora. Porque jamás en mi vida voy a olvidar todo lo que pasó mi hijo y todo lo que yo pasé. Es un manoseo. Si le hacen bajar la ropa interior, ¿dónde vamos a meter los celulares o las drogas? Las drogas las pasa la policía que se comunican con el preso que sea; se arreglan entre preso y policía. A nosotros nos revisan -a mí me revisaban, porque hace dos años que no voy- tanto que no sé dónde podemos esconder un poco de droga, un celular ni nada. Ni una carta podíamos pasar. A la vuelta nos revisaban los bolsos por si había cartas adentro.

Quisiera que las cosas mejoraran porque para mí en estos momentos todo lo que está pasando en Libertad es un sufrimiento; hay enfermos de SIDA y de hepatitis y no tienen medicamentos ni atención. Terminarán todos muertos, no sé, y un país infectado.

Hoy sentí a Toyos hablar y decía que los policías estaban igual que los presos. ¡Mentira! Yo voy a hablar con Toyos porque está equivocado. El no sabe la vida que le da la policía a los presos. Aunque estén enfermos con hepatitis, se la ligan, les dan con palos, los manosean, les roban las cosas y les hacen cualquier cosa. Yo estoy dispuesta a hablar y a decirlo en cualquier lado y no me importa dar mi nombre y apellido. El apellido del padre, Oronell, no lo quiero dar porque me separé cuando mi hijo tenía cinco años y lo crié sola. Mi hijo fue un niño bueno, no fue callejero. Fue trabajador. Trabajaba en el Puerto; se anotaba de noche para cargar los barcos. Pero a la mayoría de edad se fue para Buenos Aires y cuando volvió -no sé si ya lo hacía allá- cometió un error muy feo. En ese momento, por lo que él había hecho, le pregunté en qué había fallado yo como madre. Entonces, él me contestó que muchos hijos tienen madre y padre y no los crían como yo a él, y que él era la manzana podrida. Mi hijo siempre fue muy respetuoso conmigo. Esa es la verdad.

Todo esto me duele enormemente y aunque mi familia esté en contra de que yo siga sufriendo -porque dicen que esto es un sufrimiento para mí- yo tengo que salvar a alguien o, al menos, tratar de que mejoren las cosas. Yo soy una sola persona, no sé si vendrán más a dar testimonios. No sé si podré hacer algo, pero todo lo que me sea posible lo voy a hacer por mi hijo que ya no está.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la segunda carta.

(Se lee:)

"Pocha lamentablemente no pude recabarte mayor información que la que te di. Me confirmaron un par de personas que este pibe que falleció 1º) hacía 7

años aproximadamente que estaba preso. No tenía visita y murió porque la guardia del 222 lo hizo bañar 2 veces estando muy mal con hepatitis. Les pegaron a todos, los hicieron bañar a todos y al rato entraron otra vez e hicieron lo mismo y este pibe no soportó.

Los enfermos que estaban ahí protestaron un poco pero por el temor a represalias o que los trasladen al Penal no hacen grandes protestas y el pibe como no tiene quién lo reclame, queda todo tapado. Intenté rescatarte el nombre de este pibe y no me supieron decir y tampoco pude insistir porque son temas que no se pueden preguntar mucho sin que llegue a los oídos de los que comandan toda esta porquería y los nombres de los enfermeros no importa porque son todos los que están en este tema. Medicamentos literalmente no hay. En las requisas están cometiendo todo tipo de abusos, el problema es como probarlos, para vender drogas. El trato es con el policía. Los traslados de un lugar malo a otro de privilegio es con el policía y vale plata. Las 2 únicas oportunidades de trabajo son empresa Pandi y Ariel S.A. Ambas son destroza hombres. Es trabajo insalubre, excesivamente agotador y el trato es pésimo. Somos tratados como animales. Esto es lo cotidiano. Pocha no estás probando nada. A nadie le importa que les cuentes cosas que ya saben. Necesitás pruebas. A Odri Tailor la estafó el Director y como protestó aparecieron un par de balazos por la ventana, 'coincidencia'.- Hay momentos que son vulnerables, por ej., Pablo Machado hacía muchas transas en un boliche muy conocido, Pícaros. El problema es que este tipo ya está sumariado. Los traslados valen mucha plata pero ellos se cuidan. Usan a un preso como intermediario. Los traslados al Tacoma valen US\$ 5.000. Hoy podés pescar un pescado grande pero no vas a encontrar a ningún preso que se te ofrezca de carnada. Esta gente es muy jodida. Tienen al toro bien agarrado de las astas. Se cuidan, van rotando, tienen el poder para tapar todo. Son vulnerables pero hay que saber cuándo, dónde y cómo pegar. Este Director que está ahora todavía ni se vio pero cuando se dé cuenta de la mina de oro que es COMCAR, de toda la corrupción que están manejando se va a cebar y va a cometer algún error y ahí lo vamos a sentar de culo, antes no se puede hacer nada. De nada sirve el coraje y el honor del pajarito ante el gato. Vos mandame decir con qué cuento para usar de carnada. Yo de acá me manejo. Yo estoy contigo".

(...)

Pienso que ya está todo dicho; a mi hijo no lo van a revivir.

Ahora estoy para ayudar a los demás, a las madres. Ellos empezaron todo esto al terminar el verano, por lo que no deben tener abrigo. Me pregunto cómo estarán viviendo, sin abrigo, muertos de frío, enfermos, tirados, sin un baño a donde ir y bañarse. Eso es calamitoso; es un problema que no sé cómo lo podrán arreglar.

Soy completamente apolítica, porque en verdad no entiendo la política, pero me pregunto por qué traen los módulos de tan lejos; acá se ofrecieron para hacerlos y tal vez lo podrían haber hecho más rápido. ¿Por qué se necesitan traer los módulos de tan lejos? ¿Por el factor dolar? ¿Para que gane más quien tiene que ganar? Ahí están todos para sacar tajada y hundir al más chico. ¿Por qué los grandes de guante blanco, que roban millones de dólares y no gallinas, van a las mejores cárceles, con televisión, calefacción y aire acondicionado? ¿Por qué esta gente no puede vivir un poco más dignamente?

No disculpo lo que hacen, como tampoco disculpé a mi hijo, pero pido que se tenga un poco de consideración porque así, cuando se reintegren a la sociedad, lo hagan de una manera mejor y no peor.

No tengo más nada que decir.

Agradezco muchísimo a la Comisión que me haya escuchado.

Defendiendo a todos los que debo, por lo menos, mitigo un poco el dolor que siento”.

ANEXO II

Carta de un recluso que denuncia malos tratos en la represión de un supuesto motín ocurrido el 5 de mayo de 2002, refutando versión oficial

“Dos versiones para un mismo ¿motín?

Los presos del Penal de Libertad que se encuentran alojados en un recinto especial por estar amenazados por los demás internos, denunciaron a la República y ante el Parlamento, que los episodios catalogados como intento de motín del domingo 5 de mayo fueron un montaje por parte de un oficial ‘para justificar’ la represión desatada. Habrían usado escopetas, gas lacrimógeno y hasta cadenas”.²²⁰

“El lunes 6 de mayo, en una entrevista con un canal de televisión, el inspector principal (r) Carlos De Avila, Director Nacional de Cárceles, reveló que un grupo de presos se había intentado amotinar. Agregó que gracias a la intervención de los funcionarios el mismo fue contenido, incluyendo el incendio que los procesados habían desatado.- Dijo De Avila que la revuelta había sido organizada por Marcelo Roldán, alias El Pelado, y que la misma había comenzado sobre las 21 y 30. El jerarca explicó que un preso volvía de una visita al médico que había solicitado previamente. En esa ocasión sus compañeros procuraron tomar de rehenes a los dos guardias que lo trasladaban: ‘Los policías evitaron esto cerrando la puerta de rejas a tiempo e inmediatamente los reclusos empezaron con los gritos característicos, insultos y demás’.- Seguidamente, aseguró De Avila, los internos comenzaron a causar destrozos, consiguiendo romper una mesada de hormigón y algunas tarimas. También prendieron fuego a los colchones y otros objetos que tenían a su disposición: ‘Se originó un principio de incendio importante y los funcionarios actuantes, junto a la guardia, reprimieron el intento de motín cuando los reclusos estaban queriendo destruir una puerta que sale hacia un patio exterior. En ese momento fueron reducidos’, aseguró el jerarca, dando a entender que los revoltosos querían fugar, a pesar de la custodia militar y del decreto reciente que habilitó a los policías para frustrar esto haciendo uso de armas de fuego”.²²¹

²²⁰ Diario *La República*. Viernes 17 de marzo de 2002. P. 14.

²²¹ Idem. P. 14.

Esa sería la versión oficial de los hechos ocurridos. Sin embargo, la carta del recluso entregada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, denuncia otra versión.

Ella dice lo siguiente:

“12-05-02

Sr. Director de La República, Dr. Fassano

De mi consideración.

Presente.

Quien suscribe, recluso Ramón Hernández, alojado en el Penal de Libertad, CI 2.027.561/7, me dirijo a usted, a fin de rogarle que tenga la amabilidad de poner en conocimiento de la población, la verdad de lo que está pasando en este Penal.

Nos encontrábamos alojados en el salón de visita, 49 reclusos que no habíamos participado del motín del mes de marzo de 2002; en dicho lugar gozábamos de visita, recreo, a pesar de estar muy mal alimentados, porque aquí se disfraza la comida cuando viene la prensa; el resto del año se come basura. Más allá de ello, hay un grupo grande, que colabora en la limpieza de los pisos del edificio, sacando escombros, hierro, e higienizando en lo posible, procurando evitar una epidemia para los reclusos que aún se encuentran alojados allí. Como se comprenderá, ello nos genera un gran conflicto con el resto de la población penitenciaria, pues, correcto o no, reparar una cárcel es colaborar con la policía.

Ya antes del referido motín, nosotros nos encontrábamos con “amparo judicial”, por diferencias con otros reclusos, que nos podían quitar la vida. Pero a pesar de ello, nos tuvimos que salvar solos, porque ese día los policías del celdario se fueron corriendo, a excepción de uno o dos. Pues bien, ahora, cuando estábamos alojados en el salón de visita, se dio un problema con uno o dos reclusos, y nos quebraron a palos a los 49 que estábamos allí.

El problema fue de la siguiente manera; el médico que concurrió el día sábado, sobremedicó con sicofármacos a un preso muy nombrado; el mismo, el día domingo 5 de mayo (pasado), se levantó como a las 20 horas con “resaca” de la sobredosis ingerida, y al reclamar más medicación, se generó una discusión verbal entre el referido recluso, y dos escopeteros custodias; ello provocó que los custodias empezaran a los tiros con sus escopetas, en forma indiscriminada, dejándonos a los otros 48 rehenes de una situación de la que no fuimos protagonistas ni partícipes. Algunos de los reclusos se pusieron como escudo el colchón, con el fin de evitar ser lastimados, o perder una vista

con los cartuchos de goma que estaban disparando. A pesar de ello, uno de nosotros perdió una vista gratuitamente. Pero, como se hallaba a cargo de la guardia el Oficial S/A Ruddy Gómez, quien nos tiene mucho odio por algunas denuncias penales que le hicimos en San José, por abusos y corrupción entre otras cosas, él mismo hizo tomar el salón por asalto, por intermedio de más de 50 efectivos armados con escopetas, picanas, cachiporras y gas lacrimógeno. Muchos de ellos estaban alcoholizados. Sin mirar a quien, esa banda de cobardes y ruines personajes comenzó a disparar cartuchos, a tirar gas, y a golpear con la mayor saña que se haya visto, a todos los que estábamos en el salón, y que no teníamos nada que ver con el problema. Disfrutaban mientras simulaban un remate de ganado, para ver quien golpeaba a quien, acorde al rencor que le tuviera el subastado; es inenarrable el terror que se vivió esa noche, e indescriptible la conducta de estos señores que no merecen llamarse policías, y peor aún, que estuvieran avalados por un oficial que le queda muy grande el uniforme, porque está enfermo de odio y omnipotencia.

La consecuencia de ello son 49 reclusos muy lastimados; uno de ellos perdió una vista, varios están con quebraduras múltiples, hay gente con grampas en la cabeza, costillas fracturadas varias, y todos, pero todos, llenos de hematomas. Nos pegaron hasta con cadenas.

Por si todo esto fuera poco, informaron erróneamente a la prensa de que hubo un motín. Pero el mismo no existió, los policías son los que prendieron fuego el salón porque se les fue la mano, y tienen que justificar de alguna manera la gente que lastimaron.

Ahora nos tienen en un sótano, 3 metros bajo tierra, 30 en un calabozo, 12 en otro, durmiendo en el piso, al lado de un pozo negro lleno de excremento, orín, y otras inmundicias, todos lastimados, sin atención médica, sin permiso para bañarnos y, por si fuera poco, seguimos siendo maltratados como animales, y a nadie parece importarles.

Le pido por favor publique todo esto; es la verdad.

Agradecido: recluso Ramón Rafael Hernández C.I. 2.027.531/9, sótano del Penal”.²²²

²²² Carta entregada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y al Diario *La República*.

Aclaración: la carta es acompañada por la firma y el número correspondiente de cédula de identidad de varios reclusos más, por lo menos la mitad de los alojados en el sector en el que ocurrieron estos episodios.

ANEXO III

Recomendaciones de la Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina

La Comisión del Parlamento Latinoamericano aconseja a los países tomar las siguientes medidas:

“I. Para resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, proponemos llevar a cabo las siguientes medidas, a corto plazo:

1. Definición clara y precisa del objeto de la pena privativa de libertad.
2. Despenalizar conductas que no signifiquen un grave daño a la sociedad ni a la víctima.
3. Reemplazar en ciertos casos, la privación de la libertad por medidas alternativas, tales como:
 - a) sanciones verbales;
 - b) libertad condicional;
 - c) pérdida de derechos e inhabilitaciones,
 - d) multas;
 - e) incautación;
 - f) indemnización a la víctima;
 - g) suspensión de la sentencia o condena diferida;
 - h) régimen de prueba y vigilancia judicial;
 - i) prestación de servicio a la comunidad;
 - j) presentaciones periódicas;
 - k) arresto domiciliario;
 - l) cualquier otro régimen que no entrañe internamiento.

De esta forma se adoptan las recomendaciones contenidas en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (Reglas de Tokio), aprobadas por la ONU el 14 de diciembre de 1990.

II. Eliminar la pena de muerte y la cadena perpetua.

III. Que los establecimientos carcelarios dependan de los respectivos Ministerios de Justicia, a través de institutos penitenciarios. En los países cuya estructura no prevé un Ministerio de Justicia, proponemos que dichos establecimientos estén sujetos a institutos autónomos especializados, independientes de la policía.

IV. Que el personal penitenciario tenga un mínimo de formación académica, en institutos adecuados o por convenios con Universidades, siendo más exigentes en la preparación del personal directivo.

V. Responsabilidad penal no antes de los 18 años. Proporcionar un tratamiento diferenciado a los jóvenes menores de 21 años que ingresen a prisión, de manera que se limite la posible influencia negativa de otros reclusos sobre ellos y que la sanción se cumpla en establecimientos o en secciones separadas del resto de los internos en una prisión.

VI. Juzgamiento en tiempo razonable con obligatorio cumplimiento de los términos.

VII. A excepción de los casos donde se cuenta con pruebas suficientes y serias, no privar al acusado de su libertad en la fase investigativa.

VIII. Instaurar un régimen progresivo del cumplimiento de la pena.

IX. Legislar sobre el sistema penitenciario, haciéndolo compatible con los demás segmentos del sistema penal.

X. Adecuar las cárceles existentes y construir las nuevas, así como el adiestramiento del personal (punto IV), a un modelo que garantice el cumplimiento de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ginebra 1955), concordante con la Declaración de principios básicos para el tratamiento de los reclusos, aprobada por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se refieren a la aplicación de manera imparcial a un trato digno, la no discriminación, libertad religiosa, gozo de los demás derechos humanos, desarrollo de su personalidad, eliminación del aislamiento como castigo, facilidades laborales remuneradas, acceso a los servicios de salud y educación, condiciones favorables para su reincorporación a la sociedad, lugares de esparcimiento, factibilidad de distribución por edades y grados de peligrosidad, entre otros.

XI. Propugnar porque todo procesado tenga una adecuada defensa. Limitar el número de procesos a cargo de los defensores de oficio.

XII. Eliminación de todo privilegio por razones de raza, credo religioso, status económico, etc.

XIII. Adoptar modelos que en otros establecimientos carcelarios hayan dado resultados positivos, para disminuir o eliminar los índices de violencia interna, corrupción, formación de bandas, fugas, introducción de armas, licores y

estupefacientes, entre otras. Para ello establecer intercambio de información y experiencia carcelaria, dentro y fuera del país.

XIV. Democratizar el régimen penitenciario, asegurando, en primer lugar, la vigencia de todos los derechos que la sentencia no haya limitado y, en segundo lugar, habilitando la activa participación de los reclusos en la gestión penitenciaria, con lo que se lograría devolverles su calidad de personas, sujetos de derecho.

XV. Fomentar la participación de la comunidad en las diferentes etapas de rehabilitación del recluso.

XVI. Otorgar a los reclusos y a sus familiares el derecho de amparo, ante medidas discriminatorias o trato inhumano o degradante.

XVII. Establecer, con absoluta claridad, los beneficios que se pueden otorgar a los reclusos, tales como: libertad condicional, salidas transitorias, remisión de la pena por trabajo o estudio, etc., impidiendo que queden al arbitrio de las autoridades carcelarias.

XVIII. Atención a los familiares del recluso, propendiendo a su organización y participación en los programas de reinserción social.

XIX. Crear Organos de control externo (jueces o fiscales de vigilancia y/o ejecución de la pena) y, en lo posible, la figura del Ombudsman Carcelario.

XX. Revalorizar el rol de la víctima, habilitando su participación en el proceso penal e impulsando programas de reparación del daño sufrido.

XXI. Hacer posible, en el caso de los extranjeros, que la pena y los períodos de libertad vigilada se cumplan y desarrollen en su país y, mientras ello no ocurra, velar porque las misiones diplomáticas de su nacionalidad los visiten y les presten atención y ayuda.

XXII. Prohibir la publicidad de los antecedentes penales, evitando la consiguiente estigmatización.

XXIII. Propender a que los Estados establezcan programas destinados a colaborar en la reinserción laboral de los excarcelados.

XXIV. Facilitar a los reclusos el ejercicio del derecho a elegir a las autoridades de su país, aun en los casos de los internos con sentencia en firme.

El Parlamento Latinoamericano, a través de esta comisión, le hará seguimiento a las políticas carcelarias de América Latina, colaborando con las Naciones Unidas en el

ámbito de la región, para que se adopten, de manera vinculante, sus recomendaciones al respecto”.²²³

²²³ *Informe Carcelario de la Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina*. Parlamento Latinoamericano. PP. 27 a 29.

ANEXO IV

Proyecto de ley Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario

“**Artículo 1º.-** Institúyese el Comisionado Parlamentario con el cometido principal de asesorar al Poder Legislativo en su función de control de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución de la República; el Decreto-Ley N° 14.470, de 2 de diciembre de 1975 y análogas y las normas de los Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por la República, a cuyos efectos supervisará la actividad de los organismos estatales encargados de la administración de los establecimientos carcelarios y de la reinserción social del delincuente.

Artículo 2º.- Para el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario tendrá las siguientes atribuciones:

- A) Promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas sometidas a un procedimiento judicial del que se derive su privación de libertad.
- B) Solicitar información a las autoridades carcelarias respecto a las condiciones de vida de los reclusos y, en particular, de las medidas adoptadas que puedan afectar sus derechos.
- C) Formular recomendaciones a las autoridades carcelarias para que se modifiquen o dejen sin efecto medidas adoptadas o se incorporen otras que tiendan al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes.
- D) Recibir denuncias sobre violaciones de los derechos de los reclusos, de acuerdo con el procedimiento que se establece. En tal caso, deberá oír los descargos de la autoridad correspondiente antes de formular las recomendaciones que estime convenientes con la finalidad de corregir los procedimientos y restablecer los derechos lesionados.
- E) Realizar inspecciones de carácter general a los establecimientos carcelarios, debiendo anunciar su visita a la autoridad correspondiente con no menos de veinticuatro horas de anticipación. Cuando se trate de

verificar una denuncia concreta podrá realizar una inspección, a ese solo efecto, sin previo aviso.

F) Preparar y promover los estudios e informes que considere conveniente para el mejor desempeño de sus funciones.

G) Pedir informes a organismos públicos, oficinas, abogados defensores, organizaciones de asistencia y otras análogas, con fines de asesoramiento y promoción. Se excluye de esta atribución todo informe relativo a materia o competencia de carácter jurisdiccional.

H) Rendir anualmente un informe ante la Asamblea General, en el que se analizará la gestión cumplida con expresa mención de las recomendaciones y sugerencias formuladas a las autoridades administrativas. El informe podrá contener, asimismo, recomendaciones de carácter general.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen, podrá brindar un informe extraordinario.

Los informes no incluirán datos personales que permitan la identificación de los interesados en el procedimiento investigador y serán publicados en el Diario Oficial.

I) Interponer los recursos de habeas corpus o amparo cuando considere que existen graves violaciones de derechos.

Artículo 3º.- El Comisionado Parlamentario no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones. Podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los criterios utilizados para producción de actos y resoluciones.

Artículo 4º.- Las recomendaciones formuladas por el Comisionado Parlamentario no tendrán carácter obligatorio, pero la autoridad administrativa deberá, dentro de los treinta días de notificada, dar cuenta por escrito al Comisionado Parlamentario de las razones que la asisten para no seguirlas. Si el Comisionado Parlamentario no se conformare con ellas o no hubiere recibido información aceptable, remitirá los antecedentes al jerarca máximo del órgano en cuestión.

Si dentro de los sesenta días no tuviere explicación adecuada, incluirá el asunto en su informe a la Asamblea General, con mención de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, las recomendaciones formuladas y las razones de la Administración, si las hubiere.

Artículo 5º.- Los servicios administrativos encargados de los establecimientos de reclusión están obligados a auxiliar y colaborar con el Comisionado Parlamentario en sus investigaciones, inspecciones o pedidos de informe.

Artículo 6º.- Si en el cumplimiento de sus funciones, el Comisionado Parlamentario llegare a la conclusión de que se ha cometido un delito, deberá hacerlo saber al jerarca correspondiente a los efectos de que adopte las medidas pertinentes.

Artículo 7º.- Las actuaciones que realice el Comisionado Parlamentario tendrán carácter reservado y confidencial, tanto respecto de los particulares como de los agentes, oficinas y organismos involucrados.

Artículo 8º.- Toda queja dirigida al Comisionado Parlamentario se presentará por escrito fundado, firmada por el interesado o su apoderado, con indicación del nombre y domicilio del peticionante, dentro del plazo de seis meses contado a partir del momento en que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la denuncia. De toda queja se acusará recibo con indicación de la fecha de su presentación.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

Artículo 9º.- Queda prohibido el registro, examen, interceptación o censura de la correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie dirigida al Comisionado Parlamentario, incluyéndose aquella remitida desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas.

Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas, radiales o de cualquier otro tipo, entre el Comisionado Parlamentario y las personas, incluyéndose aquellas detenidas, internadas o sometidas a custodia.

Artículo 10.- El Comisionado Parlamentario deberá llevar un registro de todas las quejas que se le formulen, las que podrá tramitar o rechazar. En este último caso deberá hacerlo en escrito fundado que se notificará al interesado, en el que podrá indicar las vías o procedimientos normales que éste tenga a su disposición.

Serán rechazadas las quejas anónimas, las que denoten mala fe, falta notoria de fundamento o ser éste fútil o trivial, debiendo fundar el rechazo.

Cuando la cuestión planteada sea la misma que se encuentre sometida a decisión Judicial o de lo Contencioso Administrativo, deberá interrumpir su actuación en el caso

concreto, pero no impedirá que la investigación prosiga a los efectos de resolver los problemas generales involucrados en el procedimiento.

Artículo 11.- La presentación de una queja ante el Comisionado Parlamentario es sin perjuicio de los derechos que pueda tener el interesado para recurrir por la vía administrativa o judicial, de acuerdo con el régimen de recursos o acciones previsto por la ley.

Artículo 12.- Admitida la queja se procederá a realizar una investigación informal, sumaria y reservada, destinada a esclarecer los hechos.

En todos los casos se dará cuenta al organismo o dependencia administrativa involucrada, por intermedio de su autoridad máxima, solicitándole un informe por escrito en un plazo de quince días. Este plazo puede ser prorrogado si así se solicitare en escrito fundado y se considerare necesario.

Artículo 13.- La negativa de los funcionarios o sus superiores a remitir los informes que se les soliciten o la falta de colaboración en la asistencia o auxilios solicitados en forma, podrán ser consideradas actitudes entorpecedoras en el normal funcionamiento de los cometidos del Comisionado Parlamentario. En este caso podrá levantarse la reserva de los procedimientos y hacerse público de inmediato, sin perjuicio de su inclusión en el informe dirigido a la Asamblea General.

Artículo 14.- El funcionario que obstaculizare la investigación mediante la negativa o negligencia de contestar los informes o no facilitara el acceso a expedientes o documentación administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el delito previsto en el artículo 164 del Código Penal.

Artículo 15.- El Comisionado Parlamentario será designado por la Asamblea General, en reunión conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose el voto conforme de los tres quintos de sus componentes.

Artículo 16.- La duración del mandato del Comisionado Parlamentario será de cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez.

Artículo 17.- Podrá ser elegido Comisionado Parlamentario toda persona que reúna las siguientes cualidades:

A) Ser ciudadano uruguayo, natural o legal. En este último caso deberá tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

B) Ser doctor en Derecho y Ciencias Sociales con diez años de antigüedad como mínimo en el ejercicio profesional.

C) Tener cuarenta años de edad como mínimo.

D) Tener acreditada reconocida versación en Derechos Humanos.

Artículo 18.- El Comisionado Parlamentario será designado mediante resolución suscrita por el Presidente de la Asamblea General y de su Secretario y se publicará en el Diario Oficial.

El Comisionado Parlamentario tomará posesión de su cargo ante los Presidentes de ambas Cámaras prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.

Artículo 19.- El Comisionado Parlamentario no estará sujeto a mandato imperativo, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía y de acuerdo a su criterio.

Artículo 20.- La actividad del Comisionado Parlamentario no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República o por la expiración de su mandato. En tales casos, la relación del Comisionado Parlamentario con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente.

Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17 del artículo 168 de la misma).

Artículo 21.- El cargo de Comisionado Parlamentario es incompatible con toda función dependiente del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, salvo el ejercicio de la docencia en la enseñanza superior en materia jurídica.

También es incompatible con el ejercicio de la actividad profesional en materia penal.

Artículo 22.- La Asamblea General podrá designar los asesores y el personal necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo que oportunamente reglamente la Asamblea General y dentro de sus límites presupuestarios.

Artículo 23.- Todo el personal dependiente del Comisionado Parlamentario se considerará asimilado, en cuanto a sus prerrogativas e incompatibilidades, con el personal del Poder Legislativo.

Artículo 24.- Los asesores cesarán automáticamente en el momento en que asuma el nuevo Comisionado Parlamentario designado por la Asamblea General.

Artículo 25.- La dotación del Comisionado Parlamentario será fijada por la Asamblea General, la que, asimismo, aprobará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la institución, que constituirá una partida dentro del Presupuesto del Poder Legislativo.

Montevideo, 13 de marzo de 1995.

ANEXO V

Proyecto de ley de creación del Instituto Nacional de Rehabilitación

El presente proyecto de ley se encuentra a estudio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

“PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Instituto Nacional de Rehabilitación como servicio descentralizado, con domicilio legal en Montevideo.

El mismo sucederá a todos los efectos a la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación del Ministerio del Interior y tendrá bajo su dependencia a todos los establecimientos carcelarios de la República y al Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados.

Artículo 2º.- El Instituto Nacional de Rehabilitación se relacionará con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, sin perjuicio de las vinculaciones especiales que, por razón de la materia, pueda mantener directamente con otros Ministerios.

CAPITULO I

COMETIDOS

Artículo 3º.- El Instituto Nacional de Rehabilitación tendrá los siguientes cometidos:

- A) Dar cumplimiento a las normas constitucionales, pactos internacionales suscritos por la República y disposiciones legales y reglamentarias que refieren al régimen penitenciario y acuerdan derechos a las personas internadas en los Centros de Rehabilitación; las que quedarán bajo su exclusiva responsabilidad, sin perjuicio de sus potestades en el orden disciplinario.
- B) Impulsar la rehabilitación integral de reclusos y liberados, desarrollando toda actividad orientada a propiciar su adecuada y efectiva reinserción en la familia y la sociedad, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución de la República.
- C) Ejecutar las medidas de seguridad que disponga la justicia competente respecto de los encausados y penados asignadas a su cargo.

- D) Brindar al Poder Judicial la máxima colaboración para el adecuado cumplimiento de los cometidos asignados a éste relativos a los reclusos y sistema carcelario.
- E) Apoyar la acción de instituciones privadas sin fines de lucro y con personalidad jurídica que persigan objetivos vinculados a la reinserción social de los internos.
- F) Propiciar el mejoramiento del sistema carcelario, así como de la normativa relativa al mismo, elevando al Poder Ejecutivo, anteproyectos de iniciativas que en el orden legal considere pertinentes.
- G) Elevar al Poder Ejecutivo memoria y balance anual de su gestión.

CAPITULO II

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Artículo 4°.- El Instituto será administrado por un Directorio rentado integrado por un Presidente y dos Directores que deberán tener treinta y cinco años cumplidos de edad y ser personas de reconocida versación en materia de centros de rehabilitación carcelaria.

Artículo 5°.- El Directorio será designado por el Poder Ejecutivo, previa venia de la Cámara de Senadores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República.

Será renovado cada cinco años, correspondiendo la iniciación y el término de dicho lapso con los del Período constitucional de Gobierno. Sin perjuicio de ello, sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión sus sustitutos.

Artículo 6°.- Para el cumplimiento de los cometidos del Instituto, el Directorio tendrá las siguientes facultades:

- A) Determinar la organización técnica y administrativa del Instituto creado por esta ley y sus dependencias.
- B) Ejercer la dirección y administración del servicio, dictando para ello las reglamentaciones y resoluciones pertinentes.
- C) Coordinar con el Ministerio del Interior el servicio policial de control perimetral de los locales a su cargo, en tanto no posea el propio personal de seguridad adecuado a tal finalidad.
- D) Requerir al Ministerio del Interior personal de su dependencia para ingresar a los establecimientos a su cargo, en casos cuya gravedad lo justifique y con noticia de la justicia competente.

- E) Elevar al conocimiento inmediato de la autoridad judicial competente, los hechos acaecidos en sus dependencias que presuntamente afecten los derechos de los internos o configuren cualquier otro ilícito de orden penal, sin perjuicio de adoptar las medidas que en el orden administrativo corresponda aplicar.
- F) Efectuar designaciones y destituciones de los funcionarios de sus dependencias.
- G) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todo el personal del Instituto.
- H) Proyectar el reglamento general del servicio, el que será aprobado por el Poder Ejecutivo.
- I) Celebrar convenios con entidades públicas o privadas, nacionales, departamentales o locales. Podrá igualmente concertar préstamos o convenios con organismos internacionales, instituciones o Gobiernos extranjeros, sin perjuicio de las limitaciones contenidas en el inciso final del artículo 185 de la Constitución de la República.
- J) Proyectar su presupuesto, el que será presentado al Poder Ejecutivo a los efectos dispuestos en el artículo 220 de la Constitución de la República.
- K) Ser ordenador primario de gastos e inversiones dentro de los límites de las asignaciones presupuestales correspondientes.
- L) Administrar sus bienes y recursos.
- M) Gravar y enajenar los bienes inmuebles y muebles del Instituto, requiriéndose para ello la unanimidad de votos de sus integrantes.
- N) Aceptar herencias, legados y donaciones instituidos en su beneficio.
- Ñ) Delegar, por resolución fundada, las facultades mencionadas en los literales B), C), D) y G), en otros órganos del Instituto.

Artículo 7º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal final del artículo anterior, corresponde al Presidente del Directorio:

- A) Presidir las sesiones del Directorio y representar al Instituto Nacional de Rehabilitación.
- B) Ejecutar las resoluciones del Directorio.
- C) Tomar medidas urgentes cuando fueren necesarias, especialmente en los casos de los literales C) y D) del artículo anterior, dando cuenta al Directorio en la primera sesión, estándose a lo que éste resuelva.
- D) Firmar, conjuntamente con otro miembro del Directorio, o con el funcionario que este Cuerpo designe, todos los actos y contratos en que intervenga el Instituto.

DEPENDENCIAS NECESARIAS

Artículo 8º.- El Instituto estará dotado necesariamente de las dependencias que se indican seguidamente, las que tendrán jerarcas unipersonales e independencia técnica,

sin perjuicio de otras, cuyo funcionamiento podrá disponer el Directorio y de las regulaciones que establezcan leyes y reglamentos a dictarse sobre el régimen penitenciario:

- A) Dirección de Establecimientos de Rehabilitación.
- B) Dirección de Clasificación, Diagnóstico, Tratamiento de Internos y Escuela de Capacitación Penitenciaria.
- C) Dirección de Criminología.
- D) Dirección del Patronato de Encarcelados y Liberados, que tendrá los cometidos y demás regulaciones previstas por las Leyes N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964 y N° 15.743, de 14 de mayo de 1985 y el Decreto 417/85, de 6 de agosto de 1985, en lo que resulten compatibles con la ubicación que por esta ley se le asigna.

CAPITULO III

COMISION HONORARIA ASESORA

Artículo 9°.- Habrá una Comisión Honoraria de cinco miembros con el cometido de asesorar al Directorio del Instituto, en todo lo relativo al mejoramiento del sistema carcelario. Esta Comisión será designada por el Poder Ejecutivo y tendrá la siguiente integración: un miembro propuesto por la Suprema Corte de Justicia; uno propuesto por el Ministerio del Interior; uno propuesto por el Ministerio de Educación y Cultura; uno propuesto por la Universidad de la República y uno propuesto por Organizaciones No Gubernamentales de Protección de los Derechos Humanos.

El cometido de esta Comisión estará especialmente dirigido al asesoramiento sobre:

- A) Promoción de la actualización de la legislación penitenciaria.
- B) Puesta en práctica y reglamentación de la actividad laboral de los reclusos, el aprendizaje y su adecuación a la legislación laboral y de seguridad social.
- C) Puesta en práctica y reglamentación del Hospital Penitenciario o Comisiones de Sanidad Penitenciaria según se entienda conveniente.
- D) Puesta en práctica y reglamentación de cursos técnico-educativos de interés para los reclusos.
- E) Otras sugerencias que se estimaren útiles.

CAPITULO IV

PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

Artículo 10.- El patrimonio del Instituto Nacional de Rehabilitación estará constituido por todos los bienes que a la fecha de vigencia de la presente ley, estuvieren asignados a la prestación de los servicios que se transfieren a su órbita, así como los que en el futuro adquiera o reciba a cualquier título.

Artículo 11.- Los créditos presupuestales asignados a la unidad ejecutora que se suprime, así como los destinados al funcionamiento de los establecimientos carcelarios del Interior de la República pasarán al servicio descentralizado que se crea por esta ley.

Artículo 12.- El Instituto Nacional de Rehabilitación dispondrá para su funcionamiento, de los siguientes recursos:

- A) Las partidas que se le asignen por las normas de carácter presupuestal.
- B) Los frutos naturales y civiles de sus bienes.
- C) Las donaciones, herencias y legados que reciba. El Directorio aplicará los bienes recibidos en la forma indicada por el testador o donante y de conformidad a los fines del servicio a su cargo.

CAPITULO V

PERSONAL

Artículo 13.- Sin perjuicio de las condiciones exigidas por la legislación vigente para el ingreso a la función pública en los cargos técnicos o especializados, deberá calificarse preferencialmente la especialización que corresponda al cargo a proveer.

Además, los postulantes a cargos en los cuales se deba trabajar en contacto directo con internos, deberán acreditar previamente a su ingreso, su aptitud psíquica para el desempeño de los mismos, la cual será determinada por un tribunal especializado que designará el Directorio.

Artículo 14.- El Directorio, por unanimidad de sus integrantes, podrá celebrar contratos a término para el arrendamiento de un servicio u obra determinada, cuando el servicio así lo requiera. Quienes en tal virtud, presten servicios o realicen obras, no revestirán la calidad de funcionarios públicos.

Artículo 15.- Los ascensos a niveles de jefatura o de Dirección, requerirán previamente la aprobación de una prueba de suficiencia, sin perjuicio de los demás requisitos establecidos en la legislación vigente.

Artículo 16.- Las promociones o ascensos se realizarán según lo determine la reglamentación que al efecto dicte el Directorio y de acuerdo con el procedimiento de antigüedad, mérito y capacitación.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 17.- Hasta tanto se apruebe la norma presupuestal correspondiente que fijará la remuneración de los Directores, el Instituto será administrado por un Director Interino, que será designado por el Poder Ejecutivo apenas entre en vigencia la presente ley y que deberá reunir las condiciones estipuladas en el artículo 4º. El mismo tendrá la retribución del actual Director Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación.

Artículo 18.- Los funcionarios públicos presupuestados o contratados que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren desempeñando tareas en dependencias de la Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarias y Centros de Recuperación, de establecimientos carcelarios emplazados en departamentos del Interior de la República o del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, podrán pasar a desempeñar funciones en el Instituto.

Dichos funcionarios permanecerán en el Instituto en consideración a los requerimientos del servicio hasta que el Directorio proceda a seleccionar a quienes definitivamente permanecerán en los cuadros funcionales del Instituto.

El Directorio del Instituto comunicará al Poder Ejecutivo, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y al personal que corresponda, en plazo no mayor a los sesenta días de su investidura, la nómina de funcionarios que desempeñen actualmente tareas en las dependencias mencionadas en el inciso anterior y no resulten seleccionados para permanecer en el Instituto, a los efectos de su redistribución.

Los funcionarios que permanezcan en el Instituto, mantendrán su situación estatutaria, remuneración y prerrogativas actuales.

Montevideo, 8 de mayo de 1997”.

ANEXO VI

Entrevista al señor Diputado Díaz Maynard.

Quisiera preguntarte si en tu opinión las cárceles uruguayas logran rehabilitar y si te parece compartible el paradigma de la rehabilitación.

En cuanto a que las cárceles no logran rehabilitar nadie puede estar en contra; es un hecho elemental. Ahora, el tema es si la institución cárcel rehabilita.

Yo creo que ni aun las cárceles cinco estrellas, escandinavas u holandesas, cumplen la función de rehabilitación. Es absolutamente imposible lograr gente que pueda convivir en el respeto y en la autonomía fuera de la cárcel, cuando lo que se le ha hecho es, precisamente, quitarle la libertad. A esto se refiere esa famosa frase que utiliza mucho Gonzalo Fernández, que dice que educar a un individuo para la libertad en una cárcel, es más difícil que enseñarle a alguien a jugar al fútbol dentro de un ascensor.

Yo creo que no hay posibilidad alguna de rehabilitación en la cárcel. Allí yo estoy con Zaffaroni, quien dice que cuando pretendemos mejorar el sistema penal o el subsistema carcelario no es para legitimarlo. Es como el derecho humanitario a la guerra; así como este pretende evitar la mayor violencia de la guerra, el derecho penal intenta hacer lo mismo, pero eso no significa legitimar la guerra ni el derecho penal, sino hacerlo más compatible con una concepción humanitaria o de respeto de los DDHH.

Creo que no hay rehabilitación posible en las cárceles. Yo, sin ninguna duda, soy abolicionista de la cárcel, aunque creo que no hemos inventado un sistema sustitutivo para un puñado de individuos cuya presencia con libertad locomotiva puede ser altamente dañina para la sociedad, y a los que es necesario segregar.

Yo no creo ni en la prevención general que está demostrado que no sirve para nada -porque se aplica la pena de muerte y aumenta el delito-, ni en la prevención especial sin perjuicio de que algunos autores, que cito en el informe carcelario del Parlamento Latinoamericano, hablan de que la reincidencia es mejor en la medida en que se hacen mejor las cárceles. Y es posible que de alguna manera la rehabilitación se logre, sobre todo en algunos primarios jóvenes, pero eso depende mucho del mundo que los espera fuera. Porque qué alternativas tiene hoy un recluso que sale de la cárcel, más que volver a robar. En un país que tiene un 15% de desocupación, quién va a dar trabajo a un exrecluso procesado por rapiña. Es difícil.

Hace pocos días un ladroncito me decía “Yo con un televisor por mes gano más que con las ocho horas” y es razonable que piense así. Con salarios tan deprimidos como los que existen, sin ninguna preparación, sin que se le haya enseñado nada, con un índice de analfabetismo mayor en la cárcel que fuera de ella, qué pueden salir a hacer; por eso vuelven a delinquir necesariamente. Y por eso es que Zaffaroni sostiene que la reincidencia debería ser un atenuante, lo que es bastante razonable, ya que el sujeto vuelve a delinquir casi por culpa de la cárcel.

De manera que no creo en la rehabilitación como norma general; puede ser una excepción.

Ahora, cuál es la sustitución de la cárcel, no lo sé. Lo que quiero es que sea realmente la “ultima ratio”, es decir que se utilice realmente para los casos más graves.

Si los objetivos de las políticas “re” no son válidos, cuáles deberían ser los objetivos que la cárcel podría lograr.

Eso depende del nivel de los presos, pero se podrían hacer convenios como los que tiene la Universidad de Buenos Aires, que permite que los reclusos estudien y hasta se reciban dentro de la cárcel. Además, se les puede capacitar para trabajar en algo útil y no en tareas que ya no tienen posibilidades en el mercado, como la carpintería y la tornería, que ya no se utilizan. Si se les trata como gente y se les da posibilidades de capacitación, existen mayores posibilidades de que salgan individuos que puedan reinsertarse en la sociedad.

De manera que considero que educación y trabajo son dos elementos esenciales pero, por encima de todo, como lo dice el Consejo de Europa, lo principal es respetar la dignidad del recluso, lo que en nuestras cárceles no se hace.

Además de la instrumentación de medidas alternativas, la aplicación de figuras como la del Procurador Carcelario y experiencias como la del Musto, cuáles te parece que pueden ser los caminos para reorganizar el sistema carcelario actual, teniendo en cuenta que actualmente debemos convivir con la cárcel.

Para mí un tema esencial es sacarlas de la órbita de la policía.

En segundo lugar, se debe preparar criminólogos, como se hace en España y, paradójicamente en Perú, donde existen dos regímenes, uno para Sendero Luminoso

-realmente dramático-, y otro para los presos comunes, en el que tiene de las mejores cárceles que es mundo, con un personal de guardacárceles con formación terciaria. Allí se ha instrumentado un sistema en el que cada treinta presos hay un guardacárcel que es su punto de referencia, lo que permite que exista una relación personal que es muy importante, y no se dé ese anonimato que hace que los reclusos sean un número y no tengan referencia con nadie más que con quien los verduguea o no.

Un tercer aspecto que me parece fundamental, es la cogestión efectiva de los reclusos en los establecimientos penitenciarios. Esto también lo vi funcionar en una cárcel peruana excepcionalmente, en la que cada pabellón elegía por voto secreto los integrantes de las distintas Comisiones, como por ejemplo higiene, alimentación esparcimiento, etcétera. Los secretarios de las Comisiones se reunían y eran los interlocutores frente al personal penitenciario. Esto hace que los individuos hagan algo con su autonomía, puedan inventar algo y realizarse como personas y no sigan siendo, como ahora, meros objetos a los que se les estipula la hora de levantarse, ir al baño, desayunar, etcétera, estando en un ambiente en el que todo está establecido y la voluntad no tiene absolutamente ningún papel.

Yo tomaría esas tres medidas y tengo una enorme fe en la cogestión, separando a los reclusos en pequeños grupos, con un referente directo. Esto debería ir acompañado de pequeñas cárceles o de la división de las grandes cárceles en pabellones o pequeños grupos

Insistí en este último aspecto frente al señor Ministro del Interior, y él me dijo que esa experiencia se estaba implementando. Entonces solicité comprobar cómo estaba funcionando esa experiencia. De manera que asistí a la cárcel –al COMCAR- y pregunté si los delegados de los reclusos eran elegidos por voto secreto, pero el Director Nacional de Cárceles me dijo que no; que eran elegidos por las autoridades. Solicité hablar con determinados presos quienes me dijeron que esa experiencia era totalmente inútil y que lo único que implicaba era que a los delegados les cerraban la puerta de la celda media hora más tarde. Es decir que eso es una pantomima de lo que puede ser la cogestión, que no respeta la filosofía implícita en ese modelo.

Yo en esa posibilidad tengo una enorme confianza porque, de alguna manera, implica devolver la dignidad a los reclusos, que es la característica fundamental del ser humano, la que se pierde totalmente en el sistema carcelario. Si le han quitado la dignidad, que vuelva a ser un buen ciudadano es prácticamente imposible. Lo único que se pretende es que sea un buen preso, pero los buenos presos son los que solamente se

someten. Entonces es en los revoltosos, en los malos presos, en los que uno puede depositar alguna esperanza en el sentido de que salgan con alguna iniciativa y alguna capacidad de realizar una experiencia de vida positiva.

ANEXO VII

Entrevista a la Asistente Social Teresita Reyes

Quisiera preguntarte cuál es el paradigma de rehabilitación desde el cual trabaja el INACRI y si lo considerarás compartible.

Personalmente comenzaría por cuestionarme qué es lo que entendemos por rehabilitación, porque creo que ahí es donde se enreda la madeja.

Si pretendemos rehabilitar estamos dando por sentado que en algún momento hubo habilitación, o si manejamos el concepto resocialización es porque partimos de la base de que hubo una socialización previa.

Hablamos, por supuesto de los delitos que hacen a lo económico, principalmente, es decir las rapiñas, hurtos, etcétera, sin considerar todos aquellos delitos que involucran una patología o una situación diferente a lo que es más frecuente.

Si se considera el tema de la rehabilitación y se observa la mayoría de la población carcelaria actual, hay que pensar en qué momento estuvo habilitada. Porque, en su mayoría, se trata de una población que transcurre su infancia y su adolescencia -cuando no institucionalizada- en un contexto crítico, absolutamente desfavorable, que propicia desde el nacimiento –o muchas veces desde antes- determinado marco de sobrevivencia que hace pensar hasta dónde es válido hablar de rehabilitación. Porque, qué habilitación existe en ese momento para desarrollar comportamientos socialmente aceptados. Entonces, ese adulto o joven entra a la cárcel para ser “rehabilitado”, entre comillas, es decir para ser devuelto al mismo medio que, de alguna manera, lo envió a la cárcel.

Entonces, más allá de la crítica y el cuestionamiento que podemos hacer al sistema carcelario –que comparto plenamente-, aun en el hipotético caso de que se implementara realmente una rehabilitación, con todo lo que eso implica, o una habilitación, devolvemos a ese sujeto a un entorno que va a volver a propiciar los mismos comportamientos.

Creo que eso es lo primero que nos cuestionamos, porque hablamos de rehabilitar pero, en realidad, en la mayoría de los casos, no hubo una habilitación previa.

Por otra parte, es cierto que las políticas carcelarias no conducen a rehabilitación alguna, más allá de todos los planeamientos teóricos y de las cosas que, de vez en cuando, alguien se sienta a conversar con el interés de hacer algo concreto. Porque

luego uno se choca, en la práctica, con un millón de situaciones en una institución muy rígida, en la que se trabaja muy estrechamente con un funcionariado que, en el noventa por ciento, no está preparado para el rol que tiene que cumplir. Es decir que a lo anterior se agregan estos problemas concretos.

Entonces uno se encuentra que, en última instancia, lo que termina haciendo como asistente social, es una tarea paliativa o puntual, enmarcada dentro de la nada y respondiendo a demandas puntuales.

Cuál es el rol que el INACRI determina para los asistentes sociales.

Los asistentes sociales del INACRI trabajamos en dos áreas. Por un lado está la parte de los dictámenes, en la que se atienden los pedidos de los jueces y los Juzgados en cuanto a libertades anticipadas. Porque la ley marca que debe hacerse una solicitud de libertad anticipada que debe ir acompañada de un informe técnico, y allí es donde entramos las asistentes sociales, en el mismo nivel en el que entran psiquiatras y psicólogos. Es decir que simplemente llega un expediente y se hace “la” entrevista -digo la entrevista, porque es una sola- y entre la entrevista y el expediente uno se toma casi el atrevimiento de sugerir o no que ese beneficio sea otorgado. Eso es lo que se hace aquí dentro de esta área. Nosotros tenemos contacto con esa persona solo una vez y luego tampoco sabemos lo que pasa; no existe posibilidad alguna de seguimiento ni de nada. Simplemente se da respuesta a algo muy puntual. En el mejor de los casos los psiquiatras, por ejemplo, pueden incidir recomendando medicación o internación o nosotros, desde el área social, podemos plantear o recomendar un traslado a una cárcel del interior, o que se inicie un régimen de salidas transitorias, en el caso de que no lo tenga.

Por otro lado está el trabajo que se realiza directamente en las cárceles y allí funciona el Centro de Observación, Diagnóstico y Tratamiento –CODIT-, que trabaja directamente en el COMCAR, en la Cárcel de Mujeres, en los Centros de Recuperación y en el Penal de Libertad. Y allí es donde más se nota lo que mencionaba en cuanto a que el rol del asistente social queda sujeto a responder demandas puntuales, porque no existe un marco que permita apuntar a realizar algo más sistematizado.

¿Cuando el recluso ingresa se le realiza una entrevista?

Sí; en COMCAR, por ejemplo, existe un sistema de progresividad y allí entra en juego el papel de diagnóstico del CODIT.

Se supone cuando un recluso ingresa a COMCAR debe ser visto y evaluado por un equipo de recepción o de diagnóstico integrado por un psiquiatra o un psicólogo y un asistente social y también muchas veces un procurador. Y de acuerdo con esa entrevista, no muy profunda, se lo incluye en una de las etapas del sistema progresivo penitenciario, cada una de ellas con determinado régimen más o menos permisivo y con más o menos beneficios.

Teóricamente debería ser así, pero cuando el CODIT comenzó a funcionar -hace aproximadamente diez años- ya había 2000 reclusos en COMCAR y 1000 en Libertad, con una población muy fluctuante que, indudablemente, va en aumento. Entonces, esa aspiración se vio limitada por la sobrecarga brutal de gente que va ingresando.

Por otra parte, en el mejor de los casos, si se realiza esa primera entrevista, la persona es derivada a determinada etapa que se supone que en COMCAR debería corresponder a determinado módulo. Pero en la práctica no es así, porque la superpoblación carcelaria determina que las etapas no puedan respetarse en lo que tiene que ver con la ubicación. Entonces sucede que el diagnóstico técnico choca con la decisión de las autoridades que en definitiva son quienes ubican al recluso.

¿Las autoridades carcelarias respetan el trabajo de las asistentes sociales?

Generalmente se generan conflictos; en algunos establecimientos más que en otros y muchas veces depende de la Dirección del momento. Hay Direcciones con las cuales el INACRI ha funcionado mejor que con otras y lo mismo sucede con los establecimientos.

Cuáles te parecen que serían los caminos para que el trabajo social pudiera desarrollarse de mejor forma.

Lo que sucede es que uno se encuentra con una población reclusa con características muy particulares. En general se trata de gente joven, cada vez más joven, y el trabajo que se puede hacer es realmente mínimo.

Ha habido experiencias de trabajo de asistentes sociales –siempre en equipo multidisciplinario- con gente en situación de preegreso, es decir que está a punto de cumplir su sentencia, con quienes se comienza a trabajar para preparar su incorporación a la sociedad y allí se ha trabajado en terapias grupales, con la familia, etcétera. Pero lo que uno observa es que a pesar de todo lo que se haya podido hacer, cuando recobran su libertad la sociedad está muy poco preparada para recibir nuevamente a esa persona. Por un lado está el tema laboral, pues a pesar de que se han hecho coordinaciones con la Intendencia, el Patronato, etcétera, la realidad es que no hay trabajo, y menos lo hay para quien carga con antecedentes penales. Luego, está lo que mencionaba en el sentido de que la persona vuelve a una sociedad muy competitiva y agresiva y al mismo medio en el que se encontraba, es decir a un medio carenciado y crítico en el que se potencia la sobrevivencia. Cuando uno habla con los reclusos muchos nos dicen –y muchos de ellos porque realmente lo piensan así-, “Yo acá no vuelvo nunca más. Esta es la última vez”. Pero llegado el momento, ¿con qué se encuentra? Además hay que tener en cuenta que ese individuo tiene toda una historia de vida que propició esos comportamientos que, a la vez, dentro de la cárcel todavía se potencian y propician más, porque indudablemente es un medio muy duro en el que se privilegia la posibilidad de cada uno de “pisar” al otro, por decirlo de alguna manera.

Entonces uno se pregunta qué es lo que uno hace ahí dentro. Y sinceramente creo que lo que se puede hacer desde el Servicio Social o desde el área psiquiátrica o psicológica, es realmente mínimo. Creo que todo esto está enmarcado dentro de algo mucho más amplio, que es la sociedad que primero mandó, de alguna manera, a ese individuo a la cárcel, porque en realidad no hubo una habilitación previa. ¿Qué se va a rehabilitar cuando en realidad no hubo habilitación o qué se va a resocializar cuando no hubo socialización? Es muy difícil revertir todo eso.

Además, evidentemente, no se hace todo lo que se debería hacer para, por lo menos, ofrecer cierto grado de contención a determinados comportamientos. Indudablemente que la cárcel no actúa de esa manera

Entonces uno ve que el rol del asistente social muchas veces queda limitado a la atención de demandas puntuales, principalmente del entorno familiar, etcétera, y allí es donde se puede tener una mínima injerencia. Pero la mayoría de las veces uno sirve de escucha, porque en muchos casos uno entrevista a un recluso que hace un mes que no habla con nadie porque no tiene visitas, está aislado, o por otras razones. Sin embargo, muchas veces la entrevista en sí misma resulta medianamente terapéutica y la persona

termina diciendo “llámeme otra vez” y en ciertos casos genera demandas puntuales para que se lo deba volver a llamar, ya que además se trata de una población que se vuelve muy demandante por la situación que vive. Entonces uno se encuentra que muchas veces termina atendiendo demandas puntuales, sin el marco de un proyecto ni nada porque, además, los intereses no pasan por allí.

Desde el Trabajo Social existe alguna posibilidad de aportar su reflexión en el diseño de un proyecto de trabajo.

Aquí hasta hace unos aproximadamente cuatro años se realizaban -cada dos años-, jornadas de criminología, y allí siempre se generaban espacios para reflexionar y hacer trabajos y surgieron una cantidad de proyectos puntuales que quedaron en simples proyectos que no lograron instrumentarse en la práctica. Lo cotidiano, las urgencias, los expedientes, las salidas transitorias, etcétera, de alguna manera tapan todo lo que se pretenda hacer de otra manera. Además hay un desgaste de la gente, porque las dificultades con las que uno se encuentra son múltiples.

Bibliografía

- Accattatis, Vicente. "El sistema carcelario italiano". En: *Los crímenes de la paz. Investigación sobre los intelectuales y los técnicos como servidores de la opresión*. Siglo XXI Editores. Tercera edición. 1987. PP. 185 a 230.
- Aller Maisonnave, German A. "Comunidad social y cárcel". En *Criminología y Derecho III. Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y Criminología*. Fondo de Cultura Universitario. Montevideo, 1992. PP. 30 a 39.
- Baratta, Alessandro *Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal*. Editorial Siglo XXI Editores. Segunda edición. México, 1989.
- Baratta, Alessandro. "Resocialización o control social: por un concepto crítico de 'reintegración social' del condenado". En: *Sistema Penal para o Terceiro Milênio. Atas do Colóquio Marc Ancel*. Editora Reven. Río de Janeiro, 1991. PP. 251 a 265.
- Baratta, Alessandro. "Derechos humanos: entre violencia estructural y violencia penal". En *Revista Nuevo Foro Penal*, Nº 46. PP. 443 a 457. Colombia, diciembre de 1989.
- Barbieris, Frontera, Zaffaroni, Domínguez, Neuman, Moffatt. *Los Derechos Humanos en el 'otro país'*. Puntosur Editores. Buenos Aires, 1987.
- Buteler, Antonio. "Sobre la pena de prisión". En *Criminología y Derecho III. Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y Criminología*. Fondo de Cultura Universitario. Montevideo, 1992. PP. 11 a 14.
- Diario *El Observador*. *Suplemento de Análisis y actualidad*. 16 de marzo de 2002.
- Diario *El Observador*. 3 de marzo de 2002, 8 de marzo de 2002, 29 de junio de 2002.
- Diario *Clarín Digital*. 30 de abril de 2000. <http://www.clarin.com/diario>.
- Díaz Serra, Juan Carlos. *Informe final de la Consultoría encargada del diseño de un plan educativo para el Centro Nacional de Rehabilitación*. Montevideo, 2000.
- Domínguez Vial, Andrés. *Policía y Derechos Humanos*. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Santiago de Chile, 1996.
- Elbert, Carlos. "Historia y Crisis de la Pena de Prisión". Conferencia dictada en Colombia, setiembre de 1982. s/d.
- Eroles, Carlos. *Los Derechos Humanos. Compromiso ético del Trabajo Social*. Espacio Editorial. Buenos Aires, 1997.
- Fernández, Gonzalo. "Crisis de la prisión y medidas alternativas". En. *La Justicia Uruguaya*. Tomo CXI. PP. 137 a 145.
- Fernández, Gonzalo. "La función de la cárcel en el Uruguay de hoy". En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. PP. 23 a 28.
- Fernández, Gonzalo. *Derecho Penal y Derechos Humanos*. IELSUR. Ediciones Trilce. Montevideo, 1988.
- Fernández, Mariela. Trabajo monográfico: *La evolución histórica de la respuesta social ante el delito*. Montevideo, 1991.
- Foucault, Michel. *Vigilar y castigar*. Siglo XXI Editores. Décimasexta edición. México, 1995.
- Guiddens, Anthony. *Sociología*. Alianza Universidad. Madrid, 1992.
- Giró, Darío. *Una joya por cada rata. Memorias de un asaltante de bancos*. Edición de Carlos María Domínguez. Editorial Cal y Canto. Montevideo, 2001.
- Goffman, Erving. *Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales*. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1984.

- Informe 2000. Derechos Humanos en el Uruguay.* SERPAJ. Montevideo, 2000.
- Informe Carcelario del Parlamento Latinoamericano. Comisión Especial de Políticas Carcelarias para América Latina.* 2000.
- Informe de la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Carcelario.* Montevideo, junio de 1996.
- Informe de la Dirección Nacional de Cárcels, Penitenciarías y Centros de Recuperación.* 3 de abril de 2002.
- Informe de SERPAJ.* Centro de Documentación en Derechos Humanos. Recopilación y edición periodística Lic. Jimena Brusa.
- Informe sobre Derechos Humanos de la Comisión de la Cámara de Representantes para el Parlatino.* 2001.
- Informe sobre población reclusa.* Ministerio del Interior. 2002.
- Instituto Interamericano de Derechos Humanos. *Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina (Primer Informe).* Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1984.
- Irureta Goyena, José. “Exposición y crítica de nuestro régimen penitenciario”. En: *La Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración.* Año 15. Nos. 12 a 17. Montevideo, 1909.
- Kropotkine, P. *Las prisiones.* F. Sempere y C. Editores, Valencia. 1890.
- Langón Cuñarro, Miguel. “Aspectos criminológicos de la pena de prisión y sus alternativas”. En: *Criminología y Derecho III. Primer Congreso Nacional Universitario de Derecho Penal y Criminología. Fondo de Cultura Universitario.* Montevideo, 1992. PP. 7 a 10.
- Langón Cuñarro, Miguel. *Criminología. Historia y Doctrinas.* Ediciones Jurídicas Amalio M. Fernández. Montevideo, 1981.
- Lippert, Elizabeth. “Consecuencias psicológicas del encierro”. En *Seminario sobre Cárcels en el Uruguay. Cárcels: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. PP. 65 a 68.
- Marsiglia, Javier. *Informe final de la Consultoría sobre relacionamiento Centro Nacional de Rehabilitación-Comunidad.* Montevideo, 2000.
- Ministerio del Interior. Departamento de Información y Prensa. Datos al 5 de mayo de 2002.
- Ministerio del Interior. *Informe sobre población reclusa.* 2002.
- Mir Puig, Santiago. “¿Qué queda en pie de la resocialización?” *Revista Eguzkilore,* cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, Nº2 Extraordinario. Octubre de 1989. PP. 35 a 41.
- Naciones Unidas. *Víctimas de delitos. Documento del Séptimo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.* Milán (Italia), 26 de agosto-6 de setiembre 1985.
- Neuman, Elías. “Cárcel y sumisión”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos.* Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. PP. 143 a 161.
- Neuman, Elías. “Encierro carcelario”. En *Los Derechos Humanos en el otro país.* Puntosur editores. Buenos Aires, 1987. PP. 187 a 216.
- Neuman, Elías. “Victimización carcelaria”. En: *Seminario sobre Cárcels en el Uruguay. Cárcels: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. PP. 29 a 38.
- Niño, Luis. “Aspectos críticos de la realidad carcelaria: visitas, requisas y régimen disciplinario”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos.* Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. PP. 103 a 119.
- O'Neill de Gutiérrez, Margarita. “El trabajo como factor de rehabilitación social en el tratamiento penitenciario”. En *Anales de las Primeras Jornadas Uruguayas de*

- Criminología*. Tomo II. Instituto Nacional de Criminología. Dirección Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Reclusión. Montevideo, 1989. PP. 161 a 166.
- Ottoneilli, Francisco José. “El sistema penitenciario uruguayo” En *Entre Políticas Sociales y Políticas Criminales*. IELSUR. Montevideo, 1997. PP. 243 a 253.
- Parlamento Latinoamericano. *Proyecto de una Declaración Interamericana sobre los Derechos y la Atención de las Personas Privadas de Libertad*.
- Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. *Memoria y Balance de Actuación*. 1999.
- Pavarini, Massimo. *Los confines de la cárcel*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1995. *Proyecto de una Declaración Interamericana sobre los Derechos y la Atención de las Personas Privadas de Libertad*. 2000.
- Roballo, Juan. “Proceso Penal y Sistema Penal”. En *Entre Políticas Sociales y Políticas Criminales*. IELSUR. Montevideo, 1997. PP. 149 a 196.
- Semanario *Brecha*. 8 de marzo de 2002.
- Semanario *Estado de Derecho* N° 77. 8 de mayo de 2002.
- SERPAJ. *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* Montevideo, 1995.
- Uriarte, Carlos. *Control Institucional de la Niñez Adolescencia en Infracción*. Carlos Alvarez Editor. Montevideo, 1999.
- Versiones Taquigráfica de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Sesiones de los días 6 de abril de 2000, 23 de abril de 2000, 18 de mayo de 2000, 7 de setiembre de 2000, 3 de julio de 2001.
- Versión Taquigráfica del Grupo Tripartito de Derechos Humanos. Sesión del día 9 de mayo de 2002.
- Zaffaroni, Eugenio Raúl. *Política criminal latinoamericana. Perspectivas- Disyuntivas*. Editorial Hammurabi. Buenos Aires, 1982.
- Zaffaroni, Eugenio. “La cárcel. Abordaje histórico filosófico”. En: *Seminario sobre Cárceles en el Uruguay. Cárceles: ¿un quehacer de todos?* SERPAJ. Montevideo, 1995. PP. 101 a 113.
- Zaffaroni, Eugenio. “Los objetivos del sistema penitenciario y las normas constitucionales”. En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. PP. 181 a 194.
- Zaffaroni, Eugenio. “Sentido y justificación de la Pena” En *Jornadas sobre Sistema Penitenciario y Derechos Humanos*. Ediciones del Puerto. Buenos Aires, 1997. PP. 35 a 44.
- Zaffaroni, Eugenio. *Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina (Primer Informe)* Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1984.